

Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA (Reparto)
Santa Marta, Magdalena
E. S. D.

Medio de control:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante:	Proveedora Internacional de Taladros S.A.S
Representante legal:	Gonzalo E. Bolaños Forero
Demandado:	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Representante legal:	Director General (o quién haga sus veces)

RAFAEL EUGENIO VESGA PERÉZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.391.508 de Barichara y Tarjeta Profesional No. 217.064 del C.S.J., actuando en nombre de la sociedad **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S**, en adelante “la compañía” identificada con NIT 900.322.513-3, de conformidad con el poder anexo otorgado por su representante legal, comedidamente acudo a su despacho para presentar **DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en contra de la **NACIÓN**, representada por la **U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** (en adelante DIAN), conforme a las siguientes consideraciones:

I. HECHOS

- 1.1.** Con declaración de importación inicial autoadhesivo No. 07256270156943 del 14/01/2010, levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, la compañía Proveedora Internacional de Taladros S.A.S identificada con NIT 900.322.513-3 (en adelante el importador) sometió al régimen de importación temporal de corto plazo la mercancía amparada en esa declaración.
- 1.2.** En su momento, soportados en el contrato de arrendamiento internacional suscrito entre PIONER DRILLING SERVICE LTD y el importador se presentó declaración de importación tipo modificación con el objetivo de cambiar la modalidad temporal en el cual se encontraba sometida la mercancía, transformando la misma de la modalidad de corto a largo plazo al amparo de contrato de arrendamiento, el cual a la fecha tiene una vigencia de 12 años, vigencia que puntualmente se encuentra establecida entre el 04 de enero de 2010 hasta el 4 de enero de 2022.
- 1.3.** La modalidad temporal, fue amparada por las Pólizas de Cumplimiento de disposiciones Legales expedidas por la compañía aseguradora de fianzas S.A, y debidamente aceptadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que se identifican así: Inicial POLIZA DL004652 CERTIFICADO DL007814, Modificación POLIZA DL004652 CERTIFICADO DL008628, Modificación POLIZA DL007997 CERTIFICADO DL014783.
- 1.4.** Conforme a lo consignado en las Declaraciones de Importación, los bienes sometidos a la modalidad temporal, cuenta con certificación de maquinaria pesada para industrias básicas, que le permiten acceder a la exclusión de IVA contenida en el literal e del artículo 428 del Estatuto Tributario.
- 1.5.** Frente al Arancel, el mismo se liquidó en cuotas semestrales iguales, tal cual como lo define la normatividad aduanera, y se canceló en su momento mediante 10 cuotas semestrales.
- 1.6.** Antes del 04 de enero de 2020 (fecha de finalización de vigencia de la Póliza inicial), la compañía no presentó la renovación que ampara los cumplimientos puntuales que más adelante expondremos. En todo caso, el día 31 de enero de 2020 fue presentada la renovación de la garantía inicial, misma que fue rechazada por la DIAN con boletín de rechazo #03 del 31 de enero de 2020.

1.7. En base a lo anterior, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta resolvió proferir Requerimiento Especial Aduanero 0129 del 17 de junio de 2020, en el cual propone a la División de Gestión de Liquidación se sancione al importador Proveedora Internacional de Taladros S.A.S

1.8. La compañía Proveedora Internacional de Taladros S.A.S dio respuesta al REA mencionado, en el cual se exponían todos los argumentos de hecho y derecho frente a la conducta que se estaba tipificando, no obstante, la División de Gestión de Fiscalización resolvió confirmar lo expuesto en el REA y proferir la Resolución sanción No. 526 del 26 de octubre de 2020, mediante la cual resolvió:

“DECRETAR el incumplimiento al régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del 04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020”

1.9. Además de lo mencionado en el numeral anterior, se resolvió sancionar a la compañía que representó por presuntamente infringir en la conducta descrita en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, y a su vez resolvió afectar la póliza en la suma correspondiente a la sanción y al IVA.

1.10. El 24 de noviembre de 2020, la compañía radicó recurso de reconsideración en contra de la Resolución sanción No. 526 del 26 de octubre de 2020 el cual quedó radicado bajo el número 0003E2020026338, y en el que se expusieron nuevamente todos los argumentos de hecho y derecho frente a la conducta que se estaba tipificando, no obstante, la División de Gestión Jurídica resolvió confirmar la sanción tipificada en la Resolución sanción N. 526, esto a través de la Resolución No. 00108 notificada el 23 de febrero de 2021.

II. PRETENSIONES

PRIMERA. Que, conforme a los cargos expuestos en el presente medio de control, se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, mediante la cual se resolvió sancionar a la compañía PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S por la conducta tipificada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999 y a su vez se ordenó afectar la póliza en lo correspondiente al monto de IVA suspendido por la importación temporal.
- Resolución No. 00108 del 16 de febrero de 2021 proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, mediante la cual se confirmó la Resolución anterior.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las anteriores resoluciones y como parte del restablecimiento del derecho, se declare que la compañía no incumplió el régimen de importación temporal a largo plazo, y se ordene a la DIAN abstenerse de sancionar a la compañía por el presunto incumplimiento al régimen así como de afectar la póliza en la suma correspondiente al IVA suspendido.

TERCERA: Que, como parte del restablecimiento del derecho, se condene a la **NACIÓN**, representada por la **DIAN** a reconocer a la compañía las sumas en que hubiere incurrido por concepto de honorarios, gastos judiciales y todas las sumas necesarias para adelantar el presente proceso.

CUARTA: Que, como parte del restablecimiento del derecho, se condene a la **NACIÓN**, representada por la **DIAN**, a reconocer a la compañía los intereses moratorios que se causen, en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

III. NATURALEZA DE LA PRETENSIÓN

La presente demanda se instaura en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

4.1. NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA SANCIONATORIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA

Sobre este asunto en particular, señala el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008 respecto de la competencia funcional del recurso de reconsideración, que cuando la cuantía del acto de determinación de los impuestos que imponen la sanción sea superior a cinco mil (5.000) UVT, será la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos la encargada de fallar el recurso, a la vez que dicha norma, hace referencia al artículo 560 del Estatuto Tributario, el cual señala en su numeral 3:

ARTÍCULO 560 E.T. *Son competentes para proferir las actuaciones de la administración tributaria los funcionarios y dependencias de la misma, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política*

(...)

Tratándose de fallos de los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demás recursos cuya competencia no esté otorgada a determinado funcionario o dependencia, la competencia funcional de discusión corresponde:

(...)

3. Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior veinte mil (20.000) UVT, serán competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y dependencias del Nivel Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca. (Resaltado propio).

El numeral 3º del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008, cuenta con el siguiente tenor literal:

“CAPITULO V.

COMPETENCIA FUNCIONAL DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

ARTÍCULO 40. COMPETENCIA FUNCIONAL. *Para efectos de lo previsto en el artículo 560 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 44 de la Ley 1111 de 2006 los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones serán resueltos conforme a las reglas de competencia que se definen a continuación:*

(...)

3. Cuando la cuantía del acto de determinación de impuestos y que imponen sanción sea superior a cinco mil (5.000) UVT, será competente para fallar el recurso de reconsideración la Subdirección de Gestión Recursos Jurídicos.”

A su turno, el artículo 21 del Decreto 4048 de 2008, vigente el 25 de noviembre de 2020, cuando se presentó el recurso de reconsideración contra la resolución No. 526 de 26 de octubre de 2020, asignaba la competencia para decidir estos recursos a la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, así:

“ARTÍCULO 21. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS.

Son funciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, además de las dispuestas en el artículo 38 del presente decreto las siguientes:

(...)

2. Resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones cuya cuantía sea igual o superior a cinco mil (5.000) UVT; (..)” -resaltado fuera de texto-

Con base en las normas antes citadas, se evidencia la competencia funcional para resolver el recurso de reconsideración era de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos , División de Gestión Jurídica del Nivel Central de la DIAN, con sede en Bogotá y no de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, lo que hace evidente la nulidad de lo actuado por evidente falta de competencia.

El 25 de noviembre de 2020 se radicó el recurso de reconsideración por parte de la compañía que represento ante el Nivel Central, el cual fue remitido posteriormente en la Dirección Seccional de Santa Marta el 30 de noviembre, sin tener en cuenta que la competencia en razón de las normas precitadas, radica en los funcionarios del Nivel Central de la DIAN, tal como se argumentará en las siguientes líneas.

Ahora bien, en conexión con lo anterior y de acuerdo con lo señalado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, entidad que en los fundamentos de derecho y consideraciones para resolver del recurso de reconsideración, incluyó al Decreto 1742 de 22 de diciembre de 2020¹ como norma soporte del ejercicio de sus funciones, debemos anotar que, tanto a la luz del Decreto 4048 de 2008 o de su modificación por el Decreto 1742 de 2020, la competencia para resolver el recurso de reconsideración cuando la cuantía supera las 20.000 UVT², aun con las 5.000 UVT, el valor del proceso supera los dos montos, lo cual impide que se interpreten dichas normas para asignar la competencia a la mencionada Dirección Seccional. La competencia está y, en el transcurso del proceso de la sede administrativa, siempre ha estado en el Nivel Central de la DIAN en Bogotá, en la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.

Al revisar el Decreto 1742 de 2020 se advierte que el artículo 69 del precitado Decreto menciona:

ARTÍCULO 69. Competencia Funcional. *De conformidad con el artículo 560 del Estatuto Tributario, los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de impuestos, incluidas las sanciones impuestas, los que imponen sanciones, los que deciden sobre las solicitudes de devolución y/o compensación, y los actos en materia cambiaria, que sean de competencia de la DIAN, serán resueltos conforme a las reglas de competencia que se definen a continuación (...)*

PARÁGRAFO TRANSITORIO. *Las competencias en razón de la cuantía dispuestas en este artículo aplicarán respecto de los recursos de reconsideración y revocatorias directas que sean interpuestas a partir de la vigencia del presente Decreto. La Subdirección de Recursos Jurídicos mantendrá la competencia para resolver los recursos de reconsideración y revocatorias directas que se hubieren radicado en el Nivel Central hasta la fecha de publicación del presente Decreto.*

Cuando la cuantía del acto de determinación de impuestos, incluidas las sanciones impuestas, los que imponen sanciones, los que deciden sobre las solicitudes de devolución y/o compensación y los actos en materia aduanera y cambiaria objeto de recurso de reconsideración que sea igual o superior a veinte mil (20.000) UVT, será competente para fallar el recurso de reconsideración la Subdirección de Recursos Jurídicos del Nivel Central. (Resaltado propio).

El cargo de nulidad de la presente demanda aflora con la simple comparación de las normas mencionadas y los hechos narrados, lo que invalida cualquier tipo de actuación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, por la pretermisión de una etapa del proceso como es la decisión del recurso de reconsideración, de la violación del derecho de defensa y de audiencia al resolverse el recurso por una dependencia que carecía totalmente de competencia para ello.

Para el caso en comento, la determinación de la sanción y el monto por IVA liquidado corresponde a **CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO SESENTA PESOS (\$4.269.439.260)**, es decir una suma superior a los veinte mil (20.000) UVT previstos en la norma, por lo que la competencia funcional para interponer este tipo de sanciones corresponde a la Subdirección de Recursos Jurídicos del Nivel Central, y no la Dirección

¹ Derogatorio del Decreto 4048 de 2008 y el cual modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

² La UVT para el año 2020 fue determinado en \$35.607,00 cada una. 20.000 UVT = \$712.140.000,00

Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, como erróneamente se desprende de lo contenido en la Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 y la Resolución No. 00108 del 16 de febrero de 2021, ambas expedidas por dicha entidad.

Así las cosas, se resalta que la falta de competencia es uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, tal y como se señala en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que precisa que dichos actos serán nulos cuando “hayan sido expedidas con infracción de las normas en que debería fundarse, o sin competencia, en forma irregular o con desconocimiento del derecho de defensa y audiencia o mediante falsa motivación...”

Así mismo, el tratadista Orlando Santofimio³, establece que la falta de competencia es uno de los vicios invalidantes que son externos al acto administrativo pues la falsedad reposa sobre el sujeto que expide la decisión pues el ordenamiento jurídico no le ha reconocido aptitudes para actuar como portador del sentir estatal. En tal sentido, la falta de competencia resulta mérito suficiente para que el acto jurídico que bajo esta se profiera, tenga como consecuencia su nulidad y de suyo la falta de reconocimiento jurídico.

Sobre este vicio en particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado a través de Sentencia 47693 de 19 de septiembre de 2016, preciso que el desconocimiento de las competencias vulnera a todas luces el derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, lo cual hace nulos todos los actos administrativos que desconozcan el derecho a la defensa.

Debido a lo anterior, las razones que niegan el derecho a la defensa deben ser suficientes para que los actos administrativos expedidos sin las debidas competencias sean declarados nulos por el juez, pues estos son producto de la desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Este abuso de poder atenta contra las finalidades de un orden constitucional, desconociendo la objetividad que debe imperar en todas las etapas del proceso⁴.

4.2. FALSA MOTIVACIÓN. LA AUTORIDAD ADUANERA INTERPRETA ERRÓNEAMENTE QUE LA OMISIÓN DE RENOVAR LA GARANTÍA ANTES DE SU FINALIZACIÓN, CONLLEVA A LA TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN TEMPORAL

La motivación de los actos administrativos constituye uno de los elementos de validez, motivación que debe darse atendiendo a las reales circunstancias de hecho y de derecho, las cuales constituyen la causa o motivo del mismo. La motivación de un acto no puede de ninguna manera obedecer a razones caprichosas por parte de quien expide el acto.

Específicamente frente a la falsa motivación el Consejo de Estado plantea en qué casos se configura:

*“Se indica que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación. por ello, se explica que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por ello, el impugnante tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad. según lo precedente, se afirma que la falsa motivación del acto ocurre cuando: (i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) **porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen** y (iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.”⁵*

Delimitados los casos en específico en que se configura la falsa motivación, tenemos que en el presente caso se presenta el vicio de nulidad mencionado, por cuanto la Dirección

³ SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Acto Administrativo. 4º ed., 2003, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 264.

⁴ Constitución Política de Colombia. artículos 2, 123 y 209.

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Rad: 250002324000200800265-01. 14 de abril de 2016.

Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta interpreta erróneamente que la omisión de presentar la renovación a la garantía antes de su finalización, implica indefectiblemente que la modalidad de importación temporal a largo plazo deberá terminar.

En efecto la Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta afirmó en su momento en el REA lo siguiente:

“(...) aunque el contrato de arrendamiento financiero leasing internacional que soporta la modalidad de importación temporal, celebrado entre Pioneer Drilling Services Ltd y proveedora internacional de taladros termina el 04/01/2022, establece el artículo 153 del decreto 2685 de 1999 que la importación temporal autorizada debe estar garantizada a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 147 del decreto 2685 de 1999 (...)”

Y más adelante señaló:

“(...) las normas no contemplan excepción alguna, ni eximen de responsabilidad al importador, por el contrario, es precisa en cuanto a que la modificación del término y la modalidad debe efectuarse antes del vencimiento del plazo señalado en la Declaración de Importación y en el contrato modificador (...)”

Por su parte en la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la Resolución sanción se dijo lo siguiente:

“La declaración de importación autoadhesivo No. 07256290176821 (...), la cual el importador declara bajo la modalidad de importación temporal de mercancías en arrendamiento, claramente señala en su contenido, que su finalización ocurriría el 04 de enero de 2020 no obstante que existía un contrato de arrendamiento con otra sociedad cuya finalización era el 04 de enero de 2022. (...)”

Como se observa, la Autoridad aduanera en los distintos actos emitidos ha reconocido que el contrato financiero leasing que soporta la modalidad de importación temporal finaliza el 04 de enero de 2022.

Es decir que si aplicamos al caso el inciso cuarto del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, resulta viable concluir que la mercancía podía permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, sin que la permanencia de la misma este supeditada a que la garantía se renueve antes la finalización del plazo de la modalidad .

Precisamente el inciso cuarto del artículo mencionado dispone que las mercancías sometidas a contratos de arrendamiento podrán permanecer en el territorio nacional bajo la modalidad temporal **por el término de vigencia del contrato**, siempre y cuando, el importador haya cancelado la totalidad de los tributos aduaneros a más tardar en la décima cuota semestral, es decir, en un término no superior a los 5 años contados a partir de la presentación y aceptación de la declaración de importación a largo plazo, veamos:

“Artículo 153. Importación temporal de mercancías en arrendamiento. (...) Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este período, se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.”

Como se observa, de manera clara la norma estipula que la mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, de ninguna manera establece que aun cumpliendo con el pago del saldo de tributos aduaneros, **la mercancía SOLO podrá permanecer en el territorio aduanero nacional si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial.**

Esta condición que pretende imponer la Autoridad aduanera riñe con el sentido gramatical o literal de la norma, ordenado por el artículo 27 y 28 del Código Civil que expresan:

“ARTÍCULO 27. Interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

ARTÍCULO 28. Significado de las palabras. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero

cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.”

Aplicando el método de interpretación gramatical o literal al inciso cuarto del artículo 153, podemos demostrar que la norma de alguna manera prohíbe que la mercancía permanezca en el territorio aduanero cuando NO se cumple la obligación a la cual está supeditada su permanencia, veamos la interpretación del artículo 153:

Evento: La duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años.

Obligación: pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados con la última cuota correspondiente a este período.

Derecho obtenido: La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato

CONTRARIO SENSU, se prohibiría la permanencia de la mercancía si se da lo siguiente:

Evento: La duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años.

Obligación incumplida: NO se paga el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados con la última cuota correspondiente a este período.

Prohibición: La mercancía NO podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato

Como vemos de una manera sencilla y aplicando el método de interpretación gramatical, la única condición que permite limitar o prohibir la permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional, **es que no se haya pagado el saldo de tributos aduaneros**.

Por tanto, aceptar la tesis planteada por la Autoridad aduanera referente a que la mercancía solo podrá permanecer en el territorio aduanero nacional, si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial, sería aceptar una nueva obligación susceptible de desencadenar una prohibición o limitación a un derecho, lo cual desconoce que las normas prohibitivas deben estar claramente determinadas en la Constitución y la Ley. así lo deja claro la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que expresa:

*“La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, coinciden en que **las normas que establecen prohibiciones deben estar de manera explícita en la Constitución o en la ley** y no podrán ser excesivas ni desproporcionadas (...) En consecuencia, la interpretación y aplicación restrictiva es una regla que rige tratándose de normas prohibitivas, **dado que consagran limitaciones al ejercicio de un derecho** o de competencias señaladas en la ley, criterio hermenéutico que responde al principio de taxatividad, de acuerdo con el cual **solo operan las prohibiciones que en forma precisa establece el legislador.**”⁶*

Como se observa, ante normas que consagren limitaciones al ejercicio de un derecho, su interpretación y aplicación debe ser restrictiva, esto es, se debe atender a su tenor literal.

Para el presente caso, el sentido contrario del inciso 4 del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, **permite entender que se limita el ejercicio del derecho a que las mercancías permanezcan en el territorio aduanero nacional, cuando NO se cumple la condición de pagar el saldo de tributos aduaneros**.

Adicionar entonces otra condición, sería realizar una aplicación extensiva que como dijimos no se permite en las normas que consagran limitaciones al ejercicio de un derecho.

Ahora bien, en el presente caso tenemos que tal y como se prueba en los antecedentes, los tributos aduaneros que se causaron a raíz de la importación temporal (gravamen arancelario) fueron debidamente cancelados dentro de los términos establecidos por la norma, en ese orden de ideas, se cumple con la condición establecida por el artículo citado en el párrafo anterior y por lo tanto procede que los bienes permanezcan durante el término del contrato sometidos a la modalidad temporal, nótese que en la Declaración de Importación cuestionada, se informa la fecha de terminación del contrato, misma que a hoy aún se encuentra vigente.

⁶ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero Ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013). Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00407-00

En ese orden de ideas, es claro que no se ha cumplido el término para la finalización de la modalidad de importación temporal a largo plazo, por cuanto la fecha de terminación del contrato de arrendamiento aún se encuentra vigente.

Ahora bien, otro argumento señalado por la Seccional se contrae en afirmar que la norma es precisa en cuanto al término que se tiene para modificar la modalidad de importación temporal, la cual debe efectuarse antes del vencimiento del plazo señalado en la Declaración de Importación y en el contrato modificatorio.

En efecto, si revisamos el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, encontramos lo siguiente:

“ARTICULO 150. MODIFICACIÓN DE LA MODALIDAD. Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, modificar la declaración de importación temporal a importación ordinaria o con franquicia y obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía, pagando, cuando fuere del caso, la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, los intereses pertinentes y la sanción a que haya lugar.

Ante el incumplimiento de esta obligación, (...)

En caso de importaciones temporales a largo plazo, se proferirá acto administrativo declarando el incumplimiento y ordenando hacer efectiva la garantía en el monto correspondiente a las cuotas insolutas, más los intereses moratorios y el monto de las sanciones correspondientes previstas en el artículo 482-1 del presente decreto, dentro del proceso administrativo previsto para imponer sanciones. (...)

De la lectura de la norma, entendemos que la Autoridad aduanera quiso aplicar al presente caso la consecuencia de incumplimiento descrita en el aparte subrayado, desconociendo que la condición para aplicar tal consecuencia de incumplimiento, es que se haya decidido dejar la mercancía en el territorio aduanero nacional y que antes del vencimiento del plazo de la importación temporal no se haya efectuado la modificación a importación ordinaria o con franquicia.

Sin embargo, de la conducta ejercida por la compañía se puede evidenciar que su intención no era que se cambiara la modalidad de temporal a ordinaria, pues en primer lugar se renovó la garantía inicial y la misma fue presentada ante la DIAN el 31 de enero de 2020, y en segundo lugar, en la declaración de importación cuestionada se informa la fecha de terminación del contrato, misma que a hoy aún se encuentra vigente. En ese orden de ideas, es claro que no se ha incumplido el término para la finalización de la modalidad de importación temporal a largo plazo.

Nuevamente se demuestra que la Autoridad aduanera desconoce el sentido gramatical del inciso primero del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, que señala que la modificación se deberá efectuar antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, y no antes del vencimiento de la póliza inicial.

Además, tal y como la misma norma lo dispone (literal c del artículo 156 del Decreto 2685 de 1999), para que la terminación se dé por parte de la autoridad aduanera de oficio, se deben cumplir los términos definidos en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

De una lectura detenida del artículo 150, notamos que los supuestos para que, en este caso proceda la terminación por parte de la autoridad aduanera son los siguientes:

- 1) Cuando se tipifique alguna de las infracciones previstas en el Art. 482-1: Situación que no se cumple en el presente caso por los motivos anteriormente expuestos. y;
- 2) Cuando ejercida la opción de compra, el importador no dé por terminada la modalidad temporal a largo plazo: Esta situación tampoco se ha dado.

Las dos situaciones anteriormente descritas no se tipifican en la operación que se cuestiona en el presente recurso, entonces, no entendemos de donde nace la interpretación extensiva de la normatividad, para que se pretenda de oficio terminar la modalidad temporal, declarar el incumplimiento por parte del importador consagrado en el numeral 1.3 del Artículo 482 y a su vez, hacer efectiva la garantía expedida por la aseguradora no sólo por el valor de la

sanción, si no por el valor del IVA, que técnicamente a la fecha de la expedición del acto administrativo no se ha causado.

Ahora bien, los argumentos empleados en la Resolución sanción para decidir confirmar la sanción contenida en el numeral 1.3 del artículo 482.1 del Decreto 2685 de 1999, no desvirtúan de ninguna manera los cargos que se expusieron en la respuesta al REA.

Llama la atención que ni en la Resolución sanción ni en la que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN no realiza un estudio coherente en contra del argumento de falsa motivación, únicamente refiere en la primera lo siguiente:

“En una importación temporal de mercancías en arrendamiento que supera los 5 años, el objeto asegurable en la renovación de la póliza al finalizar el quinto año, será el de responder por la terminación de la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado, antes del vencimiento del plazo de la importación, y el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del decreto 2685 de 1999”

Y señala más adelante:

“Resulta igualmente lógico que el objeto será el de responder por la terminación de la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado, antes del vencimiento del plazo de la importación”

Como se observa, la DIAN intenta desvirtuar nuestro argumento referente a que: **“LA AUTORIDAD ADUANERA INTERPRETA ERRÓNEAMENTE QUE LA OMISIÓN DE RENOVAR LA GARANTÍA ANTES DE SU FINALIZACIÓN, CONLLEVA A LA TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN TEMPORAL”**, con interpretaciones que nada tienen que ver con lo que discute en el presente caso.

Aquí no se está discutiendo en cuanto debe ser el monto de la garantía de mercancías en arrendamiento que superan los 5 años, y cuál es el objeto asegurable, aquí lo que se discute es el derecho de una mercancía en arrendamiento de permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.

La autoridad aduanera decreta el incumplimiento y la efectividad de la garantía por, supuestamente, ocurrir el incumplimiento por parte del importador al no renovar oportunamente la garantía, pero se olvida del texto del inciso primero del artículo 150 antes citado que contiene como obligación de realizar la modificación de importación temporal a ordinaria antes del VENCIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN TEMPORAL, no antes de la vigencia de la garantía. El tenor de la norma es muy claro, así:

“Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal,...” -resaltado fuera de texto-

El querer del legislador fue cambiado por los actos demandados, porque la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía se motivó en el supuesto vencimiento de la garantía, pero estando vigente la importación temporal. Es decir, se dejó de aplicar el inciso primero del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, lo que, además, configura la causal de nulidad de los actos administrativos de violación directa de la ley por interpretación errada de la mencionada norma.

En los actos demandados no se cita, porque no existe, norma alguna que permita declarar el incumplimiento y la efectividad de la garantía por la renovación de la garantía, durante la vigencia de la importación temporal, pero luego de cumplido el término de vigencia. Atendiendo la normativa del contrato de seguros del Código de Comercio no constituye irregularidad alguna renovar o constituir una nueva póliza luego de cumplida la vigencia del seguro original. No se debe olvidar que, en el presente caso la póliza fue renovada pero no aceptada por la Administración.

Aunado a lo anterior, es pertinente además indicarle respetuosamente a la Autoridad aduanera, que de la lectura del numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, no se advierte que allí se tipifique una conducta referente a que la póliza debía ser renovada en un monto equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 mencionado, con lo cual no se entiende por qué la División de Gestión de Liquidación emplea este argumento para terminar por tipificar una conducta que como se demostrará a lo largo del documento para el caso que nos ocupa no se cumple.

Finalmente, resulta pertinente citar que la terminación de la modalidad temporal se da en los casos expresamente señalados en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999 el cual define:

(...) “a) La reexportación de la mercancía;

b) La importación ordinaria o con franquicia, si a esta última hubiere lugar;

c) La modificación de la declaración de importación temporal a importación ordinaria realizada por la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas competente en los términos previstos en el artículo 150 del presente decreto;

d) La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera;

e) La legalización de la mercancía, cuando a ella hubiere lugar” (...)

Ninguna de las anteriores situaciones se cumplen en el caso que nos ocupa. Además, si bien la Autoridad aduanera pretende dar al parecer aplicación al literal c, como ya se explicó anteriormente no se cumplen los supuestos del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

En ese orden de ideas, resulta claro que la Autoridad aduanera le está dando a los motivos de hecho y derecho un alcance que no tienen, incurriendo en un vicio de falsa motivación, por las razones que se resumen a continuación:

- a. Hace una interpretación extensiva del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, al considerar que la mercancía **SOLO** podrá permanecer en el territorio aduanero nacional si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial. Es decir que, impone una nueva condición para limitar un derecho (el de disposición de las mercancías), lo cual no resulta posible a la luz de la jurisprudencia nacional.
- b. Frente a las consecuencias del incumplimiento en la modificación a la importación temporal, señaladas en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, **la DIAN está creando un nuevo evento para que se den tales consecuencias**, el cual es que el importador no haya modificado la modalidad antes del vencimiento de la garantía inicial.
- c. Emplea en la Resolución sanción un argumento ajeno a lo que se está discutiendo o que no guarda relación directa, pues afirma que en una importación temporal de mercancías en arrendamiento que supera los 5 años, el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del decreto 2685 de 1999. Cuando aquí no se está discutiendo en cuanto debe ser el monto de la garantía de mercancías en arrendamiento que superan los 5 años, y cuál es el objeto asegurable.

4.3. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD – VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD

El principio de tipicidad se fundamenta en el artículo 29 constitucional que al respecto señala que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, lo cual significa que debe existir una correlación entre las conductas reprochables y la sanción.

En ese sentido, la pena o sanción a ser impuesta debe preexistir al hecho infractor. Al respecto, la jurisprudencia nacional ha delimitado los elementos necesarios para que se configure la tipicidad administrativa, los cuales son:

“ (...) (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley; (iii) **Que exista correlación entre la conducta y la sanción** (...)”⁷. (Negrita fuera de texto original).

⁷ Sentencia C-713 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. Bogotá, 12 de septiembre de 2012.

En el presente caso, consideramos que no se cumple con el requisito del numeral 3 por las razones que se exponen a continuación.

El Requerimiento Especial Aduanero, la Resolución sanción y la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, tipifican en la operación cuestionada de manera errónea la infracción aduanera contenida en el numeral 1.3 del Art. 482-1 del Decreto 2685 de 1999, misma que dispone:

“ARTÍCULO 482-1. INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS DECLARANTES EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.

(...) 1.3 No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando se hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros correspondientes. La sanción aplicable será de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)” Subrayas nuestras.

Como se puede observar, la infracción aduanera tipificada procede en el evento que el importador no termine la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la misma, situación que no sucede en la operación que nos ocupa.

Además, como se indicó en el cargo anterior, en el caso que nos ocupa la terminación de la modalidad de importación temporal ocurre si y solo si, se cumple con alguno de los eventos señalados en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999.

Y en el evento del literal c del artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, que es el que aplica la DIAN para el caso, tampoco se cumple, pues se evidencia que no era intención de la compañía que se cambiara la modalidad de temporal a ordinaria, ya que se renovó la garantía inicial y la misma fue presentada ante la DIAN el 31 de enero de 2020, y en segundo lugar, en la declaración de importación cuestionada se informa la fecha de terminación del contrato, misma que a hoy aún se encuentra vigente.

Aquí lo que ocurrió fue que no se presentó la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial, situación que en todo caso no implica que se deba terminar la modalidad de importación temporal, pues la norma no permite hacer interpretaciones más allá de su sentido literal.

Siendo así, en el presente caso lo que pretende la Seccional de Impuestos y Aduanas es endilgar una conducta a mi representada, basada en interpretaciones extensivas de los artículos 150 y 153 del decreto 2685 de 1999, lo cual riñe con los principios que rigen la función administrativa, especialmente el contenido en el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019, que señala:

Principio de prohibición de la analogía. No procede la aplicación de sanciones, ni de causales de aprehensión y decomiso, por interpretación analógica o extensiva de las normas

Nótese como en el presente caso, aparentemente el despacho desconoce la prohibición expresa consagrada en la norma invocada, al interpretar de manera extensiva la infracción contenida en el numeral 1.3 del Art. 482-1 del Decreto 2685 de 1999. Pues define sin sustento normativo alguno, que la no renovación de la garantía da lugar a la terminación inmediata del régimen temporal al cual se encuentran sometidos los bienes, condición que no se encuentra de manera expresa dentro del Decreto 2685 de 1999.

Ahora bien, la Autoridad aduanera señala lo siguiente en la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración:

“Aquí es necesario precisar, en atención a la norma contentiva de la sanción recurrida, que el plazo vencido definido para la imposición de dicha multa, es la determinada en la declaración de importación, la cual claramente estaba estipulada para el 4 de enero de 2020. La norma en mención, como equivocadamente lo sostienen los recurrentes, en parte alguna sujeta el plazo de vencimiento de la modalidad, al término de duración del contrato. (...) No debe confundirse el plazo de la permanencia de la mercancía en el territorio nacional, con el plazo de vencimiento de renovación de la póliza, así como el plazo de terminación declarada de la modalidad”

De lo señalado por la Autoridad se indica que la figura del arrendamiento de por sí presupone la temporalidad de la mercancía en el país, siendo entonces que si es el mismo artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, el que establece que en la importación temporal de mercancías en arrendamiento la mercancía puede permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, es porque precisamente la temporalidad iría hasta la fecha de terminación del contrato. Es decir que en otras palabras el plazo de la importación temporal debería seguirse hasta la fecha de terminación del contrato.

Otra cosa es que la Autoridad pretenda supeditar la temporalidad de la mercancía en el país a la renovación de la póliza antes del vencimiento de la anterior. Pues como bien dice la DIAN, no se puede confundir el plazo de permanencia de la mercancía en el territorio, con el plazo de vencimiento de renovación de la póliza, así como el plazo de terminación declarada de la modalidad.

Además, es en la misma Resolución sanción donde la DIAN afirma que la razón de tipificar la conducta del numeral 1.3 obedece a que no se modificó la garantía específica antes del 04 de enero de 2020, a pesar de que reconoce que la compañía si presentó una garantía expedida retroactivamente. Es decir que impone la sanción con el único argumento de que no se presentó la renovación de la garantía antes del 04 de enero de 2020, confundiendo el plazo de renovación de la póliza con el plazo de terminación de la modalidad, veamos:

“En razón a que la mercancía ingresada bajo importación temporal de mercancías en arrendamiento financiero no le fue modificada la garantía específica establecida en el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999,(...) la cual garantizaba la modalidad de importación hasta el 04 de enero 2020 y que con boletín de rechazo #01 de 31 de enero de 2020, fue rechazada la garantía #01DL023306, la cual fue presentada extemporáneamente el 31 de enero de 2020 y expedida retroactivamente el 29-01-2020 (...) Ante el firme hecho generador de posible incumplimiento por parte del importador antes citado; debido a que la importación temporal no le fue modificada la garantía establecida en el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, antes del vencimiento de las mismas, dejando la importación temporal sin garantía como requisito de la importación temporal de mercancías en arrendamiento, documento sin el cual no es posible la importación temporal”

Como se observa, lo que la DIAN cuestiona es la omisión de no presentar la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial, y lo que el numeral mencionado tipifica, **es la omisión a terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la importación**, de ninguna manera este numeral tipifica la conducta realizada por la compañía, consistente en NO presentar la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial.

Al respecto de la manera como se pretende imponer la sanción en el presente caso, la Doctrina⁸ ha dicho con fundamento en la sentencia C-922 de 2001, que se actuaría arbitrariamente y por lo tanto estaría viciada de inconstitucionalidad o ilegalidad, **cualquier sanción que se impone sin estar la conducta conforme a la descrita en la norma**, como en efecto ocurre en el caso estudiado, siendo viable concluir que la sanción impuesta es abiertamente ilegal.

Además, resulta pertinente recordar que según el artículo 29 Constitucional *“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistente al acto que se le imputa”*, en ese sentido debe existir una correlación entre la conducta reprochada y la consecuencia sancionadora a la misma, lo cual no puede ser desconocido por el operador que aplique la infracción.

Por otro lado, la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de la “Lex praevia”, la cual implica que la pena o sanción a ser impuesta debe preexistir a los hechos y conductas infractoras, en el presente caso la conducta consistente en *“No presentar la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial”* no preexiste a la sanción que se pretende imponer, lo cual reafirma la violación al principio de tipicidad.

Lo argumentado se reafirma con lo que la misma DIAN señaló en la Resolución sanción, en donde dijo lo siguiente para intentar desvirtuar el cargo de violación al principio de tipicidad:

“Queda demostrado pues, en conclusión de la doctrina expuesta, que hay una obligación por parte del importador al momento de modificar el plazo de la importación temporal, para el caso que nos ocupa, modificar la garantía, de tal

⁸ Compendio de Derecho Administrativo. Jaime Orlando Santofimio. Universidad Externado de Colombia.

manera que cubra el tiempo por la que le fue autorizado la permanencia de la mercancía en el territorio nacional de tal manera que existen obligaciones por parte del importador, cuyo incumplimiento se encuentra tipificado”

Como se observa, la DIAN asevera que el incumplimiento a la obligación de “*modificar la garantía de tal manera que cubra el tiempo por la que le fue autorizado la permanencia de la mercancía en el territorio nacional*”, se encuentra tipificado en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, sin embargo si se compara la obligación que refiere la DIAN con la obligación que se menciona en el numeral 1.3 del artículo 482-1, se advierte que NO son las mismas obligaciones, veamos:

Obligación mencionada por la DIAN	Obligación del numeral 1.3 del artículo 482-1
Modificar la garantía, de tal manera que cubra el tiempo por la que le fue autorizado la permanencia de la mercancía en el territorio nacional.	Terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la importación

Además, la misma DIAN afirma en uno de los apartes de la Resolución sanción lo siguiente: “*Vale la pena resaltarle al usuario, que las normas no contemplan excepción alguna, ni eximen de responsabilidad al importador, por el contrario, es precisa en cuanto a que **la modificación del término y la modalidad debe efectuarse antes del vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación y en el contrato modificadorio***”, con lo cual reconoce que la conducta del numeral 1.3 del artículo 482-1 ocurre en el caso de que no se haya modificado la modalidad de importación temporal para reexportación, antes del vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación y en el contrato modificadorio, **y no antes del vencimiento de la póliza inicial.**

En ese sentido, consideramos que no se cumple el tercer elemento para que se configure la tipicidad administrativa, por cuanto:

- i. La conducta sancionada, no terminación de la modalidad temporal dentro del término, no se adecua a los hechos que se cuestionan, pues como lo hemos expuesto, a la fecha, el bien amparado en la declaración de importación temporal a largo plazo podrá permanecer (bajo esta modalidad) en el territorio aduanero nacional, hasta la finalización del contrato de arrendamiento, es decir hasta el 04/01/2022.
- ii. Siendo lo anterior una realidad, tenemos que no existe entonces una correlación entre la conducta y la sanción, pues se cuestiona la no finalización dentro del término de una declaración que claramente se encuentra vigente y amparada en debida forma en un contrato. Y que además a hoy existe una póliza vigente la cual fue presentada el 31 de enero de 2020 y expedida retroactivamente.

3.4. INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍA FUNDARSE EL ACTO ADMINISTRATIVO POR: A.) IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA; B.) FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD TRIBUTARIA Y DE LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL

En primer lugar, es preciso indicar que la denominada “infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo” es una causal de nulidad de los actos administrativos.

Esta causal incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual de principios, normas constitucionales y legales aplicables a cada acto administrativo, **lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema.**

Al respecto de la causal de infracción de las normas, el Consejo de Estado ha reconocido los eventos en los cuales se configura, así:

“(…) ocurre cuando se configura una de las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea. (...) Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así,

*erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde. (...)*⁹ (Negrita fuera del texto original)

En ese sentido, tenemos que en el presente caso se configuran dos de las situaciones descritas por la jurisprudencia para que se dé la causal de infracción de las normas, estas son, falta de aplicación e interpretación errónea las cuales se exponen a continuación.

A. INTERPRETRACIÓN ERRÓNEA. IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA POR NO CUMPLIRSE LOS SUPUESTOS DE HECHO NECESARIOS.

La DIAN en la Resolución sanción señala lo siguiente:

*“ Se concluye entonces, que a la fecha de proferir la presente actuación administrativa, ni en la respuesta radicada no se ha demostrado y/o aportado documento aduanero alguno que demuestren que la importación temporal enunciada se dio por terminada en debida forma (...) razón por la cual este despacho decreta el incumplimiento al régimen de importación temporal, a la sociedad PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S, en calidad de **importador y como consecuencia ordena la efectividad de la garantía enunciada por los montos de los tributos aduaneros y sanciones que se deriven de esta** como consecuencia de su incumplimiento dentro del proceso administrativo previsto para imponer sanciones, en relación a la presunta infracción reglada en el numeral 1.3 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999”*

Como se observa, la DIAN aduce que al no cumplirse la obligación de terminar la importación temporal, debe necesariamente hacerse efectiva la póliza.

Frente al momento en que se debe hacer efectiva la póliza, conviene revisar el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, en donde se plantea que montos cubre la garantía y la fecha cierta en la que debe hacerse efectiva, fecha que según la DIAN opera en el momento que no se cumpla la obligación de terminar la importación temporal.

“ARTICULO 147. GARANTÍA. La autoridad aduanera exigirá la constitución de una garantía a favor de la Nación, por el ciento cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto de responder, al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación, por la finalización de la modalidad con el pago de los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, la garantía se constituirá con el objeto de responder, al vencimiento del quinto año o al vencimiento del término para la cancelación de la cuota correspondiente a la mitad del plazo de los cinco (5) años, por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

En ambos casos, el objeto de la garantía también comprenderá los tributos aduaneros, intereses y sanciones que se generen por el incumplimiento de la obligación prevista en el inciso segundo del artículo 149 del presente decreto

La garantía se constituirá en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cuando se trate de mercancías importadas temporalmente para reexportación en el mismo Estado, la garantía se constituirá por el 10% del valor CIF de la mercancía cuando tenga exención total de tributos aduaneros y por el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los tributos aduaneros a pagar cuando se trate de exención parcial.

Para la importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, culturales o recreativos no se exigirá la constitución de garantía”.

PARÁGRAFO. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse efectiva cuando la autoridad aduanera determine el incumplimiento en cualquiera de las

⁹ Consejo de Estado. Sección Cuarta. 15 de marzo de 2012. C.P: Hugo Fernando Bastidas. Radicación número: 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660)

cuotas que se hayan causado hasta la mitad del plazo de importación señalado en la declaración.”

De la norma transcrita, tenemos que los eventos que se contemplan para que la garantía se haga efectiva son los siguientes:

- a. Al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación, por la finalización de la modalidad con el pago de los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.
- b. Al vencimiento del quinto año, para responder por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.
- c. Al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado.

Como se observa, de los eventos que se plantean para hacer efectiva la garantía, en ninguno se contempla que esta se hará efectiva en el caso de que la garantía inicial no se haya renovado antes de su vencimiento.

Por lo cual, se presenta la imposibilidad jurídica de hacer efectiva la garantía, en tanto los supuestos de hecho del caso en estudio no se adecuan a los eventos que describe la norma como susceptibles de que se haga efectiva la garantía.

Veamos a continuación las razones de porque no se cumplen ninguno de los eventos descritos:

- a. **Hacer efectiva la garantía al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación:** Este evento no podría cumplirse en el presente caso, ya que este es un hecho futuro, el cual a la fecha de la expedición de la Resolución sanción no se ha cumplido, y a su vez, se está amparando en la renovación de la garantía que a la fecha se encuentra pendiente por aceptación del Despacho, en este orden de ideas, durante el término de no presentación de la renovación no se pusieron en riesgo los intereses del estado, pues no se tipificó ninguna causal expresamente señalada para que se diera la finalización de la modalidad. A la fecha los intereses del estado relativos en lo que tienen que ver con la finalización de la modalidad de importación, se deben garantizar en el momento que se cumpla la condición es decir el **04/01/2022**, mismos que se encuentran amparados en la póliza de cumplimiento que se ha radicado en su despacho y ha sido rechazada prevaleciendo una formalidad que el verdadero derecho sustancial.
- b. **Hacer efectiva la garantía al vencimiento del quinto año, para responder por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar:** Reiteramos que tal y como se prueba, el pago de las respectivas cuotas de los tributos aduaneros causados en virtud de la importación temporal, fueron cancelados dentro de los términos establecidos por el importador, de igual manera, dentro de ese tiempo la garantía aprobada gozaba de plena vigencia.
- c. **Al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado:** Como se informó en el literal anterior, en el presente caso no se ha incumplido con el pago de ninguna de las cuotas respectivas que se causaron.

Así las cosas, es claro que en el presente caso no se cumplen ninguno de los eventos que la norma ha establecido como desencadenantes de que se haga efectiva la garantía constituida.

Es por eso que, si bien la Seccional de Impuestos y Aduanas emplea el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999 para revisar si la garantía debía hacerse efectiva, situación con la que estamos de acuerdo dado que este artículo resolvería el caso en particular, en lo que nos encontramos en desacuerdo es que la DIAN aplique equivocadamente el artículo mencionado, al asignarle un alcance que no le corresponde, pues en últimas está creando a su arbitrio un evento más para que se entienda que la garantía debe hacerse efectiva.

Este evento sería: **“La garantía debe hacerse efectiva en el momento en que la póliza inicial no haya sido renovada antes de su vencimiento”**. El evento descrito de ninguna manera se encuentra contenido dentro del artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, y mucho menos dentro de los artículos que regulan la importación temporal.

Es por eso que, la razón para considerar que hay un vicio de nulidad de “infracción de las normas en que debió fundarse el acto administrativo”, corresponde a que, si bien la DIAN aplica el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999 para resolver el caso, también es cierto que le da un alcance a la norma que no tiene al realizar una interpretación indebida del artículo, pues encuadra el supuesto de hecho del caso consistente en que la póliza no se renovó antes de su vencimiento, en unos eventos que como se describieron en los párrafos anteriores nada tienen que ver con el que se discute en el caso de estudio.

B. FALTA DE APLICACIÓN DEL (I) PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD TRIBUTARIA Y (II) DE LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL.

Como se refirió en el preámbulo del cargo, la infracción de las normas en que debe fundarse el acto, implica que se debe confrontar el acto no solo con normas legales, sino también con principios y normas constitucionales que puedan aplicarse al caso, en tanto estas son la base y esencia del sistema.

En ese sentido, por falta de aplicación tenemos que en el presente caso la DIAN vulnera el principio de justicia y equidad tributaria, al igual que la máxima general referente a la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en todo proceso administrativo.

(I) Falta de aplicación del principio de justicia y equidad tributaria

El principio constitucional de justicia tributaria no permite que se impongan previsiones incompatibles con la defensa de un orden justo, y garantiza que no haya una injusta distribución de la carga fiscal¹⁰. Este principio general contiene el principio de equidad tributaria.

Este último es definido por la Corte Constitucional como aquella expresión concreta del principio de igualdad en el sistema tributario. El contenido de este principio refiere a la prohibición de que se impongan obligaciones excesivas o beneficios desbordados al contribuyente¹¹.

Por su parte, en el Decreto 1165 de 2019 se define el principio de justicia en la función aduanera de la siguiente manera:

“3. Principio de justicia. Todas las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera deberán estar presididas por un relevante espíritu de justicia. La administración y/o autoridad aduanera actuará dentro de un marco de legalidad, reconociendo siempre que se trata de un servicio público, y que el Estado no aspira que al obligado aduanero se le exija más de aquello que la misma ley pretende.”

De las anteriores normas citadas se pueden extraer las siguientes ideas:

- a. Atendiendo al principio de equidad, no se pueden imponer obligaciones excesivas a los contribuyentes.
- b. Atendiendo al principio de justicia, no se le puede exigir al usuario aduanero que adquiera una carga mayor a la debida.

Para el caso que nos ocupa, la DIAN afectó la garantía sustentado en que mi representada debió terminar la modalidad de importación temporal a largo plazo, obligación que como se explicó en los cargos anteriores, no tenía porque cumplir mi representada, dado que la Seccional ha hecho interpretación extensiva y errónea de las normas aplicables al caso.

Entendiendo entonces que, el importador no tenía la obligación de terminar la modalidad por cuanto: (i) No se cumplen ninguno de los eventos señalados en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999; (ii) A hoy existe una póliza que ampara la importación temporal; (iii) El plazo para que permanezca la mercancía en el país bajo arrendamiento (es decir temporalidad) aún se encuentra vigente, es fácil deducir que la DIAN está imponiendo una obligación excesiva a la compañía que representó, al pretender imponerle una sanción de

¹⁰ Corte Constitucional. Sentencia C-278/19

¹¹ Corte Constitucional. Sentencia C-056/19

7 salarios mínimos legales vigentes a pesar de que la conducta no se tipifica en la infracción contenida en el numeral 1.3 del artículo 482-1.

Además, la DIAN impone una carga tributaria mayor a la debida por las siguientes razones:

Como sabemos, la garantía se debe hacer efectiva al momento del vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación; o al momento del vencimiento del quinto año; o al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado.

Los eventos descritos no se cumplen para el caso que nos ocupa (tal como se sustentó debidamente en el cargo anterior). Siendo entonces que no se cumplen, resulta imperativo no afectar la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), suma que por demás no se ha causado a la fecha de hoy, y sobre la cual el importador se acogió al beneficio contenido en el literal e del Artículo 428 del Estatuto Tributario el cual dispone:

“ARTICULO 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas: (...) e. Se consideran industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos complementarios o accesorios del equipo principal”

En ese sentido, la DIAN está imponiendo una carga tributaria mayor a la debida derivada de su desconocimiento acerca que no se puede hacer efectiva la garantía, y de que la operación de importación se acogió al beneficio tributario contenido en el artículo 428 del Estatuto Tributario.

Es decir que sin cumplirse los eventos para hacer efectiva la garantía, pretende imponer una carga tributaria que no corresponde a la operación analizada.

Ahora bien, la Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta para desvirtuar el cargo de violación al principio de justicia y equidad tributaria simplemente señala lo siguiente en la Resolución sanción:

“El impuesto a las ventas que no se causó con la importación temporal de mercancía en arrendamiento, se causa con la expedición del acto administrativo que ordena modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria. Por lo tanto, se considera viable liquidar el impuesto sobre las ventas en el acto administrativo que modifica de oficio la declaración de importación”

Por su parte, en la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración expresó:

“Igualmente, el Oficio 072433 de 2013 concluyó que: “En síntesis, al cambiar la modalidad de importación de la maquinaria de temporal a ordinaria, la consecuencia tributaria inmediata es la pérdida de la condición de excluida de la importación y el nacimiento de la obligación de pagar el IVA. El cambio en la modalidad de importación determina el momento de causación del impuesto, y consecuentemente, la tarifa a aplicar”

Olvidando que para el caso que nos ocupa no hay razón jurídica válida para modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria, pues no se cumplen ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, y de aplicarse el literal c de los eventos descritos en el artículo 156, tampoco se cumplen los presupuestos del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

(II) Falta de aplicación de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal

Cuando el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, establece que en las actuaciones de la Administración deberá prevalecer el derecho sustancial sobre las formalidades, no busca nada diferente a que en cada una de las actuaciones de sus entidades, se busque tutelar el fondo de los asuntos, por encima de las formalidades.

Al respecto del derecho sustancial sobre las formas, la Corte Constitucional también ha advertido que las formas no pueden convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Y que existe el “exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

Este concepto fue sentado en la Sentencia T-1306 de 2001, en la cual se definió a esta figura jurídica como aquella que “se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material” .

Así mismo la Corte Constitucional ha sostenido que el exceso de ritual manifiesto acontece cuando: “ i) *no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, ii) **renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto**, y iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales.* “¹²

En el presente caso, tenemos que la formalidad que pretende imponer la Seccional acerca de presentar la renovación de la garantía antes de la finalización de la primera vigencia, va en contravía del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, porque se está desconociendo que la importación temporal a hoy día se encuentra amparada por la póliza renovada, que si bien no se presentó antes de la finalización de la primera, en últimas si fue presentada y sigue amparando la importación temporal a largo plazo.

Desconocer que existe a hoy una garantía que ampare la importación temporal a largo plazo, es obstaculizar el derecho sustancial de mi representado referente a que las mercancías tienen el derecho de permanecer en el territorio aduanero nacional.

La Autoridad aduanera está aplicando un extremo rigor en el plazo que se tenía para presentar la garantía sin cimentarse en norma jurídica alguna, y está a su vez renunciando a la verdad objetiva de los hechos concerniente a que **LA GARANTÍA A HOY EXISTE, ES DECIR QUE LAS MERCANCÍAS SI SE ENCUENTRAN AMPARADAS**, esta verdad objetiva y evidente que desconoce la DIAN, vulnera el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.

Así pues y teniendo en cuenta que ya fue presentada la renovación, invocamos este principio constitucional para afirmar que la Seccional debió aceptar la renovación de la garantía dando prioridad a tutelar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del importador.

Es por eso que se concluye que al existir a hoy una garantía que ampara la importación temporal, queda sin base argumentativa lo señalado por la DIAN respecto que la mercancía no está amparada en póliza alguna.

3.5. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO PROBATORIO

La debida valoración probatoria es un derecho del debido proceso administrativo, el cual hace parte de un sistema de garantías que procura la obtención de decisiones justas para los particulares.

Para la jurisprudencia constitucional, hay una indebida valoración probatoria cuando se configura alguno de los siguientes eventos:

“La indebida valoración probatoria, se configura en los siguientes eventos: “(i) cuando el funcionario administrativo, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (...)”¹³ (Negrita fuera de texto)

Específicamente, frente a la facultad con la que cuentan las autoridades administrativas para valorar las pruebas aportadas al proceso, la Corte Constitucional refiere lo siguiente:

“(...) Aunque la jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia, el amplio margen que tienen las autoridades administrativas al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al

¹² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01044-00(AC)

¹³ Corte Constitucional. Sentencia T-566 de 2016.

proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales”¹⁴

Como se observa, del aparte citado se desprende que las autoridades administrativas al momento de valorar las pruebas incorporadas a un proceso administrativo, deben tener en cuenta las reglas de la sana crítica.

Quien debe decidir con arreglo a la sana crítica no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción¹⁵.

Para el presente caso, tenemos que obra en el expediente los siguientes dos documentos:

- Garantía No. 01DL023306 presentada el 31 de enero de 2020.
- Contrato de arrendamiento financiero que soporta la modalidad de importación temporal, con fecha de finalización del 04 de enero de 2020.

No obstante, y a pesar de existir dos documentos que prueban que la mercancía puede permanecer a hoy en el territorio aduanero nacional sin que sea necesario terminar la modalidad de importación temporal a largo plazo, la autoridad aduanera decidió separarse de lo consignado en el contrato de arrendamiento financiero, en la declaración de importación, y en la póliza renovada; y por el contrario:

- a. Dio por probado hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso:** La autoridad aduanera dio por probado que la importación temporal debió ser finalizada el 04 de enero de 2020, a pesar de que no cuenta con un contrato de arrendamiento financiero que indique que en la mencionada fecha se vencía el plazo del arrendamiento.

Adicional a lo anterior, la Autoridad aduanera prácticamente da por probado que las mercancías actualmente no se encuentran amparadas por garantía alguna, desconociendo que la renovación a la garantía inicial ya fue presentada el 31 de enero de 2020, y que la misma no fue aceptada por cuanto la Seccional decidió en contravía de las normas constitucionales, privilegiar los derechos formales sobre los sustanciales.

- b. Decidió separarse de los hechos debidamente probados y resolvió a su arbitrio el asunto jurídico debatido:** La autoridad aduanera desconoció el hecho de que el bien amparado en la declaración de importación temporal a largo plazo, podrá permanecer (bajo esta modalidad) en el territorio aduanero nacional, hasta la finalización del contrato de arrendamiento, es decir, hasta el 04/01/2022.

Es decir que, aun existiendo el contrato de arrendamiento que prueba la fecha cierta en que puede finalizar la modalidad de importación temporal, la Autoridad aduanera decide apartarse de esta fecha, y concluir que como no se renovó la garantía antes de la finalización de la inicial, procede terminar la modalidad. Desconociendo que la modalidad termina únicamente si se dan los eventos descritos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999,

Al respecto de lo argumentado por la compañía en el recurso de reconsideración, la Autoridad aduanera señaló en la resolución sanción lo siguiente:

“Las pruebas se valoran objetivamente, bajo el criterio de la sana crítica, y son las mismas que posee el importador y la compañía de seguros, y el hecho de que estos últimos no compartan la posición de la entidad, no significa que se haya vulnerado el debido proceso probatorio”

Lo argumentado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, no desvirtúa de ninguna manera que a hoy la mercancía se encuentra amparada por una póliza, y que cuenta con un contrato en el cual se indica que podrá permanecer hasta el 04 de enero del 2022.

¹⁴ Corte Constitucional. Sentencia T-566 de 2016

¹⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-622 de 1998. Salvamento Parcial de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz

Aquí no se trata de compartir una posición u otra, lo que aquí se discute es que no se hayan valorado las pruebas documentales, las cuales permiten concluir que a hoy la mercancía puede permanecer bajo la modalidad de temporal.

3.6. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TUTELA A LA CONFIANZA PÚBLICA

El principio de tutela a la confianza pública, implica que las actuaciones de las autoridades administrativas deben siempre tender a consolidar la confianza, la seguridad jurídica, la credibilidad, la certidumbre, la lealtad.

En virtud de este principio entonces, la administración está obligada a **ser consecuente consigo misma, y no asaltar la confianza, seguridad, credibilidad, y aceptación de los particulares**¹⁶.

Este principio entonces, es transversal al principio de confianza legítima, que al respecto se concibe como la posibilidad de que el individuo se encuentre en un medio jurídico estable y previsible, así como la obligación que tienen las autoridades públicas de tener un comportamiento no contradictorio frente a los particulares, veamos:

“En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. (...) si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario..”¹⁷

Delimitado el concepto del principio de tutela a la confianza pública como principio constitucional imperante en las relaciones de los particulares y la administración, y una vez determinada la manera como deben concretarlo las autoridades administrativas frente a los particulares.

Para el presente caso tenemos que la Autoridad aduanera actuó desconociendo este principio, pues **vulneró la confianza legítima que tiene la compañía de encontrarse en un medio jurídico estable y no contradictorio, dado que atendiendo al artículo 27 y 28 del Código Civil, el cual establece que cuando el sentido de la norma sea claro no se debe atender a su espíritu, la compañía importadora entendió que el bien importado bajo la modalidad de importación temporal a largo plazo puede permanecer en el territorio aduanero nacional, bajo la modalidad temporal por el término de vigencia del contrato**, siempre y cuando, el importador haya cancelado la totalidad de los tributos aduaneros a más tardar en la décima cuota semestral, es decir, en un término no superior a los 5 años contados a partir de la presentación y aceptación de la Declaración de Importación a Largo Plazo.

Esta confianza de la compañía respecto a que no debía finalizar la modalidad de importación temporal se sustentó entre otras cosas.

- a. **En el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999:** que plantea que la garantía se debe hacer efectiva al momento del vencimiento del plazo de señalado en la declaración de importación; o al momento del vencimiento del quinto año; o al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado. Eventos que no se cumplen en el caso.
- b. **En el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999:** el cual plantea que la mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, de ninguna manera establece que aún cumpliendo con el pago del saldo de tributos aduaneros, **la mercancía SOLO podrá permanecer en el territorio aduanero nacional si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial.**
- c. **En el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999:** que plantea que la terminación de la modalidad temporal se da en los casos expresamente señalados en dicho artículo, los cuales no se cumplen en el caso en estudio.

¹⁶ Compendio de Derecho Administrativo. Orlando Santofimio.

¹⁷ Sentencia C-131/04

d. **En el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999:** que plantea que para que proceda la terminación por parte de la Autoridad aduanera se deberá dar alguno de los siguientes supuestos:

- 1) Cuando se tipifique alguna de las infracciones previstas en el Art. 482-1: Situación que no se cumple en el presente caso por los motivos anteriormente expuestos. y;
- 2) Cuando ejercida la opción de compra, el importador no dé por terminada la modalidad temporal a largo plazo: Esta situación tampoco se ha dado.

Es decir que la terminación de la modalidad por parte de la Autoridad aduanera no está supeditada a que se renueve la póliza antes de la terminación de la vigencia de la inicial.

Así las cosas, consideramos que en los términos anteriormente expuestos mal haría la Autoridad aduanera en afectar una garantía e imponer una sanción a mi representado, en base a alcances extensivos de las normas, que se contrarían con el método de interpretación gramatical que se le debe dar a las mismas cuando su sentido es claro, como opera en las normas aplicadas al caso en concreto (artículos 147, 150, 153, y 156 del Decreto 2685 de 1999).

3.7. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR LIMITAR EL EJERCICIO AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA

La violación al debido proceso lo constituye el desconocimiento del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, que contiene un procedimiento especial para decretar el incumplimiento, la efectividad de la garantía y la modificación de oficio. Veamos el texto legal mencionado que fue modificado por el artículo 8º del Decreto 4136 de 2004:

“ART. 8º—Modifícase el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

*“ART. 150.—**Modificación de la modalidad.** Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, modificar la declaración de importación temporal a importación ordinaria o con franquicia y obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía, pagando, cuando fuere del caso, la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, los intereses pertinentes y la sanción a que haya lugar.*

(...)

*La terminación de las importaciones temporales de mercancías en arrendamiento a iniciativa del importador mediante la modificación de la declaración de importación temporal a ordinaria, se surtirá cuando se ejerza la opción de compra. **De no hacerlo el importador, la modificación se surtirá de oficio con la copia del acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se imponga la sanción por no terminación de la modalidad, el cual será remitido a la jurisdicción de la administración de aduanas o de impuestos y aduanas que otorgó el levante a la declaración inicial.** -resaltado fuera de texto-*

(...)”

El inciso antes citado contiene el debido proceso a que está la Administración obligada a respetar. No obstante que, como se ha expresado a lo largo del presente escrito, no estamos de acuerdo con la declaratoria de incumplimiento y terminación de la importación temporal, hay que resaltar que en los actos administrativos demandados se viola el debido proceso porque, para la realización de la modificación de oficio de importación temporal a ordinaria primero debe encontrarse ejecutoriado el acto administrativo imponiendo la sanción por no terminación de la modalidad, pero en la resolución No. 526 de 26 de octubre de 2020, se impone la sanción por no terminación de la modalidad con base en el numeral 1.3., artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, se decreta el incumplimiento y se cobran los tributos aduaneros (IVA) en su totalidad, lo que significa que el debido proceso de la norma antes citada fue violado, ya que las etapas a respetar en su orden eran, la ejecutoria del acto que impone la sanción para luego dar traslado a la División competente para efectuar la modificación de oficio. Es decir, primero debe terminarse el proceso sancionatorio para que se pueda iniciar el trámite de una declaración de importación – modificación de oficio para el cambio de importación temporal a importación ordinaria, trámite que no se cumplió porque todas las etapas legales se cumplieron en un solo acto administrativo, que luego fue confirmado al decidirse (sin competencia) el recurso de reconsideración.

Además, esta violación al debido proceso genera otra violación de la competencia funcional, porque no podía la División de Gestión de Liquidación, en un solo acto usurpar las funciones de la División de la Operación Aduanera o su equivalente, a la que le corresponde, según la norma en comento, realizar la declaración de oficio, la que implica cumplir todas las etapas del trámite de la declaración de importación.

Es evidente la violación al debido proceso respecto del camino procesal que eligió la Administración, lo que denota un afán recaudatorio de la autoridad aduanera, desdibujando los objetivos del proceso, por lo que se estructura otra causal de nulidad de los actos administrativos consistente en la desviación de poder ya que la intención de la Administración no es el cumplimiento de las normas procesales, sino el ánimo de recaudación de recursos a costa del particular y con la violación directa de la ley, como se ha venido exponiendo a lo largo del presente escrito.

3.8. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE DOBLE SANCIÓN POR LA MISMA INFRACCIÓN

A nadie se le podrá sancionar dos veces por el mismo hecho, ni se le podrá aprehender más de una vez la mercancía por la misma causal, es la premisa general que consagra el principio de prohibición de doble sanción establecido en el Estatuto Aduanero, el cual tanto en la Jurisprudencia como en la Doctrina, es comúnmente conocido como el principio de ***non bis in idem***, que tiene como función evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad.”¹⁸

Este principio impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los medios a su alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita. De ahí que la Constitución prohíba que un individuo sea “juzgado dos veces por el mismo hecho.”

Así mismo, este principio es entendido constitucionalmente como un derecho fundamental que hace parte de las garantías estructurales del debido proceso contempladas en el artículo 29 de la Carta Política, razón por la cual la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que, el fundamento de su existencia no es otro que “preservar los principios de seguridad jurídica y justicia material, los cuales a su vez amparan el principio de la cosa juzgada”.

Respecto de su aplicación, el mencionado principio cobija no solo el ámbito del derecho penal, sino que ha sido extendido como uno de los principios garantes de un debido proceso administrativo sancionatorio. Así lo ha entendido la Corte Constitucional en sentencia C-087/02, cuando indicó como premisa general que este principio es aplicable cuando la finalidad de un régimen es regular las condiciones en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su conducta contraria a derecho.

Con lo afirmado por la Corte Constitucional, es claro que cualquier tipo de actuación sancionatoria adelantada por cualquier autoridad estatal debe observar de manera integral la totalidad de garantías del debido proceso sustancial. En ese sentido, el principio de non bis in ídem debe ser observado por la autoridad aduanera en cualquier proceso administrativo sancionatorio.

Entendiendo lo anterior, para el presente caso tenemos que, la Autoridad aduanera desconoció este principio tal y cómo se evidencia en los hechos que se narran tanto en el REA y la Resolución sanción por las siguientes razones:

En primera medida, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta señaló en el Resuelve de la Resolución sanción que se demanda, que declaraba el incumplimiento de la modalidad de importación temporal a largo plazo, así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR el incumplimiento al régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del 04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783,

¹⁸ Sentencia C-870/02

DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020”

El decreto del presente incumplimiento se da en el expediente 000274, así mismo en la Resolución sanción se señaló que se hacía necesario efectuar la liquidación de los tributos aduaneros, con el fin de hacerlos exigibles al momento de hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales “Póliza específica 24 DL 007957”.

Por su parte, en un expediente diferente al que se cuestiona en la presente demanda (el 00278), la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta señaló en la Resolución sanción lo siguiente:

“ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR el incumplimiento al régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del 04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020”

El decreto del incumplimiento mencionado se da en el expediente 000274, así mismo en la Resolución sanción se señaló que se hacía necesario efectuar la liquidación de los tributos aduaneros, con el fin de hacerlos exigibles al momento de hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales “Póliza específica 24 DL 007997”.

Como se observa, tenemos dos declaratorias de incumplimiento sobre unas mismas declaraciones de importación, declaratorias que se estudiaron en dos expedientes diferentes y que a su vez ordenan hacer efectiva una Póliza específica diferente en cada expediente.

Es decir que en pocas palabras lo que la Dirección Seccional hace es juzgar dos veces un mismo hecho, y a su vez afectar dos garantías diferentes sobre unos mismos hechos, de lo cual se deduce que se pretende sancionar doblemente al importador.

Si se comparan las dos infracciones tipificadas en ambos procesos, se advierte que en esencia estas infracciones describen los mismos supuestos de hecho *“No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros correspondientes”*.

Además, si se revisa la motivación de ambos procesos para determinar que la conducta de la compañía se encontraba dentro de la infracción mencionada, se encuentra que los fundamentos de hecho que en ambos procesos considero la autoridad aduanera fueron los mismos, esto es que hay un incumplimiento en el régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del 04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020

Dicho esto, es evidente que el proceder de la autoridad aduanera estuvo revestido de falta de objetividad y un desconocimiento del principio de non bis in idem, pues buscó situar nuevamente a la compañía en una posición de inseguridad jurídica, desconociendo además la prohibición expresa que contiene el principio referenciado respecto de evitar que los administrados sean víctimas de permanentes y sucesivas investigaciones con motivo de los mismos supuestos fácticos.

Ahora bien, a pesar de que el principio *non bis in idem* no impide que “una misma conducta sea castigada y valorada desde distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo tiempo como infracción disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza sancionatoria”; este principio si se hace exigible cuando, **“dentro de una misma área del derecho, y mediante dos o más procesos, se pretende juzgar y sancionar repetidamente un mismo comportamiento”**. (Negrita fuera de texto), es decir, se hace

exigible para el caso que nos ocupa, en donde un mismo comportamiento se tipificó dos veces bajo una misma infracción y bajo un proceso sancionatorio de la misma naturaleza.

Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-632-2011, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales recogidos en las Sentencias C-870 de 2002 y C-478 de 2007, determinó que es posible juzgar y sancionar varias veces un mismo comportamiento sin que ello implique una vulneración del principio de la referencia, siempre que se cumplan los siguientes supuestos:

- Cuando la conducta imputada ofenda distintos bienes jurídicos que son objeto de protección en diferentes áreas del derecho;
- Cuando las investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos;
- Cuando los procesos y las sanciones atiendan a distintas finalidades; y
- Cuando el proceso y la sanción no presenten identidad de objeto y causa.

Para el presente caso no se cumplen los supuestos referenciados, que permitan concluir que en efecto la autoridad aduanera no vulneró dicho principio puesto que:

- **Ambas investigaciones y sanciones propuestas tienen los mismos fundamentos normativos, no hay diferencia en los bienes jurídicos ofendidos:** La infracción tipificada en los dos expedientes 0274 y 0278 es la misma, numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999. Es decir que ofenden los mismos bienes jurídicos.
- **Los procesos y las sanciones adelantados a la fecha atienden la misma finalidad:** La finalidad de ambos procesos consiste en imponer a la compañía una sanción pecuniaria por la infracción descrita en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, así como declarar el incumplimiento del régimen de importación temporal a largo plazo y afectar la póliza en el IVA suspendido en la modalidad temporal.
- **Ambos procesos y la sanción presentan identidad de objeto y causa:** tal y cómo se evidencia en los párrafos anteriores hay identidad de objeto y de causa, pues por un lado la pretensión de la autoridad aduanera es la misma en ambos procesos, imponer una sanción a la compañía por presuntamente incumplir con no terminar la modalidad de importación temporal; y por otro lado, hay identidad de causa en tanto los fundamentos de hecho y derecho empleados son los mismos.

De igual modo, resulta necesario precisar que, tal como lo establece la Sentencia C-632-2011 antes enunciada, el ámbito de protección que irradia el principio *non bis in ídem*, no solo se dirige a prohibir la doble sanción sino también el doble juzgamiento, pues no existe justificación jurídica válida para someter a una persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. En este sentido, la expresión “juzgado”, utilizada por el artículo 29 de la Carta para referirse al citado principio, comprende las diferentes etapas del proceso y no sólo la instancia final, es decir, la correspondiente a la decisión”.

Dicho lo anterior, es indiscutible que la autoridad aduanera transgredió el principio invocado, al pretender dentro del mismo curso de la investigación administrativa, efectuar un doble juzgamiento por los mismos hechos y, por consiguiente, sancionar la conducta que no es atribuible a la compañía.

En razón a los argumentos anteriormente expuestos, consideramos que existen razones suficientes para concluir que la autoridad aduanera vulneró las garantías mínimas que se deben garantizar dentro de un proceso administrativo, y que por tanto, la Resolución sanción, y los demás actos administrativos que anteceden a su expedición, resultan contrarios y violatorios no sólo de la norma aduanera sino también de la jurisprudencia emitida por la Altas Cortes.

3.9. DEFECTO SUSTANTIVO DE LA RESOLUCIÓN SANCIÓN Y RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA PRIMERA, POR MOTIVACIÓN INSUFICIENTE.

Según la Corte Constitucional en sentencia SU-635 de 2015, un fallo judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad “(v) omite motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente”. Si bien es cierto, en el caso que nos ocupa no estamos ante un fallo judicial,

si nos encontramos ante un acto administrativo que contiene una decisión proferida por una autoridad, en ese sentido, resulta aplicable al caso en concreto el defecto mencionado.

Frente a la motivación insuficiente, la jurisprudencia nacional ha dicho que esta se refiere a la motivación que carece de dos tipos de justificaciones: (i) la interna y (ii) la externa. Al respecto de estos dos términos, los mismos se han desarrollado de la siguiente manera:

“La falta de justificación externa, se predica de aquellos juicios jurídicos en los cuales la premisa normativa o la premisa fáctica del juicio jurídico aparecen construidas por el juez sin argumentación suficiente. Tanto los elementos fácticos como los normativos empleados en una sentencia podrían, efectivamente, responder a la realidad procesal o a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Pero, aún así, si no se ofrecen motivos para sustentarlos, la interpretación estaría indebidamente justificada, porque no existirían muestras de la actuación adelantada por el juez para concluir que esos eran, definitivamente, los componentes determinantes del sentido de su decisión”¹⁹

Por su parte, sobre la falta de justificación interna se ha dicho lo siguiente:

“La falta de justificación interna se le atribuye a la conclusión cuando no es “solidaria con las premisas” o, como lo señaló la Corte en otra ocasión, cuando no “se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. Sin embargo, debido a que las decisiones jurídicas, muy a menudo no son evidentes, y no pueden nunca ser arbitrarias, es preciso exponer las razones que justifican el paso de las premisas a la conclusión”²⁰

Específicamente, frente a la insuficiencia de la motivación en los actos administrativos, la Corte Constitucional ha dicho que la mera citación de normas no podía tenerse en cuenta como una motivación suficiente, pues era necesario además señalar las razones (empíricas y argumentativas) que, en concordancia con la normatividad correspondiente, justificaban la decisión del acto.

Además, se ha dejado claro en la jurisprudencia constitucional que las autoridades no pueden simplemente afirmar que el Derecho positivo ordena, prohíbe o permite determinada solución y tan sólo citar algunos artículos. El órgano encargado de aplicar el derecho en los casos concretos está en la obligación de exponer por qué esas referencias normativas autorizan una conclusión interpretativa como la que expone en su acto.

La interpretación que se haga en todo caso deberá basarse en razones y argumentos fundados, de modo que se eviten conclusiones y posiciones absurdas frente a los casos.²¹

Para el presente caso, estamos ante dos actos administrativos (Resolución sanción y Resolución confirmatoria) que si bien podría pensarse que ofrece una motivación, esta resulta siendo insuficiente. En ese sentido, a continuación pasaremos a estudiar cada uno de los cargos expuestos tanto en la respuesta al REA como el recurso de reconsideración, y que no fueron desvirtuados por la Autoridad aduanera, para de esta manera demostrar que las Resolución que se demandan adolecen de justificación interna y externa.

a. Frente al cargo de falsa motivación sustentado en la respuesta al REA y en el recurso de reconsideración

En la resolución sanción, la DIAN no realiza un estudio coherente en contra del argumento de falsa motivación, únicamente refiere lo siguiente:

“En una importación temporal de mercancías en arrendamiento que supera los 5 años, el objeto asegurable en la renovación de la póliza al finalizar el quinto año, será el de responder por la terminación de la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado, antes del vencimiento del plazo de la importación, y el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del decreto 2685 de 1999”

Como se observa, la DIAN intenta desvirtuar nuestro argumento expuesto en la respuesta al REA referente a que: **“LA AUTORIDAD ADUANERA INTERPRETA ERRÓNEAMENTE QUE LA OMISIÓN DE RENOVAR LA GARANTÍA ANTES DE SU FINALIZACIÓN,**

¹⁹ Sentencia T-589 DE 2010. Corte Constitucional

²⁰ Sentencia T-589 DE 2010. Corte Constitucional

²¹ Sentencia T-472 de 2011. Corte Constitucional

CONLLEVA A LA TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN TEMPORAL”, con interpretaciones que nada tienen que ver con lo que discute en el presente caso.

En el caso que nos ocupa no se discute en cuanto debe ser el monto de la garantía de mercancías en arrendamiento que superan los 5 años, y cuál es el objeto asegurable, aquí lo que se discute es el derecho de una mercancía en arrendamiento de permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.

Es así que frente al intento de desvirtuar este cargo nos encontramos frente a una falta de justificación externa, **pues si bien la conclusión a la que llega la DIAN concerniente a que el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999 podría ser cierta, esta no resuelve el problema jurídico que se estudia en el caso.**

Aunado a lo anterior, es pertinente recordar que de la lectura del numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, no se advierte que allí se tipifique una conducta referente a que la póliza debía ser renovada en un monto equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 mencionado, con lo cual no se entiende porque la División de Gestión de Liquidación emplea este argumento para terminar por tipificar una conducta que no aplica al caso en estudio.

Ahora bien, en la Resolución confirmatoria frente al cargo de violación de falsa motivación, la DIAN refiere después de citar diversas normas que:

“De manera alguna se puede predicar que el acto administrativo objeto de recurso, se encuentre falsamente motivado o que haya una indebida tipificación de la infracción aduanera, pues es evidentemente claro que la modalidad de importación temporal declarada no fue terminado dentro del plazo previsto en la declaración de importación. No debe confundirse el plazo de permanencia de la mercancía en el territorio nacional, con el plazo de vencimiento de renovación de la póliza, así como el plazo de terminación declarada de la modalidad”

La DIAN señala que no deben confundirse los plazos mencionados, sin embargo, no explica las razones de su dicho, y mucho menos desvirtúa los argumentos plasmados por parte de la compañía en el recurso de reconsideración, simplemente citó diversos artículos aplicables al caso y no realizó una interpretación de los mismos.

Como se observa, aquí la DIAN no expuso por qué esas referencias normativas que citó, autorizan una conclusión interpretativa diferente a la expuesta por parte nuestra.

b. Frente al cargo de violación al principio de tipicidad sustentado en la respuesta al REA y en el recurso de reconsideración

Para intentar desvirtuar el cargo de violación al principio de tipicidad, la DIAN cita varios artículos del Decreto 2685 de 1999, entre ellos el 142, 143, 147, 511, y 148, los explica superficialmente y sin un análisis consecuente concluye que era obligación modificar la garantía antes del vencimiento, de tal manera que se asegurará cubrir el tiempo por el que fue autorizada la permanencia de la mercancía, cuyo incumplimiento se encuentra tipificado en el régimen sancionatorio.

Esta falta de análisis por parte de la Autoridad aduanera permite predicar que hay una falta de justificación interna, pues la conclusión a la que se llega no se deducen de las premisas obtenidas de los artículos citados y las pequeñas explicaciones sobre los mismos.

Además, es importante recordar que la simple citación de normas no puede tenerse en cuenta como una motivación suficiente, pues era necesario además señalar las razones argumentativas que justificaran el porque la omisión de no modificar la garantía antes del vencimiento de la inicial, se tipificaba en la conducta del numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, por el contrario aquí no se señalaron razones argumentativas coherentes.

c. Frente al cargo de falta de aplicación del principio de justicia y equidad tributaria

La Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta para desvirtuar el cargo de violación al principio de justicia y equidad tributaria simplemente señala lo siguiente en la Resolución sanción:

“El impuesto a las ventas que no se causó con la importación temporal de mercancía en arrendamiento, se causa con la expedición del acto administrativo que ordena modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria. Por lo tanto, se considera viable liquidar el impuesto sobre las ventas en el acto administrativo que modifica de oficio la declaración de importación”

Por su parte, en la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración expresó:

“Igualmente, el Oficio 072433 de 2013 concluyó que: “En síntesis, al cambiar la modalidad de importación de la maquinaria de temporal a ordinaria, la consecuencia tributaria inmediata es la pérdida de la condición de excluida de la importación y el nacimiento de la obligación de pagar el IVA. El cambio en la modalidad de importación determina el momento de causación del impuesto, y consecuentemente, la tarifa a aplicar”

Olvidando que para el caso que nos ocupa no hay razón jurídica válida para modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria, pues no se cumplen ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, y de aplicarse el literal c de los eventos descritos en el artículo 156, tampoco se cumplen los presupuestos del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

Dicho argumento no fue desvirtuado por la Autoridad aduanera, pues se repite que no realizó una explicación o interpretación de las normas que citó, y que de haberse hecho seguramente habrían dado sustento a lo argumentado de su parte frente a la causación del impuesto a las ventas.

d. Frente a los demás cargos expuestos

Llama la atención que la DIAN no intenta siquiera desvirtuar los demás cargos que fueron expuestos en la respuesta al REA y en el recurso de reconsideración, lo cual constituye una razón más para considerar que estamos frente a actos administrativos con una motivación insuficiente.

V. COMPETENCIA Y CUANTÍA

La competencia corresponde en primera instancia a este despacho en razón al lugar donde se presentó la declaración de importación y a la cuantía que se estima en **CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO SESENTA PESOS (\$4.269.439.260)**, valor que se deriva de la suma de la sanción impuesta más lo correspondiente al monto del IVA suspendido y que a hoy se pretende afectar con la Póliza específica.

VI. SOLICITUD INTEGRACIÓN LITISCONSORTE NECESARIO

El litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto la relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, lo que impone su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlos válidamente. La característica esencial del litisconsorcio necesario es que la sentencia tiene que ser única y de igual contenido para la pluralidad de sujetos que integran la relación jurídico-procesal.

Para el caso que nos ocupa, resulta necesario integrar como litisconsorte necesario a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A con NIT 860.070.374, por ser la compañía de seguros con quien se suscribió la póliza que esta siendo afectada con los actos administrativos cuya nulidad se solicita.

VII. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

- Figura como parte actora la sociedad **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S**, teniendo que su representación legal consta en el certificado que se adjunta a esta demanda.

- Como parte demandada figura la **NACIÓN**, en cabeza de la **U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, teniendo que su representante legal es el director general o quien este delegue.
- Como litisconsorte necesario la **COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.**, teniendo que su representante legal judicial es Gloria Esperanza Navas González.

VIII. PRUEBAS

- 7.1. Solicito se decrete y se tenga como prueba documental el expediente administrativo TL-2010-2020-00274 en poder de la DIAN
- 7.2. Poder otorgado por el Representante Legal de la sociedad PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S
- 7.3. Certificado de Existencia y Representación de PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S
- 7.4. Copia del REA
- 7.5. Copia de la Resolución Sanción No. 526 del 26 de octubre de 2020.
- 7.5. Copia de la Resolución confirmatoria No. 00108 del 16 de febrero de 2021.
- 7.6. Copia de la solicitud de conciliación radicada ante las Procuradurías Judiciales Administrativas de Santa Marta y comprobante de radicado.
- 7.7. Copia de la Resolución Sanción proferida dentro del expediente TL-2013-2020-00278
- 7.8. Comprobante de notificación de la Resolución confirmatoria No. 00108 del 16 de febrero de 2021.
- 7.9. Declaración de importación inicial autoadhesivo No. 07256270156943 del 14/01/2010, levante No. 192010000001031 del 15/01/2010 y comprobante de envío a la DIAN.

IX. ANEXOS

Los relacionados en el acápite de pruebas.

X. NOTIFICACIONES

Se recibirán notificaciones en las siguientes direcciones:

- **Demandante:** Avenida carrera 9 #113-52 Oficina 402 Edificio Torres Unidas (Bogotá), y el correo electrónico gbolanos@pioneer.com
- **Apoderado judicial:** Calle 100 # 11A - 35 Piso 3 (Bogotá) y en los siguientes correos electrónicos: rafael.e.vesga@pwc.com, olga.l.medina@pwc.com, paola.andrea.gomez.garcia@pwc.com, angie.paola.herrera.marquez@pwc.com
- **Demandado:** Carrera 8 No. 6C-38 edificio san Agustín (Bogotá) y en el correo electrónico: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co
- **El litisconsorte necesario:** Calle 82 #11-37 piso 7 (Bogotá), y el correo electrónico Gnavas@confianza.com.co

Atentamente,



Rafael Eugenio Vesga Pérez

C.C. 91.391.508

TP 217.064 del C.S.J

Apoderado judicial de PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S

PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S

Bogotá, 26 de mayo de 2021

Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA (REPARTO)
E.S.D

Poderdante: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S
NIT. 900.322.513-3

Asunto: Poder especial amplio y suficiente para interponer demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

GONZALO ENRIQUE BOLAÑOS FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No.11.349.913 de Zipaquirá, obrando en mi calidad de representante legal de la sociedad **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S.**, identificada con NIT 900.322.513-3, por medio del presente documento confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente a: **RAFAEL EUGENIO VESGA PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.391.508 de Barichara y Tarjeta Profesional No.217.064 del C.S.J., y a **OLGA LIZETH MEDINA VELASCO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.722.337 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 266.157 del C.S.J., para que se interponga en nombre de **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S.**, el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento de Derecho, en contra de la Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 mediante la cual se sanciona a la compañía que representó y se afecta la póliza en el monto de IVA suspendido por la importación temporal; y Resolución No. 00108 del 16 de febrero de 2021 mediante la cual se resuelve un recurso de reconsideración que confirma lo dispuesto en la resolución precedente.


En virtud de lo anterior, solicito comedidamente a su despacho se sirva reconocer personería jurídica a los abogados antes mencionados, para que actúen como apoderados dentro del proceso de la referencia.

Mis apoderados quedan investidos de las más amplias facultades requeridas para llevar dicha gestión hasta su culminación, incluyendo, pero sin limitarse a: solicitar documentos, recibir, notificarse, desistir, sustituir, transigir, conciliar, renunciar, reasumir, y todas las demás facultades establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso.

- Notificaciones:

Se recibirán notificaciones en los correos electrónicos: rafael.e.vesga@pwc.com, olga.l.medina@pwc.com, y angie.paola.herrera.marquez@pwc.com

Atentamente,


Gonzalo Enrique Bolaños Forero

C.C. 11.349.913 de Zipaquirá

Representante Legal

PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S

Acepto;


Rafael Eugenio Vesga Pérez

C.C. 91.391.508

TP. 217.064 del C.S.J.


Olga Lizeth Medina Velasco

C.C. 1.098.722.337

TP. 266.157 del C.S.J.

Avenida Carrera 9 No. 113 – 52 Oficina 402 - Edificio Torres Unidas II
PBX (+57 1) 7437880 FAX (+57 1) 7433864
Bogotá D.C., Colombia
NIT. 900.322.513-3

Notaría Cuarenta y Ocho de Bogotá, D.C.
DIANA PATRICIA MARTÍNEZ P.
NOTARIA (E)

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACIÓN PERSONAL



ANTE DIANA PATRICIA MARTÍNEZ PULGARÍN NOTARIA
48 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., FUE
PRESENTADO EL ANTERIOR ESCRITO
PERSONALMENTE POR SU SIGNATARIO

BOLAÑOS FORERO GONZALO ENRIQUE

CON: C.C. 11349913

BOGOTÁ D.C. 2021-05-28 09:23:43

4450-61033267



863c7

Verifique estos datos en
www.notariaanlinea.com



[Handwritten signature]
[Fingerprint]

Se recibió la diligencia en los correos electrónicos: info@medina@owc.com y paola.perez@owc.com
En la recepción de la diligencia en los correos electrónicos: info@medina@owc.com y paola.perez@owc.com

Avenida Carrera 9 No. 113 - 52 Oficina 402 - Edificio Torres Unidas II
Bogotá D.C., Colombia
NIT. 900.325.213-3
PBX (+57 1) 7437880 FAX (+57 1) 7437884

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53**

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S A S
Nit: 900.322.513-3 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01944391
Fecha de matrícula: 10 de noviembre de 2009
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 1 No. 4-02 Parque
Industrial K2 Dos Bodega N 14
Municipio: Chía (Cundinamarca)
Correo electrónico: rvelandia@pioneer.es.com
Teléfono comercial 1: 7437880
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Avenida Carrera 9 No. 113-52
Ed.
Torres Unidas Ii Of 402
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: rvelandia@pioneer.es.com
Teléfono para notificación 1: 7437880
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53**

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado de Accionista Único del 28 de octubre de 2009, inscrita el 10 de noviembre de 2009 bajo el número 01339693 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: El objeto social principal de la sociedad será llevar a cabo por sí, o por intermedio de terceros o asociada a terceros cualquier actividad comercial lícita tanto en Colombia como en el extranjero, incluyendo pero sin limitarse a la prestación de servicios directos al sector de hidrocarburos tales como el suministro de equipos de perforación y prueba relacionadas; perforación de pozos; fluidos de perforación; toma, procesamiento e interpretación de registros; extracción de núcleos, cimentación y perforación; servicios de pozos direccionales y servicios relacionados con el suministro de equipos, elementos y herramientas requeridas para ello. En relación con dicho objeto, la sociedad podrá adquirir a cualquier título toda clase de bienes inmuebles o muebles (incluyendo la adquisición de taladros y otros equipos de perforación), arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía; explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal, siempre que sean afines al objeto principal. Girar, aceptar, endosar, cobrar, protestar y pagar toda clase de títulos valores. Participar en licitaciones públicas y privadas. Tomar dinero en mutuo con o sin interés. Celebrar contratos de seguro, transporte, cuentas en participación, contratos con entidades bancarias y/o financieras y, en general celebrar todos los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

actos tendientes al desarrollo de su objeto social.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$20,000,000.00

No. de acciones : 20,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$9,000,000.00

No. de acciones : 9,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$9,000,000.00

No. de acciones : 9,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: Representantes legales: La sociedad tendrá un (1) representante legal (gerente) y un (1) suplente que lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, de libre nombramiento y remoción por parte del accionista único. El representante legal y su suplente ejercerán el cargo hasta cuando sean removidos o reemplazados por el accionista único.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El representante legal tendrá en desarrollo del objeto social, las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, pudiendo nombrar mandatarios para que representen a la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones del accionista único; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad. No obstante, requerirá la previa autorización del accionista único para

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53**

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

adquirir, enajenar, limitar y gravar bienes inmuebles y/o establecimientos de comercio, así como gravar activos fijos; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad; E) Presentar al accionista único en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el informe de gestión especial, cuando se dé la configuración de un grupo empresarial; F) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el accionista único. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; G) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; H) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; I) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; J) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento del accionista único las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. El gerente requerirá la previa autorización del accionista único para: (I) Celebrar cualquier acto o contrato que implique la adquisición de bienes o servicios, cuando la cuantía del acto o contrato exceda el equivalente en pesos colombianos a un millón de dólares (USD \$1.000.000.00); y (II) Celebrar cualquier acto o contrato que implique la enajenación de bienes de la sociedad o la prestación de servicios por parte de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato exceda el equivalente en pesos colombianos a la cantidad de un millón de dólares (USD \$1.000.000.00).

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Acta no. sin num de Accionista Único del 6 de mayo de 2016, inscrita el 5 de julio de 2016 bajo el número 02119127 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53**

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre	Identificación
REPRESENTANTE LEGAL	
Bolaños Forero Gonzalo Enrique	C.C. 000000011349913
Que por Acta no. 20 de Asamblea de Accionistas del 11 de diciembre de 2019, inscrita el 23 de diciembre de 2019 bajo el número 02536156 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):	
Nombre	Identificación
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
Velandia Rodriguez Rafael Humberto	C.C. 000000079902435

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 29 de junio de 2018, inscrita el 26 de julio de 2018 bajo el número 02360341 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
Bustamante Rua William	C.C. 000000009773991
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 22 de octubre de 2015, inscrita el 22 de octubre de 2015 bajo el número 02029800 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):	
Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
Osuna Monroy Diana Lorena	C.C. 000001030556465
Que por Acta no. 3 de Accionista Único del 1 de abril de 2011, inscrita el 1 de septiembre de 2011 bajo el número 01508958 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):	
Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
KPMG S.A.S.	N.I.T. 000008600008464

REFORMAS DE ESTATUTOS**Reformas:**

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
01	2009/12/28	Asamblea de Accionist	2009/12/30	01351859	
3	2011/04/01	Accionista Único	2011/09/01	01508957	
05	2012/10/30	Accionista Único	2013/03/04	01711137	

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53**

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado de Representante Legal del 17 de marzo de 2010, inscrito el 9 de abril de 2010 bajo el número 01374432 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- PIONEER GLOBAL HOLDING INC.

Domicilio: (Fuera Del País)

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Que por Documento Privado de Representante Legal del 16 de julio de 2012, inscrito el 14 de septiembre de 2012 bajo el número 01666499 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- PIONEER GLOBAL HOLDING INC.

Domicilio: (Fuera Del País)

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2010-01-15

**** Aclaración Situación de Control ****

Se aclara la Situación de Control inscrita el 09 de abril de 2010 bajo el No. 1374432, en que la sociedad PIONEER GLOBAL HOLDINGS INC matriz comunica que ejerce situación de control sobre la sociedad de la referencia subordinada, en el sentido de indicar que esta se configuró desde el 28 de octubre de 2009.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53**

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 0910

Actividad secundaria Código CIIU: 0610

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 20.913.572.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 0910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 15 de junio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de junio de 2021 Hora: 11:03:53

Recibo No. AA21885298

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21885298DBE35

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





C10010042352

INTERSERVICE S.A.

CONFIANZA
COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO

20 JUN 26 P12:40

(0126 DEL 11 DE JUNIO DEL 2020)

CÓDIGO
PROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO

: 6432
: Fiscalización y Liquidación
: Control Aduanero
: Determinación de Sanciones Aduaneras;
: Liquidaciones Oficiales Aduaneras

RECOMENDACIÓN DEL ASESOR
NO RECOMENDACIÓN

No. EXPEDIENTE

:

DATOS DEL EXPEDIENTE

: TL - 2010-2020 - 00274

DATOS DEL INTERESADO

de Documento

: NIT

Identificación

: 900.322.513 - 3

Nombre o Razón Social

: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE
TALADROS S.A.

Dirección

: CALLE 99 # 10 - 19 PISO 6

Ciudad

: BOGOTA D.C.

ASEGURADORA

: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
CONFIANZA

NIT

: 860.070.374 - 9

DIRECCION

: CL 82 # 11 37 P 7

: BOGOTA D. C.

VALOR REA.

Sanción

: (\$ 6.144.621.00),

I. COMPETENCIAS

El Jefe del GIT de Investigaciones Aduaneras e Infracciones Cambiarias de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta; en uso de las Facultades Legales y en especial de las conferidas en los artículos 1, 2, 3, 30, 32, 38, 46, 47, 48, del Decreto 4048 de 2008, artículo 626 del Decreto 1165 de 2019, Artículos 1, 6, 8 de la Resolución 007 de 2008 adicionado por la resolución 1551 del 11 de febrero de 2008, Resolución 009 de 2008 modificado parcialmente por resolución 3884 de abril 17 de 2009 y resolución 002384 del 15 de marzo de 2018; Artículos 590, 591 del Decreto 1165 de 2019; artículo 1 de la Resolución 008 de 2008; artículo 71 de la Resolución 0011 de 2008; Resolución 000610 del 16-09-2019; demás normas concordantes que modifiquen y adicionen; teniendo en cuenta los siguientes.

HECHOS

Mediante oficio No. 119245451-0044 de fecha 18/02/2020, la Jefe del G.I.T Control de Garantías, de la División de Gestión de la Operación Aduanera de esta Dirección

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.042.917-9 DG 25 G 95 A 55
Atención al usuario: (57-1) 4722006 - 01 8000 111 210 - serviciosalcliente@472.com.co
Licencia de Menaje: 0 A 5 kg
Licencia de Transporte

Remite

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
C.R.A. # 17-04
SANTA MARTA, MAGDALENA
MAGDALENA
07040500

472

23 JUN 2020

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

Seccional, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 150 del Decreto 2685 de 1999 y a las competencias impartidas por la Resolución 009 y 011 del 2.008, remite al Jefe de La División de Gestión de Fiscalización, antecedente sobre incumplimiento de la finalización de la modalidad de la importación temporal de mercancías en arrendamiento, el cual fue autorizado con Declaración de Importación autoadhesivo N° **07256270156943** del **14/01/2010** con levante No. **192010000001031** del **15/01/2010**, con Declaraciones de Modificación No. **07256280226068** del **08/06/2010** y levante **192010000024119** del **15/06/2010**, inicial reimportación # **13582010184884** de **27/01/2015**, inicial reimportación # **13582010187982** de **04/03/2015**, garantizado con póliza específica # **24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817** expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A. con vigencia del **05/01/2015** al **04/01/2020** y la cual debió ser finalizada el día 04 de enero de 2020, debido a que hasta esa fecha se encontraba garantizada la modalidad de importación temporal; aunque el contrato de arrendamiento financiero leasing internacional que soporta la modalidad de importación temporal, celebrado entre Pioneer Drilling Services Ltd. y proveedora internacional de taladros termina el **04/01/2022**, establece el artículo 153 del decreto 2685 de 1999 que la importación temporal autorizada debe estar garantizada a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 147 del decreto 2685 de 1999, normatividad vigente al momento del ingreso de la mercancía al territorio aduanero nacional.

En razón a que a la mercancía ingresada bajo importación temporal de mercancías en arrendamiento financiero no le fue modificada la garantía específica establecida en el artículo 147 del decreto 2685/99, la cual garantiza la finalización de la modalidad con el pago de los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, la cual garantizaba la modalidad de importación hasta el 04/01/2020 y que con boletín de rechazo # 01 de 31 de enero de 2020, fue rechazada la garantía # **01DL023306**, la cual fue presentada extemporáneamente el 31/01/2020 y expedida retroactivamente el 29/01/2020.

En aplicación a la resolución 009 y 011 del 2008, es la División de Gestión de Fiscalización la competente para determinar la procedencia de las infracciones respectiva, y ante el firme hecho generador de posible incumplimiento por parte del importador antes citado; debido a que la importación temporal no le fue modificada la garantía establecida en el artículo 147 del decreto 2685/99, antes del vencimiento de las mismas, dejando la importación temporal sin garantía, como requisito de la importación temporal de mercancías en arrendamiento del artículo 153 del decreto 2685/99, como lo establece el artículo 147 y 155 del decreto 2685/99, documento sin el cual no es posible la importación temporal; razón por el cual este despacho procede a remitir los antecedentes respectivos para lo de su competencia se proceda a determinar la posibilidad de declarar incumplimiento en aplicación al artículo 150 del decreto 2685/99.

fue adjuntado la siguiente documentación soporte en fotocopia en 409 folios así:

- Mandato de fecha 08 de enero de 2010 de proveedora internacional de taladros S.A.S. a agencia de aduanas Granandina Ltda. Nivel 1 (folio 2)
- B/L IC1001HS-7 (folio 3)
- Factura # 9-PI051-02 de Pioneer Drilling Services Ltd. a proveedora internacional de taladros S.A.S. de fecha 06 enero de 2010 (folio 4)
- Certificación de fletes – agencia marítima transmares de fecha 12 de enero de 2010 (folio 5)
- Cotización de CORRECOL de fecha 26-11-2009 (folio 6)

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

- Declaración de importación 192010000000749-5 con autoadhesivo 07256270156943 y fecha de presentación 14-01-2010, levante 192010000001031 de 15-01-2010. (folio 7)
- Radicación de póliza 24DL004652 en fecha 14 de enero de 2010 (folio 8)
- Rut de proveedora internacional de taladros s.a.s. (folio 9)
- Certificado de existencia y representación legal de proveedora internacional de taladros sa.s. (folio 10 a 11)
- Cedula de extranjería de PORTERO VASQUEZ JOSE OSWALDO (folio 12)
- Certificado de existencia y representación legal de la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA (folios 13 al 29)
- Cedula de RUEDA RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (folio 30)
- Certificación de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (folio 31)
- Liquidación póliza 24 DL004652 certificado 24DL007814 de la compañía aseguradora de fianzas CONFIANZA S.A. importador PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S. (folio 32)
- Lista de chequeo folio 33, 34
- Boletín de recepción de garantías 003 de 14-01-2010 boletín devolución documentos pólizas aceptadas (folios 35, 36)
- Póliza de cumplimiento de disposiciones legales DL004652 / DL007814, constancia de pago de prima (folio 37 a 39)
- Radicación póliza 24 DL004574 (folio 40)
- Boletín de recepción de garantía 0189 de 11/06/2010, póliza 24DL004574 certificado de modificación 24 DL008627 / certificación pago prima (folios 40 a 44)
- Lista de chequeo – Requisitos de aceptación generales – Requisitos de aceptación específica (folios 45 a 46)
- Boletín de devolución de garantías # 7 de 11 de junio de 2010
- Recibo oficial de pagos de tributos aduaneros 690 con adhesivo # 07516270118900 de fecha 10 de junio de 2010 por valor de \$ 55.377. 000.00 cuota 1 de 24 (folio 48)
- Formato de cumplimiento de régimen de largo plazo cuota fija (folio 49)
- Licencia número de aprobación LIC-20580156-05032010 de 05-05-2010 – Documento de visto bueno MINM-0016686 de 15-04-2010 (folios 50 a 55)
- Oficio de Ministerio de comercio industria y turismo de la república de Colombia con radicado 2-2010-006362 – certificación de maquinaria pesada – equipo de perforación (folios 56 a 61)
- Contrato de leasing internacional entre PIONEER DRILLING SERVICES LTD y PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S. (folios 62 a 78)
- Declaración andina de valor – declaración de importación 192010000024212-6 de 08 de junio de 2010, sin levante. (folios 79 a 80)
- Radicación de póliza 24 DL004652 en fecha 15 de junio de 2010 (folio 81)
- Certificado de existencia y representación legal de PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S. (Folios 82 a 83)
- Cedula de ciudadanía de ECHEVERRI CUELLO ALEXIA (folio 84)
- Certificado de existencia y representación legal de la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA (folios 85 a 99)
- Cedula de ciudadanía de OJEDA ACEVEDO JOSE LUIS (folio 100)
- Certificado de la superintendencia financiera de Colombia de la compañía aseguradora de fianzas “CONFIANZA S.A.” (folio 101)
- Formato liquidación de valor a garantizar (folio 102)
- Escrito de desistimiento del menor valor a liquidar con relación a los boletines de rechazo # 7 y 8 de proveedora internacional de taladros S.A.S. (folio 103)
- Lista de chequeo de requisitos específicos y generales (folios 104, 105)
- Boletín recepción de garantías # 0192 de 11-06-2010 radicado 000866
- Boletín devolución documentos pólizas aceptadas de 15 de junio de 2010 (folio 107)

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

- Póliza de cumplimiento de disposiciones legales- certificación pago de prima- póliza DL004652 certificado DL008628 (folio 108 a 111)
- Oficio remisorio de pago de segunda cuota de la importación temporal con radicado 00430 de enero 7 de 2011 y recibo oficial 07256260302316 – consulta de pago recibido (folio 112 a 114)
- Oficio remisorio de pago de tercera cuota de la importación temporal con radicado 15992 de julio 8 de 2011 y recibo oficial 07516300015563 – consulta de pago recibido (folio 115 a 117)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 118)
- Oficio remisorio de pago de cuarta cuota de la importación temporal con radicado 01350 de enero 18 de 2012 y recibo oficial 07256270241919 – consulta de pago recibido (folio 119 a 121)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 122)
- Oficio remisorio de pago de quinta cuota de la importación temporal con radicado 28576 de diciembre 26 de 2012 y recibo oficial 07256270278902 – (folio 123 a 126)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 127)
- Oficio remisorio de pago de sexta cuota de la importación temporal con radicado 00182 de enero 04 de 2013 y recibo oficial 07256260572503 – (folio 128 a 130)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 131)
- Oficio remisorio de pago de séptima cuota de la importación temporal con radicado 18934 de septiembre de 2013 en respuesta requerimiento 119245451-402-069 de 22 de abril de 20013 y recibo oficial 07256270340067 – (folio 132 a 134)
- Remisión de recibos de pago cuota 8 y saldos de cuota 4 y 5 anexa confirmación pago (folio 135 a 137)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 138)
- Oficio remisorio de pago de novena cuota de la importación temporal con radicado 011432 y recibo oficial 07256070435865 – (folio 139 a 141)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 142)
- ROI 0138 de septiembre 2013 (folio 143)
- Oficio de fecha 09 de enero de 2015 radicado 000350 radicación póliza # 24 DL 007997 anexa póliza – certificación pago prima-disposiciones legales- superintendencia bancaria-cámara de comercio confianza- fotocopia cedula representante confianza-cámara de comercio de proveedora internacional de taladros sas- fotocopia de representante proveedora- oficio rad # 00071 de enero 7 de 2015- boletín recepción de garantía- verificación telefónica de garantía- liquidación para renovación garantía- lista chequeo garantías específica – póliza de cumplimiento DL 007997 – boletín de aceptación y devolución de documentos (24 DL007997 cert 24 DL014593 anterior 24 DL004652) folios 144 a 176
- Radicación póliza # 24DL007997, radicado 003370 de 27 de febrero de 2015, con anexos y declaración de importación # 13582010184884 (folios 177 a 238)
- Oficio radicado # 000171 de 7 de enero de 2015, anexando los recibos oficiales de pago de las cuotas 10 a la 24 (folios 239 a 254)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 255)
- Recibos oficiales de pago de las cuotas 10 a la 24 (folios 256 a 270)
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 271)
- Radicación póliza # 24DL007997, radicado 004308 de 11 de marzo de 2015 (folio 272) con boletín de recepción de garantía de folio 273 a 341 _ póliza 24 DL 007997 modificación 24 DL 014817 de 05-03-2015 hasta 04-01-2020
- Boletín de aceptación y devolución de documentos de 12 de marzo de 2015 # ALG0012ES de folio 342 a 345
- Recibos de pago cuotas de folio 346 a 370
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija en fecha 20 de septiembre de 2015 (folio 371)
- Recibos de pago de folio 372 a 397
- Registro de cumplimiento régimen de largo plazo cuota fija (folio 398)
- Boletín de rechazo y devolución de garantía folio 399
- Recepción folio 400

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

- Evaluación de garantía folio 401
- Certificación folio 402
- Disposiciones legales folios 403 a 404
- Constancia de pago prima y fotocopias de cedula de Sandra serrato y Gonzalo bolaños (folio 405 a 410)

Que tal como consta en el boletín de recepción de garantías, de fecha 31 de enero de 2020 rad DIAN 001481 de 20 de enero de 2020, con:

Tipo de garantía:	Especifica
Tipo de tramite:	Modificación
Régimen importación:	Temporal
Modalidad:	Leasing
Póliza	# 01 DL023306 certificado 01 DL041603
Compañía aseguradora	CONFIANZA S.A.
Tomador:	Provedora internacional de taladros S.A.S.
NIT	900.322.513 - 3
Vigencia	04/01/2020 hasta 01/01/2022
Fecha de expedición	29/01/2020
Ciudad de expedición	Bogotá D.C.
Valor	\$ 6.734.106. 328.00
# de folios recibidos	34
Hora de recepción	8:50 am

Que se encuentra anexo formato de evaluación de garantía 1414 con número de formulario 14141000005768 de fecha 31 de enero de 2020, en el cual consta como número de radicación 13999000403006 de 30 de enero de 2020 y asunto # 202081840100000549 de fecha 30 de enero de 2020, con la anotación en la casilla de observaciones:

LA OPERACIÓN CONTENIDA EN ESTA RADICACION SE ENCUENTRA VENCIDA DESDE EL 04 DE ENERO DE 2020, NO ADJUNTA DOCUMENTO DE ORIGEN (DECLARACION DE IMPORTACION) LOS DATOS DEL TOMADOR QUE INGRESA AL SISTEMA SE ENCUENTRAN ERRADOS, YA QUE EL TOMADOR NO ES LA AGENCIA DE ADUANAS.

Que obra BOLETIN DE RECHAZO Y DEVOLUCION DE GARANTIAS # 1 DE FECHA 31-01-2020, recibida por el usuario que radicara la garantía en fecha 31-01-2020 a las 3:20, con 21 folios devueltos.

Se da apertura al proceso conforme auto No. 119238457 - 274 del 10-03-2020 y acta de asignación # 0014 de 10-03-2020, con planilla de reparto 2020119238457-013 de 10-03-2020.

Consultado el Registro Único Tributario
Importador

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A., NIT 900.322.513-3 DIRECCION
CALLE 99 # 10 - 19 PISO 6 BOGOTA D.C.

y la aseguradora COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
CONFIANZA NIT 860.070.374 - 9 DIRECCION CL 82 # 11 37 P 7
BOGOTA D. C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 145. Declaración de Importación temporal de largo plazo.

En la Declaración de Importación temporal de largo plazo se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por semestres vencidos, para lo cual se convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente, para efectos aduaneros en el momento de su pago.

Artículo 146. Pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros.
[Modificado por el Decreto 4136 de 2004 artículo 5º.] El pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros deberá efectuarse en los términos señalados en este decreto, en los bancos o demás entidades financieras autorizadas para recaudar por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Si el pago no se realiza oportunamente, el interesado deberá cancelar la cuota atrasada liquidándose los intereses moratorios de que trata el artículo 543 de este decreto.

Los bienes deberán ser utilizados o destinados al fin para el cual fueron importados.

Artículo 147. Garantía. [Modificado por el Decreto 4136 de 2004 artículo 6º.]

La autoridad aduanera exigirá la constitución de una garantía a favor de la Nación, por el ciento cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto de responder, al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación, por la finalización de la modalidad con el pago de los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, la garantía se constituirá con el objeto de responder, al vencimiento del quinto año o al vencimiento del término para la cancelación de la cuota correspondiente a la mitad del plazo de los cinco (5) años, por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

En ambos casos, el objeto de la garantía también comprenderá los tributos aduaneros, intereses y sanciones que se generen por el incumplimiento de la obligación prevista en el inciso segundo del artículo 149 del presente decreto.

La garantía se constituirá en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cuando se trate de mercancías importadas temporalmente para reexportación en el mismo Estado, la garantía se constituirá por el 10% del valor CIF de la mercancía cuando tenga exención total de tributos aduaneros y por el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los tributos aduaneros a pagar cuando se trate de exención parcial.

Para la importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, culturales o recreativos no se exigirá la constitución de garantía".

Parágrafo. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse efectiva cuando la autoridad aduanera determine el incumplimiento en cualquiera de las cuotas que se hayan causado hasta la mitad del plazo de importación señalado en la declaración.

Artículo 150 modificado por el artículo 8 del Decreto 4136 de 2004. Modificación de la Modalidad.

"Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, modificar la declaración de importación temporal a importación ordinaria o con franquicia y obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía, pagando, cuando fuere del caso, la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, los intereses pertinentes y La sanción a que haya lugar.

En caso de importaciones temporales a largo plazo, se proferirá acto administrativo declarando el incumplimiento y ordenando hacer efectiva la garantía en el monto correspondiente a las cuotas insolutas, más los intereses moratorios y el monto de las sanciones correspondientes previstas en el artículo 482-1 del presente decreto, dentro del proceso administrativo previsto para imponer sanciones. Ejecutoriado el acto administrativo, copia del mismo se remitirá a la jurisdicción de la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas que otorgó el levante a la declaración inicial para que proceda a proferir de oficio la modificación a la Declaración de importación temporal a importación ordinaria, a menos que el importador compruebe que en dicho lapso reexportó la mercancía.

La terminación de las importaciones temporales de mercancías en arrendamiento a iniciativa del importador mediante la modificación de la declaración de importación temporal a ordinaria, se surtirá cuando se ejerza la opción de compra. De no hacerlo el importador, la modificación se surtirá de oficio con la copia del acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se imponga la sanción por no terminación de la modalidad, el cual será remitido a la jurisdicción de la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas que otorgó el levante a la declaración inicial.

Cuando se trate de cambiar la modalidad de importación temporal de corto plazo a ordinaria, los tributos se deberán liquidar con base en las tarifas y tasa vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la modificación.

Para convertir una importación temporal de corto plazo a una de largo plazo, deberá modificarse en ese aspecto la Declaración de Importación, liquidando los tributos aduaneros que se habrían causado desde la fecha de presentación y aceptación de la Declaración Inicial, siguiendo las normas consagradas para las importaciones temporales de largo plazo y cancelando las cuotas que se encuentren vencidas.

Parágrafo 1º. Para la modificación de una importación temporal de bienes de capital a importación ordinaria o con franquicia se presentará como documento soporte de la modificación la licencia previa presentada con la declaración inicial.

Parágrafo 2º. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá modificar de oficio la declaración de importación temporal a largo plazo para reexportación en el mismo Estado cuando se determine el incumplimiento en el pago de las cuotas causadas y debidas hasta la mitad del plazo señalado en la declaración de importación.

Así mismo, podrá hacer efectiva la garantía para el cobro de los tributos aduaneros, cuando tratándose de mercancías en arrendamiento se determine el incumplimiento en el pago de las cuotas causadas y debidas al vencimiento del término para la cancelación de la cuota correspondiente a la mitad del quinto año de que trata el artículo 153 del presente decreto.

En estos eventos no se configura la sanción por no finalizar la modalidad.

ARTICULO 153. IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS EN ARRENDAMIENTO.

Artículo modificado por el artículo 9 del Decreto 4136 de 2004.> Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en un mismo embarque, cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y liquiden los tributos aduaneros vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la Declaración.

En la declaración de importación temporal de mercancías en arrendamiento se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional, **de acuerdo con el contrato.**

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por semestres vencidos, contados a partir de la fecha de obtención del levante, para lo cual, se convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente en el momento de su pago.

Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este período, se deberá pagar el saldo de

tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.

Se podrán celebrar contratos de arrendamiento financiero leasing sobre bienes importados al país bajo la modalidad de importación temporal de largo plazo, sin que se genere la terminación de dicha modalidad de importación, ni la pérdida de los beneficios obtenidos con la misma. En los eventos consagrados anteriormente, el respectivo contrato deberá conservarse por el declarante, conforme al artículo 155 del presente decreto.

PARÁGRAFO 1o. En casos especiales, la autoridad aduanera podrá permitir la importación temporal a largo plazo de accesorios, partes y repuestos que no vengan en el mismo embarque, para bienes de capital importados temporalmente, siempre y cuando se importen dentro del plazo de importación del bien de capital.

En estos eventos, con anterioridad a la presentación y aceptación de la Declaración de Importación, deberá obtenerse la autorización correspondiente.

Durante el plazo de la importación temporal de aeronaves destinadas al transporte aéreo de carga o pasajeros, se podrán importar temporalmente, con el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas aduaneras, los accesorios, partes y repuestos que se requieran para su normal funcionamiento, sin que deba obtenerse la autorización a que se refiere el inciso anterior.

PARÁGRAFO 2o. En caso de importación de helicópteros y aerodinós de servicio público y de fumigación por el sistema de leasing, sólo se causará impuesto sobre las ventas cuando se ejerza opción de compra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o del Decreto 2816 de 1991.

ARTICULO 154. SUSTITUCIÓN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE BAJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - "LEASING" -.

Cuando se decida la reexportación de una mercancía importada temporalmente bajo contrato de arrendamiento financiero - "leasing" - para reemplazarla por otra, la mercancía de reemplazo será objeto de una nueva Declaración de Importación, en la que se deberán liquidar los correspondientes tributos aduaneros, de cuyo monto se descontarán las cuotas ya canceladas por la importación de la mercancía que se haya reexportado. El saldo será dividido en las cuotas señaladas en el nuevo contrato de arrendamiento registrado conforme a las normas cambiarias, sin que en ningún caso la sustitución conlleve prórroga del plazo inicialmente declarado.

"Artículo 156. Terminación de la Importación Temporal. Artículo modificado por el artículo 11 del Decreto 4136 de 2004. La importación temporal se termina con:

- a) La reexportación de la mercancía;*
- b) La importación ordinaria o con franquicia, si a esta última hubiere lugar;*
- c) La modificación de la declaración de importación temporal a importación ordinaria realizada por la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas competente en los términos previstos en el artículo 150 del presente decreto;*
- d) La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera;*
- e) La legalización de la mercancía, cuando a ella hubiere lugar".*

Artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el Art. 15 del decreto 4136 de 2004. Infracciones Aduaneras de los Declarantes en el Régimen de Importación Temporal para reexportación en el mismo estado.

No terminar la modalidad de Importación Temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la importación y no pagar oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros.

1.1 La sanción aplicable será de multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor FOB de la mercancía convertido a la tasa de cambio representativa del mercado del día del vencimiento del plazo para modificar la modalidad de importación temporal, más el cinco por ciento (5%) del valor de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota incumplida.

1.2 No pagar oportunamente la cuota de los tributos aduaneros, aun cuando se hubiese modificado la declaración de importación o reexportado la mercancía antes del vencimiento del plazo de la importación temporal.

La sanción aplicable será del cinco por cinco (5%) del valor de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota incumplida.

1.3. No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduanero correspondiente..."

La sanción aplicable será de multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las infracciones y sanciones de que trata este artículo serán aplicables únicamente al importador.

Artículo 507 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 16 del Decreto 4431 de 2004. Requerimiento Especial Aduanero. La autoridad aduanera podrá formular Requerimiento Especial Aduanero para proponer la imposición de sanción por la comisión de infracción administrativa aduanera o para definir la situación jurídica de la mercancía cuando se configure una causal de aprehensión, o para formular Liquidación Oficial de Corrección o de Revisión de Valor.

Artículo 508 del Decreto 2685 de 1999. Oportunidad para formular requerimiento especial aduanero. El requerimiento especial aduanero se expedirá una vez culminado el proceso de importación o en desarrollo de programas de fiscalización, según corresponda.

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

Artículo 510 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 29 del Decreto 2557 de 2007. Notificación y respuesta al requerimiento especial aduanero. El requerimiento especial aduanero se deberá notificar conforme a los artículos 564 y 567 del presente decreto.

La respuesta al requerimiento especial aduanero se deberá presentar por el presunto infractor dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación y en ella deberá formular por escrito sus objeciones y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

Artículo 521 del Decreto 2685 de 1999. Reducción de la sanción de multa por infracción administrativa aduanera. Sin perjuicio del decomiso de la mercancía cuando hubiere lugar a ello, las sanciones de multa establecidas en este decreto se reducirán a los siguientes porcentajes sobre el valor establecido en cada caso:

1. Al veinte por ciento (20%), cuando el infractor reconozca voluntariamente y por escrito haber cometido la infracción, antes de que se notifique el requerimiento especial aduanero.
2. Al cuarenta por ciento (40%), cuando el infractor reconozca por escrito haber cometido la infracción dentro del término previsto para dar respuesta al requerimiento especial aduanero.
3. Al sesenta por ciento (60%), cuando el infractor reconozca por escrito haber cometido la infracción dentro del término para interponer el recurso contra el acto administrativo que decide de fondo la imposición de una sanción.

Para que proceda la reducción de la sanción prevista en este artículo, el infractor deberá en cada caso anexar al escrito en que reconoce haber cometido la infracción, copia del recibo de pago en los bancos autorizados para recaudar por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde se acredite la cancelación de la sanción en el porcentaje correspondiente, además de los mayores valores por concepto de tributos aduaneros, cuando haya lugar a ello.

Artículo 1 numerales 7.1 y 7.2 de la Resolución 0007 del 4 de Noviembre de 2008. Modificado por la Resolución N° 003723 de 23/04/10, que señala:

"7.1. Los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones oficiales que en desarrollo del control previo o simultáneo a las operaciones de comercio exterior, deban adelantarse por situaciones advertidas en una inspección física o documental dentro del proceso de importación, exportación y tránsito aduanero en cuyo caso la competencia corresponde a la Dirección Seccional de Aduanas o a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas en la que se haya presentado la declaración de importación, exportación y tránsito aduanero;"

Tratándose de importaciones temporales, esta competencia se extiende hasta la conclusión de la respectiva modalidad.

Lo resaltado y subrayado es nuestro.

"7.2 . Los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones oficiales que en desarrollo del control posterior deban adelantarse contra dos o más infractores o usuarios que tienen domicilio en el lugar que corresponda a la competencia territorial de más de

una Dirección Seccional, o cuando el domicilio del presunto infractor no se encuentre en el territorio nacional, en cuyo caso la competencia la tendrá la Dirección Seccional de Aduanas o la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas con competencia territorial en el lugar donde se presentó la declaración de Importación, de exportación o de tránsito aduanero, o en su defecto, la Dirección Seccional que primero tenga conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción”.

“**Parágrafo:** en los casos previstos en los numerales 7.1 y 7.2 del presente artículo, La Dirección Competente informara sobre el inicio del proceso a la Dirección Seccional con competencia territorial en al lugar del domicilio del interesado, con el fin de evitar se promueva otro proceso sobre el mismo asunto

Decreto 1165/2019

CAPITULO 2

DE LA OBLIGACIÓN, LOS OBLIGADOS Y LOS RESPONSABLES ADUANEROS.

Artículo 4. OBLIGACIÓN ADUANERA.

Es vínculo jurídico entre la administración aduanera y cualquier persona directa o indirectamente relacionada con cualquier régimen, modalidad u operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada una ellas, quedando las mercancías sometidas a potestad aduanera y los obligados, al pago de tributos aduaneros, intereses, recargos y sanciones, a que hubiere lugar.

Artículo 5. ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA.

La obligación aduanera comprende el cumplimiento las obligaciones correspondientes a cualquier régimen, modalidad u operación aduanera; los trámites aduaneros que debe adelantar cada uno de los obligados aduaneros; el pago de tributos aduaneros, intereses, tasas, recargos y sanciones, a que hubiere lugar y de todas aquellas obligaciones que se deriven de actuaciones emprenda la administración aduanera

ARTÍCULO 7 Decreto 1165 de 2019. OBLIGADOS ADUANEROS. Los obligados aduaneros son:

1. Directos: Los usuarios aduaneros;

2. Indirectos: Toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier trámite u operación aduanera y en general cualquier persona que sea requerida

por la autoridad aduanera. Serán responsables por su intervención, según corresponda, y por el suministro de toda documentación e información exigida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

ARTÍCULO 8 Decreto 1165 de 2019. RESPONSABLES DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA. Son responsables de la obligación aduanera los obligados de que trata el artículo 7 de este Decreto, por las obligaciones derivadas de su intervención y por el suministro de toda documentación e información exigida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

El importador será el responsable de acreditar la legal introducción de las mercancías al Territorio Aduanero Nacional, con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar de conformidad con lo previsto en este Decreto.

Cuando actúe de manera directa, será el responsable por la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la declaración aduanera y por la correcta determinación de la base gravable y la liquidación de los tributos aduaneros, sanciones y rescate a que haya lugar.

Cuando actúe a través de una agencia de aduanas, responderá por la autenticidad de los documentos soportes que sean obtenidos y suministrados por él, así como por la entrega de la totalidad de la información sobre los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación a efectos de valoración aduanera de acuerdo por lo solicitado por la agencia de aduanas.

Cuando el importador elabore y firme la Declaración Andina de Valor, responderá por el lleno total de los datos exigidos en la misma, por la correcta determinación del valor en aduana atendiendo a la técnica establecida por las normas de valoración vigentes.

En el caso de un consorcio o unión temporal o una asociación empresarial, la responsable por el pago de los tributos aduaneros será solidaria, y recae sobre las personas jurídicas y/o naturales individualmente consideradas que los conformen.

Las obligaciones derivadas de la autorización como operador económico autorizado son las previstas en el Decreto 3568 de 2011 o el que lo sustituya o modifique, además de las establecidas en este Decreto para los usuarios aduaneros según corresponda.

Artículo 680 del Decreto 1165 de 2019, Requerimiento Especial Aduanero la autoridad aduanera formulara requerimiento especial aduanero contra el presunto autor o autores de una infracción aduanera, para proponer la imposición de la sanción correspondiente; o contra el declarante, para formular liquidación oficial de corrección o de revisión. Con la notificación del requerimiento especial aduanero se inicia formalmente el proceso administrativo correspondiente.

Artículo 681 del Decreto 1165 de 2019, Requerimiento Especial Aduanero El requerimiento especial aduanero se deberá expedir y notificar oportunamente. En tal sentido, sin perjuicio de los términos de caducidad y de firmeza de la declaración, el funcionario responsable del proceso lo expedirá, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se haya establecido la presunta comisión de una infracción administrativa aduanera o identificada la inexactitud de la declaración que dan lugar a la expedición de liquidaciones oficiales.

Artículo 683 del Decreto 1165 de 2019, Contenido del Requerimiento Especial Aduanero. El requerimiento contendrá los aspectos de la declaración aduanera que se propone modificar; la cuantificación de los tributos aduaneros, rescate y/o sanciones, que se proponen; la vinculación del agente de aduanas para efectos de deducir la responsabilidad que le pueda caber; así como el garante y de los terceros a que hubiere lugar; los hechos que constituyen infracción; y las normas en que se sustentan.

Artículo 684 del Decreto 1165 de 2019. Notificación y Respuesta al Requerimiento Especial Aduanero. El requerimiento especial aduanero se notificará de manera personal

o por correo al presunto infractor o infractores y a los terceros que deban vincularse, tales como a la compañía de seguros, entidad bancaria o, en general, al garante.

La respuesta al Requerimiento Especial Aduanero se presentará por el interesado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación y en ella formulará sus objeciones y solicitará las pruebas que pretenda hacer valer. Tal escrito no requiere de presentación personal.

El plazo de respuesta al Requerimiento Especial Aduanero se podrá ampliar en aquellos casos en que sea necesario acreditar el cumplimiento de restricciones legales o administrativas como soporte de la declaración de corrección, cuando haya lugar a ello, sin que superen los cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Artículo 686 del Decreto 1165 de 2019. Acto Administrativo que Decide de Fondo la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción. La formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar, término que se contara así:

1. A partir del siguiente vencimiento del termino para responder el requerimiento especial aduanero, cuando no hubiere pruebas que decretar ni a petición parte ni de oficio.
2. A partir del día siguiente al de la presentación de respuesta al requerimiento especial aduanero, donde el interesado renuncie al resto del término que faltare, siempre y cuando no hubiere nuevas pruebas que decretar, ni a petición ni de oficio.
3. A partir del día siguiente a notificación auto que cierra el periodo probatorio.

El acto administrativo que de fondo será motivado y resolverá sobre los demás aspectos a que hubiere lugar, tales como la efectividad de la garantía y la finalización del régimen aduanero, si esto fuere procedente.

Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requisitos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo.

Artículo 769. DECRETO 1165 DE 2019.- TRANSITORIO PARA LOS TRAMITES ADUANEROS, LAS OBLIGACIONES E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CON OCASIÓN DE LA TRANSICIÓN NORMATIVA.

Toda obligación o trámite aduanero iniciado con ocasión de la aplicación de cualquier régimen o modalidad, en vigencia de la normatividad anterior a la fecha en que entre a regir el presente Decreto, deberá adelantarse hasta su culminación, de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Para el caso de la importación de mercancía, se entenderá que el trámite inició desde la presentación y envío de la información de los documentos de viaje y el manifiesto de carga de manera anticipada a la llegada de la mercancía al Territorio Aduanero Nacional, por parte del transportador o el agente de carga, según corresponda.

Para el caso de la exportación de mercancía, se entenderá que inició el trámite con el diligenciamiento y aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque a través de los Servicios Informáticos Electrónicos.

La presentación y trámite de la declaración de corrección o de modificación de una declaración de importación o de exportación, se adelantará de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se presentó y aceptó la declaración que se está corrigiendo o modificando, o al momento de presentación y aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque según el caso.

Las resoluciones de clasificación arancelaria que hayan sido emitidas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, mantendrán su aplicabilidad mientras no cambien las condiciones bajo las cuales fueron expedidas o no hayan sido expresamente derogadas por otra.

Parágrafo. Cuando una operación aduanera se haya iniciado en vigencia de la normatividad anterior a la fecha en que entre a regir el presente Decreto, el régimen de obligaciones, infracciones y sanciones aplicable, será el establecido en la norma vigente al momento de su inicio, sin perjuicio de la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

El Estado por mandato legal tiene la potestad sancionadora y por ello ha investido de suficientes facultades a la autoridad aduanera para iniciar, impulsar y finalizar un procedimiento administrativo contra los usuarios aduaneros, cuando se detecten presuntas infracciones por acción u omisión, consagradas en la legislación aduanera dentro de las operaciones de importación, exportación o tránsito aduanero, y se determine la violación o no de las normas aduaneras con los hechos informados.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad; tal y como lo establece el artículo 469 del decreto 2685 de 1999 y sus respectivas modificaciones.

Los actos jurídicos que realiza la Administración deben guardar una doble correspondencia con la ley que rige dichos actos, y con el interés público que con ellos va a satisfacerse. De manera que la conformidad del acto con la Ley constituye el concepto de legitimidad o legalidad en el derecho colombiano.

Las determinaciones de la Administración han de regirse por los hechos y pruebas que aparezcan relacionadas en el expediente, y no por presunciones o supuestos.

Lo anterior porque, no obstante que sobre el régimen aduanero existe un procedimiento especial, no es menos cierto, que habrá de observarse los principios que rigen las actuaciones administrativas, invocados en la Constitución Nacional en su artículo 209, que prescribe que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Igualmente solicitó que se tenga en cuenta el artículo 27 del Código Civil:

“Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu...”

Verificada la procedencia de la investigación administrativa, trasladada por parte del área operadora, el despacho asume el conocimiento de la presente actuación, en el estado procesal que se encuentra, de acuerdo a las competencias regladas en el Decreto 4048 de 2008 y artículo 7 de la Resolución 0009 de 2008.

Precisado lo anterior y analizados los antecedentes remitidos por la División de Gestión de la Operación Aduanera de esta Seccional con oficio N°119245451- **0044** de **18/02/2020**, siendo estas las pruebas y los medios probatorios pertinentes, conducentes y eficaces, para que este despacho se pronuncie y tome decisión en los siguientes términos:

En primer lugar, manifestarle al interesado que en este proceso administrativo se está resolviendo lo pertinente en cuanto al incumplimiento de la obligación de terminar la importación temporal de mercancías en arrendamiento el cual fue autorizado con Declaración de Importación autoadhesivo N° **07256270156943** del **14/01/2010** con levante No. **192010000001031** del **15/01/2010**, con Declaraciones de Modificación No. **07256280226068** del **08/06/2010** y levante **192010000024119** del **15/06/2010**, inicial reimportación # **13582010184884** de **27/01/2015**, inicial reimportación # **13582010187982** de **04/03/2015**, garantizado con póliza específica # **24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817** expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A. con vigencia del **05-01-2015** al **04/01/2020** y la cual debió ser finalizada el día **04/01/2020**, debido a que hasta esa fecha se encontraba garantizada la modalidad de importación temporal; aunque el contrato de arrendamiento financiero leasing internacional que soporta la modalidad de importación temporal, celebrado entre Pioneer Drilling Services Ltd. y proveedora internacional de taladros termina el **04/01/2022**, establece el artículo 153 del decreto 2685 de 1999 que la importación temporal autorizada debe estar garantizada a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 147 del decreto 2685 de 1999, normatividad vigente al momento del ingreso de la mercancía al territorio aduanero nacional.

Valor asegurado \$

TOTAL, TRIBUTOS ADUANEROS \$	4.269.439.260,48
------------------------------	------------------

En segundo término. - Previo al estudio que permita concluir la aplicación de la norma correspondiente al presente caso, se hace estrictamente necesario acudir a la aplicación de la norma en el tiempo, la irretroactividad, la transitoriedad; toda vez que la normatividad vigente a la fecha en materia aduanera es la consagrada en el decreto 1165 de 2019 y resolución 0046 de 2019 que lo reglamenta.

Como tercera medida.- acudiendo a lo precisado por el artículo 769 del pregonado decreto 1165 de 2019, en lo atinente a la transitoriedad de la norma y direccionando

nuestro actuar en atención al nacimiento de la obligación aduanera y la norma vigente al momento de la exigibilidad, así como la connotación de tipo aduanero en atención a la modalidad de importación temporal a largo plazo de mercancía en arrendamiento financiero leasing, el cual finalizaría en el giro ordinario con la materialización de la opción de compra (entre otros) pero que solo en vigencia del decreto 1165 de 2019, por no proceder a la modificación de la garantía la cual se encontraba con vigencia hasta el 04 de enero de 2020 y solo hasta fecha 31 de enero pretendieron acceder a su aprobación, no solo de forma extemporánea sino por demás por intermedio de la agencia de aduanas; motivo por el cual y con la consecuencia lógica del incumplimiento de una obligación que nace en vigencia del decreto 1685/99.

Artículo 769. DECRETO 1165 DE 2019.- TRANSITORIO PARA LOS TRAMITES ADUANEROS, LAS OBLIGACIONES E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CON OCASIÓN DE LA TRANSICIÓN NORMATIVA.

Toda obligación o trámite aduanero iniciado con ocasión de la aplicación de cualquier régimen o modalidad, en vigencia de la normatividad anterior a la fecha en que entre a regir el presente Decreto, deberá adelantarse hasta su culminación, de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Para el caso de la importación de mercancía, se entenderá que el trámite inició desde la presentación y envío de la información de los documentos de viaje y el manifiesto de carga de manera anticipada a la llegada de la mercancía al Territorio Aduanero Nacional, por parte del transportador o el agente de carga, según corresponda.

Para el caso de la exportación de mercancía, se entenderá que inició el trámite con el diligenciamiento y aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque a través de los Servicios Informáticos Electrónicos.

La presentación y trámite de la declaración de corrección o de modificación de una declaración de importación o de exportación, se adelantará de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se presentó y aceptó la declaración que se está corrigiendo o modificando, o al momento de presentación y aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque según el caso.

Las resoluciones de clasificación arancelaria que hayan sido emitidas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, mantendrán su aplicabilidad mientras no cambien las condiciones bajo las cuales fueron expedidas o no hayan sido expresamente derogadas por otra.

Parágrafo. Cuando una operación aduanera se haya iniciado en vigencia de la normatividad anterior a la fecha en que entre a regir el presente Decreto, el régimen de obligaciones, infracciones y sanciones aplicable, será el establecido en la norma vigente al momento de su inicio, sin perjuicio de la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria.

Como cuarta situación a tener en cuenta es que al no existir pruebas documentales que demuestren la finalización del régimen de importación temporal de Mercancías en Arrendamiento Financiero garantizado establecido en el Art.153 del Decreto 2685/99, garantizado con póliza específica de Cumplimiento de Disposiciones Legales, en razón a haber operado el vencimiento de las mismas; es decir con vencimiento del régimen

garantizado el 04-01-2020, y autorizado a las Declaraciones de Importación Iniciales, **Modificación, y Contrato de Arrendamiento y sus** modificaciones Convenio modificador; **según el Art. 153 del Decreto 2685/99**, debido a que no se han aportado las pruebas que demuestren que las importaciones autorizadas fueron terminadas como lo establece el Art. 156 del Decreto 2685/99 modificado por el Art.15 del Decreto 1232/2001 modificado por el Art.11 del decreto 4136/2004...”

Tenemos como quinta circunstancia y que vale la pena resaltarle al usuario, que las normas no contemplan excepción alguna, ni eximen de responsabilidad al importador, por el contrario, es precisa en cuanto a que la modificación del término y la modalidad debe efectuarse antes del vencimiento del plazo señalado en la Declaración de importación y en el contrato modificadorio, en aplicación del Artículo 153 del Decreto 2685/99, por lo que si el importador no cumple con su obligación de terminación de la importación temporal de Mercancías en Arrendamiento se configura el incumplimiento de la obligación que a su vez da lugar a hacer efectiva la póliza que garantiza precisamente tal obligación.

Se concluye entonces, que a la fecha de proferir la presente actuación administrativa no se ha demostrado y/o aportado documento aduanero alguno que demuestren que la importación temporal enunciada se dio por terminada en debida forma, en los eventos establecidos en el Artículo 156 del Decreto 2685/99, modificado por el Artículo 15 del Decreto 1232/2001, modificado por el Artículo 11 del Decreto 4136/2004, razón por lo cual este despacho propone a la División de Gestión de Liquidación de esta Dirección Seccional decrete el incumplimiento al régimen y haga efectiva la garantía enunciada por los montos de los tributos aduaneros y sanciones que se deriven de esta como consecuencia de su incumplimiento dentro del proceso administrativo previsto para imponer sanciones, en los términos establecidos en el Artículo 150 del Decreto 2685/99 Modificado por el artículo 8 del Decreto 4136 de 2004.

Por tanto, no cumplida la obligación en cuestión, es procedente por parte de este despacho, como en efecto ocurre, proponer a la División competente de esta administración **declarar el incumplimiento de la obligación y hacer efectiva la póliza**, independientemente de que posteriormente el importador hubiere presentado declaraciones, pagado impuestos aduaneros y/o sanciones, pues en este caso, se reitera que la póliza garantizaba el cumplimiento del régimen en tiempo oportuno.

Visto lo anterior es objeto de estudio y análisis por parte de la División de Gestión de Fiscalización de esta Jurisdicción, la posible proposición de una sanción administrativa a la sociedad PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A., en calidad de importador, en relación a la presunta infracción reglada en el numeral 1.3 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 15 del Decreto 4136 de 2004, **más los tributos aduaneros respectivos**, el cual será notificado al actor y la compañía de seguros CONFIANZA, por correo.

En consecuencia, a la luz del régimen Sancionatorio, durante el término otorgado por la autoridad aduanera para la importación temporal de Mercancías en Arrendamiento garantizada con la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales arriba anotada, **no se ha demostrado por parte del importador** PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A, la finalización del régimen.

Así mismo, el importador PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A, **NO DEMOSTRÓ** ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 156 del decreto 2685/199, modificado por el art. 15 del decreto 1232/2001, modificado por el art. 11 del decreto 4136/2004., que probaran que se finalizó en legal forma la importación temporal enunciada."

Es así que, en aras de garantizar la primacía y protección de los derechos constitucionales fundamentales, así como reconocer la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el Código General del Proceso, aplica a los modernos sistemas procesales que imperan en el mundo y acoge los adelantos en tecnologías de la información y la comunicación; uso de internet, documentos electrónicos para las actuaciones procesales, práctica de pruebas y expediente, entre otros.

La manera de manejar los documentos y las copias no hace más que favorecer al justiciable y legislar para los tiempos actuales donde las copias, las fotocopias, además de los logros tecnológicos, son los usados por los ciudadanos en general.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba, con plena observancia del debido proceso".

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que "toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes

El debido proceso en materia administrativa se considera como un sistema de garantías que procuran la obtención de decisiones justas que "(...) buscan en su interrelación obtener una actuación administrativa coherente con las necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en juego proporcionando las garantías que sean necesarias para la protección de los derechos fundamentales dentro de la relación procesal en procura de decisiones verdaderamente justas y materiales. En otras palabras se busca un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho sustancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general

En consecuencia y de acuerdo al hecho anotado, genera como consecuencia para que se liquide la sanción contemplada en el literal:

"1.3. No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros correspondiente..."

La sanción aplicable será de multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

S.M.M.L.V.	\$ 877.803.00
SANCION APLICABLE EN S.M.M.L.V.	7
VALOR MULTA SANCION	(\$ 6.144.621.00),

Teniendo en cuenta que el salario vigente en el año que se da el incumplimiento es el 2020 fue fijado por el decreto 2360 de 2019

De Otra parte, las obligaciones inherentes a la modalidad de importacion sub judice, se encuentran garantizadas en la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales de **SEGUROS CONFIANZA S.A**; siendo su razón de ser el incumplimiento de la terminación en la importación temporal estudiada y liquidada en el acto preparatorio expedido por la División Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional y aceptada por lo que se hace necesario efectuar la liquidación de los tributos aduaneros, con el fin de hacerlos exigibles al momento de hacer efectiva La Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales ya anotada, así:

Póliza específica 24 DL007997	Cert Modf Mod - 24 DL014593, 5
MANIFIESTO DE CARGA No.	116575001034729
B/L No. y Fecha:	IC1001HS7
TASA DE CAMBIO:	1.969,08
SUBPARTIDA	84-30-49-00-00
FACTURA No	PI051-02 de 06-01-2010
CANTIDAD	01
PAIS DE ORIGEN	249
PAIS DE PROCEDENCIA	249
VALOR FOB USD\$	13.250.000
VALOR FLETES, SEGUROS OTROS GASTOS USD\$	301.503,94
VALOR ADUANAS USD\$	13.551.503,94
VALOR ADUANAS EN PESOS	26.683.995.378
ARANCEL 0% \$	0

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

BASE LIQUIDACIÓN IVA \$	26.683.995.378
IVA 16% LIQUIDADO \$	4.269.439.260,48
TOTAL, TRIBUTOS ADUANEROS \$	4.269.439.260,48

En mérito de lo expuesto, el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta.

PROPONE

PRIMERO: a la División de Gestión de Liquidación de esta Seccional,

A.-) Sancionar al Importador **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.**, NIT **900.322.513 - 3**, con sanción equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuya suma asciende a **SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN MIL PESOS M/L (\$6.144.621.00)**, por encontrarse inmerso dentro de la conducta tipificada como infracción aduanera, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 1.3 del artículo 482-1 del decreto 2685/99, adicionado por el Art. 15 del decreto 4136 de 2004, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

B.-) Así mismo, decretar el incumplimiento al régimen, hacer efectiva la garantía y proceder a modificar de oficio la declaración de importación en los términos establecidos en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, teniendo en cuenta que en lo considerado hasta aquí en esta providencia da evidencia de incumplimiento al no haber finalizado en término la modalidad el día 04 de enero de 2020 y lo fijado en la misma normativa según el Artículo 150 del Decreto 2685 de 1999; Modificado por el Decreto 4136 de 2004 artículo 8 y el artículo 482-1 Numeral 1.3. del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el Art. 15 del decreto 4136 de 2004.

C.-) Afectar la póliza en las sumas correspondientes a la sanción propuesta de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes **SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN MIL PESOS M/L (\$6.144.621.00)**, más lo correspondiente al **IVA**, así:

IVA 16% LIQUIDADO \$	\$ 4.269.439.260,48
TOTAL, IVA LIQUIDADO	\$ 4.269.439.260,48

Más los intereses a que haya lugar

SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al importador **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.**, NIT **900.322.513 - 3**
DIRECCION CALLE 99 # 10 - 19 PISO 6 BOGOTA D.C.
y la aseguradora **COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A CONFIANZA** NIT **860.070.374-9** cuya DIRECCION es en la CL 82 # 11 37 P 7 BOGOTA D. C.

En los términos y forma establecidos en los artículos 756 y 763 del Decreto 1165 de 2019.

23 JUN 2020

Continuación del Requerimiento Especial Aduanero Número 0126 de fecha 11 DE JUNIO 2020

De no ser posible la notificación por correo, será notificado mediante aviso en el Portal y/o Sitio Web de la DIAN, tal como lo prevé el artículo 764 del Decreto 1165 de 2019.

TERCERO: TÉRMINOS PARA RESPONDER: Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente requerimiento especial aduanero, ante esta División, el presunto infractor deberá presentar por escrito sus objeciones y solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer, tal como lo dispone el artículo 684 del Decreto 1165 de 2019.

ARTICULO 4º: ALLANAMIENTO: Cuando el destinatario del presente requerimiento especial aduanero dentro del término para dar respuesta reconozca por escrito haber cometido la infracción, la sanción de multa se reducirá al cuarenta por ciento (40%) conforme a lo establecido en el artículo 610 del Decreto 1165 de 2019. No obstante, lo anterior y para que proceda la reducción de la sanción, el infractor deberá en cada caso anexar el escrito en el que reconozca haber cometido la infracción y presentar el debido recibo oficial de pago en bancos, donde se acredite la cancelación de la sanción en el porcentaje correspondiente, además de los mayores tributos aduaneros, cuando haya lugar a ello.

Vencido el término para dar respuesta al presente requerimiento especial aduanero y luego de cumplirse el periodo probatorio si fuere el caso, se dará traslado del expediente a la División de Gestión de Liquidación de esta Dirección Seccional para que proceda a proferir la decisión de fondo si a ello hubiere lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firma :

Nombre Completo

Cargo del empleado público que la emite


: LINO MARTINEZ CUESTA

: JGIT Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario

Proyecto:

Firma:

Nombre Completo

Cargo


: ENRIQUE TADEO DIAZ GRANADOS ZAGARRA

: ANALISTA IV

Revisó

Firma:

Nombre Completo

Cargo


: LINO MARTINEZ CUESTA

: JGIT Inv. Aduaneras y Control Cambiario

Remitente

Remite: Rute Social
Dirección: CRA 5 # 17-04
Ciudad: SANTA MARTA, MAGDALENA
Departamento: MAGDALENA
Código postal: 470004090
Envío: R-30214082CO

Destinatario

Remite: Rute Social
Dirección: CRA 5 # 17-04
Ciudad: SANTA MARTA, MAGDALENA
Departamento: MAGDALENA
Código postal: 470004090
Envío: R-30214082CO



RESOLUCION No 00108

FECHA: 16/02/2021

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION

Seccional:		Dependencia:	
TOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA Código: 019		DIVISION DE GESTION JURIDICA Código: 236	
De Expediente: TL 2010 2020 00274 CP AG AC CS		Fecha Expediente: 10 03 2020 DIA MES AÑO	
Razón social: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.		NIT: 900.322.513	
Dirección: Avenida Carrera 9 # 113 - 52 Oficina 402 Edificio Torres Unidas		Municipio: Bogotá D.C.	
		Departamento: Cundinamarca	
Razón social: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.		NIT: 860.070.374	
DIRECCION: Calle 82 # 11 - 37 Piso 7°		Municipio: Bogotá D.C.	
		Departamento: Cundinamarca	
TIPO DE ACTO IMPUGNADO: RESOLUCION SANCION			
Número: 526	Fecha Expedición: 26 10 2020 DIA MES AÑO	Fecha Notificación: 03 11 2020 DIA MES AÑO	
Radicación Recurso: Nivel Central - Proveedora 000E2020016751 de 25/11/2020		Radicación seccional: 007286	Fecha: 01/12/2020
Nombres y Apellidos de quien suscribe el recurso: GONZALO E. BOLAÑOS FORERO		Calidad en que actúa: Representante legal	CC: 11.349.913
DIRECCION: Avenida Carrera 9 # 113 - 52 Oficina 402 Edificio Torres Unidas		Municipio: Bogotá D.C.	Departamento: Cundinamarca
Radicación Recurso: Nivel Central - Confianza 003E2020026338 de 24/11/2020		Radicación seccional: 007269	Fecha: 30/11/2020
Nombres y Apellidos de quien suscribe el recurso: GLORIA ESPERANZA NAVAS GONZALEZ		Calidad en que actúa: Representante legal judicial	CC: 35.408.565 TP: 64.750 CSJ
DIRECCION: Calle 82 # 11 - 37 Piso 7°		Municipio: Bogotá D.C.	Departamento: Cundinamarca

El Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, en ejercicio de las facultades establecidas en los Decretos 1165 de 2019, 1742 de 2020, Resolución 009 de 2008; y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias y/o reglamentarias,

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en el Nivel Central el 24 de noviembre de 2020 bajo el # 003E2020026338, posteriormente recibido en esta dirección seccional el 30 de noviembre de 2020 bajo el # 007269, la abogada Gloria Esperanza Navas Gonzalez, identificada con cedula de ciudadanía No 35.408.565 y Tarjeta Profesional de Abogado No 64.750 del CSJ, obrando en calidad de representante legal para asuntos judiciales de Compañía Aseguradora de Fianzas SA con NIT 860.070.374, interpone recurso de reconsideración contra la resolución sanción No. 526 de fecha 26 de octubre de 2020, y por medio del cual se impuso una sanción al usuario aduanero Proveedora Internacional de Taladros SA con NIT 900.322.513, se decreta un incumplimiento de un régimen de importación temporal, y se afecta una póliza en el valor de la sanción más el monto del impuesto sobre las ventas suspendido; acto éste expedido por la División Gestión de Liquidación de esta Dirección Seccional.

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

Para efectos del recurso, la recurrente demuestra su calidad de representante legal para asuntos judiciales, a través de certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha 3/11/2020 pin de verificación 3426101192770711.

Igualmente, mediante escrito radicado en el Nivel Central el 25 de noviembre de 2020 bajo el # 000E2020016751, posteriormente recibido en esta dirección seccional el 01 de diciembre de 2020 bajo el # 007286, el Señor Gonzalo E. Bolaños Forero, identificado con cedula de ciudadanía No 11.349.913, obrando en calidad de representante legal de la sociedad Proveedora Internacional de Taladros S.A.S. con NIT 900.322.513, interpone recurso de reconsideración contra la resolución sanción No. 526 de fecha 26 de octubre de 2020, y por medio del cual se le impuso una sanción, se decretó un incumplimiento del régimen de importación temporal, y se afecta una póliza en el valor de la sanción más el monto del impuesto sobre las ventas suspendido; acto éste expedido por la División Gestión de Liquidación de esta Dirección Seccional.

Para efectos del recurso, y su capacidad para recurrir, éste fue reconocido dentro del proceso de la referencia, tal como se aprecia en el acto recurrido, amén del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 11/08/2020, que reposa a folio 508, allegado con ocasión de la respuesta al requerimiento especial aduanero.

PRESUPUESTOS PROCESALES:

Los artículos 601 y 604 del decreto 390 de 2016 establecen los presupuestos y requisitos para la procedencia del recurso de reconsideración en materia aduanera; los cuales fueron verificados y se estableció el cumplimiento total, lo que genera en consecuencia el fallo que aquí se plasma.

En efecto, las sociedades recurrentes demuestran su capacidad para actuar, recurren por escrito, y actúan oportunamente, pues bajo el entendido de que fueron notificados el 3/11/2020, gozaban del término hasta el 25/11/2020.

ANTECEDENTES

Mediante oficio 119245451-0044 de fecha 18/02/2019, la Jefe del GIT Control de Garantías de la División de Gestión de la Operación Aduanera de esta dirección seccional, remite a la División de Gestión de Fiscalización de esta dirección seccional, los antecedentes administrativos relacionados a importación temporal de mercancías en arrendamiento, Declaración de Importación sticker # 07256270156943 del 14/01/2010 Modificación sticker # 07256280226068 del 8/06/2010, Inicial Reimportación sticker # 13582010184884 de 27/01/2015, Inicial Reimportación sticker # 13582010187982 de 4/03/2015, la cual debió finalizar el 4 de enero de 2020, y cuyo importador es Proveedora Internacional de Taladros

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 -04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

SA con NIT 900.322.513; ello como consecuencia de que la garantía que garantiza la finalización de la modalidad con el pago de tributos y el pago de sanciones a que hubiere lugar.

La División Gestión de Fiscalización, como es de conocimiento del recurrente, previo conocimiento de los antecedentes antes anunciados, y previa apertura de expediente a través de auto No 2020119238457-00274 de fecha 10/03/2020, ha proferido el requerimiento especial aduanero No 126 de fecha 11/06/2020, proponiendo sancionar al importador Proveedora Internacional de Taladros SA con NIT 900.322.513, con multa equivalente a 7 salarios mínimos legales mensuales (\$6.144.621.00), igualmente se propone decretar el incumplimiento al régimen, hacer efectiva la póliza, modificar de oficio la declaración de importación, y en consecuencia afectar la póliza por el valor de la sanción y el valor de IVA liquidado más los intereses a que haya lugar (\$4.269.439.260.00); al tenor de lo dispuesto en el artículo 482-1 num 1.3 del Decreto 2685/99 adicionado por el Dec 4136/2004 artículo 15, artículo 150 del Decreto 2685/99 y sus modificaciones.

Dicho acto fue notificado por correo especializado, a la compañía de seguros Confianza SA el 26/06/2020, y al importador el 18/08/2020.

Previo respuesta al requerimiento aduanero de parte de Compañía Aseguradora de Fianzas SA y de Proveedora Internacional de Taladros SA, la División Gestión de Liquidación de esta seccional, profiere acto administrativo sancionatorio # 526 de fecha 26/10/2020, debidamente notificado a las partes el 03/11/2020, ordenando en su parte resolutive, imponer sanción al importador Proveedora Internacional de Taladros SA con NIT 900.322.513, con multa equivalente a 7 SMLM (\$6.144.621.00) por infracción tipificada en el numeral 1.3 artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999 adicionado por el artículo 15 del Decreto 4136 de 2004.

Así mismo se ordena en dicho acto administrativo, decretar el incumplimiento al régimen de importación temporal Declaración de Importación sticker # 07256270156943 del 14/01/2010 Modificación sticker # 07256280226068 del 8/06/2010, Inicial Reimportación sticker # 13582010184884 de 27/01/2015, Inicial Reimportación sticker # 13582010187982 de 4/03/2015, y hacer efectiva la póliza y modificar de oficio la declaración de importación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 4136/2004. Por último ordena afectar la póliza en la suma determinada como sanción así como los valores correspondientes al IVA suspendido y no pagado (\$4.269.439.260.00) más los respectivos intereses.

Tal como antes se anota, la Doctora Gloria Esperanza Navas González, abogada identificado en la referencia, obrando en calidad de apoderado especial de la compañía

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17-04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION _No. 00108_ DE FECHA _16/02/2021_, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

aseguradora Confianza SA con NIT 860.070.374, y el Señor Gonzalo E Bolaños Forero identificado en la referencia, representante legal del importador Proveedora Internacional de Taladros SA con NIT 900.322.513, con escritos radicados oportunamente, interponen recurso contra el acto sancionatorio, el cual fue verificado y aceptado para su estudio y fallo.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

Tanto la aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., como el usuario aduanero Proveedora Internacional de Taladros S.A.S., presentaron idénticos argumentos de controversia contra el acto recurrido, señalando en concreto:

Que se configura la falsa motivación, pues la DIAN interpreta erróneamente, que la omisión de presentar la renovación de la garantía antes de su finalización, implica indefectiblemente que la modalidad de importación temporal a largo plazo debe terminar.

Que frente al argumento de la entidad referente a la interpretación del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, dicha norma claramente estipula que la mercancía podrá permanecer en el territorio nacional por el termino de vigencia del contrato, y en parte alguna señala que dicha mercancía solo podrá permanecer en el territorio si se renueva la póliza antes del vencimiento de la inicial; y que esta condición que pretende imponer la DIAN riñe con el sentido gramatical o literal de la norma, ordenado por los artículos 27 y 28 del CC.

Que aplicando el método de interpretación gramatical, la única condición que prohíbe la permanencia en el territorio nacional de la mercancía importada, es que no se haya pagado el saldo de los tributos aduaneros, y por lo tanto la tesis de la entidad, sería aceptar una nueva obligación que desencadena una limitación a un derecho, desconociendo que solo la constitución y la ley lo pueden hacer.

Que los tributos fueron aduaneros causados fueron debidamente cancelados dentro de los términos, por lo que en ese orden de ideas, se cumple con la condición establecida en el inciso 4 del artículo 153 del Decreto 2685/99, y por lo tanto es procedente la permanencia de los bienes durante el término del contrato sometidos a la importación temporal.

Que la entidad desconoce el sentido gramatical del inciso primero del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, que señala que la modificación de la modalidad de importación temporal debe hacerse antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, y no antes del vencimiento de la póliza inicial. Además, para que se dé por terminada por parte de la autoridad aduanera, se debe cumplir los términos definidos en el artículo 150.

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 -04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

Que los argumentos del acto recurrido para confirmar la sanción de que trata el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685/99, no desvirtúan los cargos que se expusieron en la respuesta al REA.

Que el acto recurrido no realiza un estudio coherente en contra del argumento de falsa motivación, y que de la lectura del numeral 1.3 artículo 482-1 del D 2685/99, no se advierte que allí se tipifique una conducta referente a que la póliza deba ser renovada en monto equivalente a la sanción allí contemplada; y que la terminación de la modalidad de importación se da en los casos expresamente señalados en el artículo 156 del D 2685/99.

Que se viola el principio de tipicidad, fundamentado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, pues tanto el REA como la Resolución Sanción tipifican erróneamente la infracción aduanera contenida en el numeral 1.3 del Art 482_1 Dec 2685/99, pues ésta solo procede en el evento de la importación temporal para reexportación en el mismo estado; y en este caso lo que ocurrió fue la no presentación de la póliza antes del vencimiento de la inicial, y que en todo caso no implica la terminación de la modalidad.

Que la entidad pretende endilgar una conducta a la sociedad recurrente, basada en interpretaciones extensivas de los artículos 150 y 153 del Dec 2685/99, lo cual riñe con los principios que rigen la función administrativa, especialmente el de analogía, y la manera como se pretende sancionar, la doctrina sostiene que se actúa arbitrariamente y por ende viciado de inconstitucionalidad, por lo que sanción impuesta es abiertamente ilegal.

Que el artículo 29 de la CN obliga a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, debe existir correlación entre la conducta reprochada y la consecuencia sancionadora, y que en desarrollo del principio de "lex praevia", la conducta señalada por la entidad no preexiste; reafirmado incluso por la propia entidad en la resolución recurrida.

Que es causal de nulidad de los actos administrativos, la infracción a las normas en que debería haberse fundado dicho acto, y que en el presente caso se dan dos de las causales que dicta la jurisprudencia, como son, la falta de aplicación e interpretación errónea; pues al tenor del artículo 147 del Dec 2685/99, en ningún evento contempla que se haga efectiva la garantía, cuando no se haya renovado ésta antes de su vencimiento.

Que la infracción de las normas que debe fundarse el acto, implica que se debe confrontar el acto con las normas legales, y con los principios y normas constitucionales; y en el presente caso la entidad vulnera el principio de justicia y equidad tributaria, al igual que la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal. Lo anterior porque se pretende sancionar a pesar de que la conducta no se tipifica en la infracción contenida en el numeral 1.3 artículo 482-1, y además se impone una carga tributaria mayor a la debida.

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17-04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

Que como los eventos no se cumplen, resulta imperativo no afectar la suma correspondiente al IVA, que no se ha causado y sobre la cual el importador se acogió al beneficio contenido en el artículo 428 lit e del Estatuto Tributario; es decir, la Dian pretende imponer una carga tributaria que no corresponde a la operación analizada.

Que para desvirtuar el cargo de violación al principio de justicia y equidad tributaria, olvidan que no hay razón jurídica válida para modificar de oficio la modalidad de importación a ordinaria, pues no se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 156 Dec 2685/99.

Que la formalidad de la Dian de imponer la renovación de la garantía antes de finalizar la primera vigencia, va en contravía de la prevalencia de del derecho sustancial sobre las formas, pues se desconoce que la importación temporal hoy en día se encuentra amparada por póliza renovada, que no fue oportuna, pero en ultimas la sigue amparando.

Que la autoridad aplica en extremo rigor el plazo para renovar la garantía, sin cimentarse en norma jurídica, renunciando a que hoy la garantía existe y ampara las mercancías, verdad objetiva y evidente que desconoce la entidad, vulnerando el principio de prevalencia de los sustancial sobre lo formal.

Que se viola el debido proceso probatorio, pues a pesar de existir documentos que prueban que la mercancía puede permanecer en el territorio nacional sin terminar la modalidad de importación, la autoridad aduanera se separa de lo consignado en el contrato de arrendamiento financiero, en la póliza y en la declaración de importación; pues da por probado que la importación debe terminar el 4/01/2020 sin que el contrato de arrendamiento lo indique, y desconoce que la garantía renovada el 31/01/2020 ampara la mercancía, también desconoce que el bien amparado puede permanecer en el territorio nacional hasta el 4/01/2022.

Que se viola el principio de tutela a la confianza pública, pues vulnero la confianza que tiene la compañía de encontrarse en un medio jurídico estable, sustentada en lo señalado en los artículos 147 y ss del Dec 2685/99; por lo que mal haría la entidad afectar una garantía e imponer sanción en base a alcances extensivo de las normas, contrariando el método de interpretación gramatical que se le debe dar a las mismas.

Que hay defecto sustantivo de la resolución sanción por motivación insuficiente, adolece de justificación interna y externa, primero porque no se hace un estudio coherente en contra del argumento expuesto en el REA sobre la falsa motivación, con interpretaciones que nada tiene que ver con lo discutido, y que de la lectura del artículo 482-1 numeral 1.3 del Dec 2685/99 no se tipifica una conducta referente a la renovación de la póliza en un monto equivalente a la sanción allí contemplada; y también hay motivación insuficiente por la falta

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 -04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

de análisis en el cargo de violación, al principio de tipicidad, y porque además ni siquiera intenta desvirtuar los demás cargos expuestos en la respuesta al REA.

Como conclusión de sus argumentos, solicita revocatoria del acto sanción recurrido, y que se declare que no se cometió conducta tipificada en el num 1.3 art 482-1 del Dec 2685/99, y que no hay lugar a declarar incumplimiento, que se abstenga de afectar la póliza; y que tenga como pruebas la póliza de cumplimiento No 24DL007997, renovación de póliza 01DL23306 y recibo de pago arancel generado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

El Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 estableció en su artículo 6 que por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia sanitaria, las autoridades indicadas en el artículo 1° de ese decreto tendrían la posibilidad de suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, afectando así todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

Que de conformidad con el artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, y según lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución 0022 del 18 de marzo de 2020, el artículo 8° de la Resolución 0030 de 29 de marzo de 2020, y el artículo 1° de la Resolución 0055 del 29 de mayo de 2020 del Director de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, los términos en los procesos y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de DIAN estuvieron suspendidos entre el 19 de marzo y el 2 de junio de 2020. Los términos suspendidos corren nuevamente, teniendo en cuenta los días que al momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, incluidos aquellos establecidos en meses o años. Durante el término de la suspensión y hasta el momento en que se reanudaron las actuaciones, no corrieron los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y cambiaria.

De conformidad con las normas antes citadas, los términos estuvieron suspendidos entre el 19 de marzo y el 1 de junio, inclusive. Es decir, operó una suspensión de términos general por cuarenta y siete (47) días hábiles, salvo las excepciones previstas

Los términos suspendidos corren nuevamente, teniendo en cuenta los días que al momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, incluidos aquellos establecidos en meses o años. Durante el término de la suspensión y hasta el momento en que se reanudaron las actuaciones, no corrieron los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y cambiaria.

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17-04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RÉCURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

Señalado lo anterior, se hace necesario proceder conforme en el presente proceso.

Como garantía constitucional y legal, todo proceso administrativo que adelante la entidad, el derecho de defensa y el debido proceso deben garantizarse por parte de los funcionarios encargados de aplicar los procedimientos administrativos, y su protección en materia aduanera debe garantizarse, debiéndose dar oportunidad al interesado de defenderse desde el comienzo del trámite de todas las situaciones fácticas y jurídicas que incidan en la decisión. Este despacho percibe, que se han cumplido todas las instancias procesales que demanda el procedimiento aduanero, y que al usuario se la han brindado todas las oportunidades para que ejerza su derecho a la defensa y/o contradicción.

La DIAN, en el desarrollo de sus funciones -en este caso en materia aduanera-, tiene como uno de sus propósitos institucionales, brindar a los usuarios aduaneros la facilitación de sus gestiones de comercio exterior, lo que igualmente implica, que de parte de éstos se adecuen a lo que la legislación señala, todo ello como fin primordial de brindar seguridad jurídica.

Adentrándonos en el objeto que motiva la apertura del expediente de la referencia, es menester precisar y no sobra advertir, que la sociedad Proveedora Internacional de Taladros S.A.S. con NIT 900.322.513, a través de la Declaración de Importación sticker # 07256270156943 del 14/01/2010 Modificación sticker # 07256280226068 del 8/06/2010, Inicial Reimportación sticker # 13582010184884 de 27/01/2015, Inicial Reimportación sticker # 13582010187982 de 4/03/2015, declara y nacionaliza mercancías bajo la modalidad de importación temporal de mercancías en arrendamiento financiero leasing, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 2685 de 1999 artículos 146 y ss y sus modificaciones y la Resolución reglamentaria 4240 de 2000 y sus modificaciones. Igualmente, allí se acogen al diferimiento del IVA, según lo dispone el artículo 429 literal del Estatuto Tributario.

Señala la legislación vigente al momento (Decreto 2685 de 1999 y modificaciones), y sobre la cual el usuario aduanero aquí identificado se apoyó para presentar la modalidad de importación:

Artículo 145. Declaración de Importación temporal de largo plazo.

En la Declaración de Importación temporal de largo plazo se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por semestres vencidos, para lo cual se

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 -04,
Teléfono 4212208

convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente, para efectos aduaneros en el momento de su pago.

Artículo 147. Garantía. [Modificado por el Decreto 4136 de 2004 artículo 6°.]

La autoridad aduanera exigirá la constitución de una garantía a favor de la Nación, por el ciento cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto de responder, al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación, por la finalización de la modalidad con el pago de los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, la garantía se constituirá con el objeto de responder, al vencimiento del quinto año o al vencimiento del término para la cancelación de la cuota correspondiente a la mitad del plazo de los cinco (5) años, por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

En ambos casos, el objeto de la garantía también comprenderá los tributos aduaneros, intereses y sanciones que se generen por el incumplimiento de la obligación prevista en el inciso segundo del artículo 149 del presente decreto.

La garantía se constituirá en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cuando se trate de mercancías importadas temporalmente para reexportación en el mismo Estado, la garantía se constituirá por el 10% del valor CIF de la mercancía cuando tenga exención total de tributos aduaneros y por el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los tributos aduaneros a pagar cuando se trate de exención parcial.

Para la importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, culturales o recreativos no se exigirá la constitución de garantía".

Parágrafo. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse efectiva cuando la autoridad aduanera determine el incumplimiento en cualquiera de las cuotas que se hayan causado hasta la mitad del plazo de importación señalado en la declaración.

**Artículo 150 modificado por el artículo 8 del Decreto 4136 de 2004.
Modificación de la Modalidad.**

"Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, modificar la declaración de importación temporal a importación ordinaria o con franquicia y obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía, pagando, cuando fuere del caso, la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, los intereses pertinentes y La sanción a que haya lugar.

En caso de importaciones temporales a largo plazo, se proferirá acto administrativo declarando el incumplimiento y ordenando hacer efectiva la garantía en el monto correspondiente a las cuotas insolutas, más los intereses moratorios y el monto de las sanciones correspondientes previstas en el artículo 482-1 del presente decreto, dentro del proceso administrativo previsto para imponer sanciones. Ejecutoriado el acto administrativo, copia del mismo se remitirá a la jurisdicción de la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas que otorgó el levante a la declaración inicial para que proceda a proferir de oficio la modificación a la Declaración de importación temporal a importación ordinaria, a menos que el importador compruebe que en dicho lapso reexportó la mercancía.

La terminación de las importaciones temporales de mercancías en arrendamiento a iniciativa del importador mediante la modificación de la declaración de importación temporal a ordinaria, se surtirá cuando se ejerza la opción de compra. De no hacerlo el importador, la modificación se surtirá de oficio con la copia del acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se imponga la sanción por no terminación de la modalidad, el cual será remitido a la jurisdicción de la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas que otorgó el levante a la declaración inicial.

Cuando se trate de cambiar la modalidad de importación temporal de corto plazo a ordinaria, los tributos se deberán liquidar con base en las tarifas y tasa vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la modificación.

Para convertir una importación temporal de corto plazo a una de largo plazo, deberá modificarse en ese aspecto la Declaración de Importación, liquidando los tributos aduaneros que se habrían causado desde la fecha de presentación y aceptación de la Declaración Inicial, siguiendo las normas consagradas para las importaciones temporales de largo plazo y cancelando las cuotas que se encuentren vencidas.

Parágrafo 1º. Para la modificación de una importación temporal de bienes de capital a importación ordinaria o con franquicia se presentará como documento soporte de la modificación la licencia previa presentada con la declaración inicial.

Parágrafo 2º. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá modificar de oficio la declaración de importación temporal a largo plazo para reexportación en el mismo Estado cuando se determine el incumplimiento en el pago de las cuotas causadas y debidas hasta la mitad del plazo señalado en la declaración de importación.

Así mismo, podrá hacer efectiva la garantía para el cobro de los tributos aduaneros, cuando tratándose de mercancías en arrendamiento se determine el incumplimiento en el pago de las cuotas causadas y debidas al vencimiento del término para la cancelación de la cuota correspondiente a la mitad del quinto año de que trata el artículo 153 del presente decreto.

En estos eventos no se configura la sanción por no finalizar la modalidad.

ARTICULO 153. IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS EN ARRENDAMIENTO.

Artículo modificado por el artículo 9 del Decreto 4136 de 2004.> Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en un mismo embarque, cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y liquiden los tributos aduaneros vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la Declaración.

En la declaración de importación temporal de mercancías en arrendamiento se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional, de acuerdo con el contrato.

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por semestres vencidos, contados a partir de la fecha de obtención del levante, para lo cual, se convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente en el momento de su pago.

Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este periodo, se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.

Se podrán celebrar contratos de arrendamiento financiero leasing sobre bienes importados al país bajo la modalidad de importación temporal de largo plazo, sin que se genere la terminación de dicha modalidad de importación, ni la pérdida de los beneficios obtenidos con la misma. En los eventos consagrados anteriormente, el respectivo contrato deberá conservarse por el declarante, conforme al artículo 155 del presente decreto.

PARÁGRAFO 1o. En casos especiales, la autoridad aduanera podrá permitir la importación temporal a largo plazo de accesorios, partes y repuestos que no vengan en el mismo embarque, para bienes de capital importados temporalmente, siempre y cuando se importen dentro del plazo de importación del bien de capital.

En estos eventos, con anterioridad a la presentación y aceptación de la Declaración de Importación, deberá obtenerse la autorización correspondiente.

Durante el plazo de la importación temporal de aeronaves destinadas al transporte aéreo de carga o pasajeros, se podrán importar temporalmente, con el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas aduaneras, los accesorios, partes y repuestos que se requieran para su normal funcionamiento, sin que deba obtenerse la autorización a que se refiere el inciso anterior.

PARÁGRAFO 2o. En caso de importación de helicópteros y aerodinos de servicio público y de fumigación por el sistema de leasing, sólo se causará impuesto sobre las ventas cuando se ejerza opción de compra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o del Decreto 2816 de 1991.

"Artículo 156. Terminación de la Importación Temporal. Artículo modificado por el artículo 11 del Decreto 4136 de 2004. La importación temporal se termina con:

- a) La reexportación de la mercancía;*
- b) La importación ordinaria o con franquicia, si a esta última hubiere lugar;*
- c) La modificación de la declaración de importación temporal a importación ordinaria realizada por la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas competente en los términos previstos en el artículo 150 del presente decreto;*

- d) *La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera;*
- e) *La legalización de la mercancía, cuando a ella hubiere lugar”.*

La entidad, a través de las Divisiones de Gestión Fiscalización y Liquidación de esta dirección seccional, sustenta su acto administrativo sancionatorio, a los prescrito en las normas que a continuación se relacionan:

Artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el Art. 15 del decreto 4136 de 2004. Infracciones Aduaneras de los Declarantes en el Régimen de Importación Temporal para reexportación en el mismo estado.

No terminar la modalidad de Importación Temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la importación y no pagar oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros.

1.1 La sanción aplicable será de multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor FOB de la mercancía convertido a la tasa de cambio representativa del mercado del día del vencimiento del plazo para modificar la modalidad de importación temporal, más el cinco por ciento (5%) del valor de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota incumplida.

1.2 No pagar oportunamente la cuota de los tributos aduaneros, aun cuando se hubiese modificado la declaración de importación o reexportado la mercancía antes del vencimiento del plazo de la importación temporal.

La sanción aplicable será del cinco por cinco (5%) del valor de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota incumplida.

1.3. No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduanero correspondiente...”

La sanción aplicable será de multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

RESOLUCION _No. 00108_____ DE FECHA _16/02/2021_____, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

Las infracciones y sanciones de que trata este artículo serán aplicables únicamente al importador.

La síntesis de la decisión administrativa recurrida, está contenida en la falta de prueba por parte del importador, que demostrare la finalización del régimen de importación temporal como lo establece el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999 modificado por los Decretos 1232 de 2001 y 4136 de 2004, arriba transcrito. Consecuencia de lo anterior, se declara formalmente el incumplimiento del régimen de importación temporal, se ordena la efectividad de la garantía en los montos determinados oficialmente por concepto de sanciones y tributos aduaneros respectivos.

La compañía aseguradora y el importador, con ocasión de sus argumentos de defensa y controversia hacia el acto administrativo sancionatorio, en concreto señalan falsa motivación por interpretación errónea en la omisión de renovar la garantía antes de finalizar, que es atípica la infracción endilgada, que se viola el debido proceso probatorio, que se viola el principio de tutela a la confianza pública, que se falta a los principios de justicia y equidad tributaria, y que se falta a la aplicación de la prevalencia del derecho sustancial sobre los formal, y por último, que se presenta un defecto sustantivo del acto por motivación insuficiente.

En atención a la inconformidad de los sujetos procesales, es menester señalar inicialmente, que la motivación de un acto administrativo constituye uno de sus fundamentos de legalidad, y cuando las razones expresadas en el acto no son reales o no existen o están distorsionadas, se presenta el vicio de nulidad llamado falsa motivación.

Pero asunto distinto es que los recurrentes, pretendan confundir las referencias normativas expuestas en el acto administrativo, como único fundamento sancionatorio, con una falsa motivación por interpretación errónea de la norma. Pues, como bien se explica en el acto administrativo sancionatorio recurrido, la referencia hacia el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, obedece a que dicha norma define el tipo de importación temporal de mercancías en arrendamiento; pero claramente el acto administrativo también expone los artículos 147, 149, 156 y 482-1 num 1.3 del Decreto 2685 de 1999, como sustento normativo del acto.

En efecto, el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, señala que deberá constituirse una garantía a favor de la Nación, con el objeto de responder al vencimiento del plazo señalado en la declaración, por la finalización de la modalidad, pago de los tributos aduaneros, intereses y la sanción a que hubiere lugar.

De igual forma, el artículo 482-1 numeral 1.3, señala que habrá lugar a sanción de siete salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando no se termine la modalidad de

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 -04,
Teléfono 4212208

RESOLUCION _No. 00108_____ DE FECHA _16/02/2021_____, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 – PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

importación temporal antes del vencimiento del plazo de la importación, aun pagando las cuotas de los tributos.

La Declaración de Importación sticker # 07256270156943 del 14/01/2010 Modificación sticker # 07256280226068 del 8/06/2010, Inicial Reimportación sticker # 13582010184884 de 27/01/2015, Inicial Reimportación sticker # 13582010187982 de 4/03/2015, la cual el importador declara bajo modalidad de importación temporal de mercancías en arrendamiento, claramente señala en su contenido, que su finalización ocurriría el 4 de enero de 2020 no obstante que existía un contrato de arrendamiento con otra sociedad cuya finalización era el 4 de enero de 2022. Es decir, claramente se establece aquí, que los términos de finalización de la modalidad y los términos de finalización del contrato son diferentes.

Sobre los argumentos del recurso, y basándose igualmente en los principios fundamentales y legales señalados en dicho memorial, esta división ha de advertir, que cuando la autoridad aduanera a través de la respectiva norma establece unos requisitos, o presupuestos o condiciones para acceder a un derecho, no actúa bajo el manto de la arbitrariedad ni busca el establecimiento inocuo de dichos presupuestos, pues el fin, como todo acto de la administración pública, es brindar seguridad jurídica a los administrados e igualdad de condiciones para todos, sin que ello signifique que no pueda ejercerse el debido control o vigilancia.

A todos los ciudadanos y a las sociedades a las cuales representan, les asiste el deber de cumplir los presupuestos que demanda la ley, en los tiempos y en las condiciones que allí se establezcan, so pena que su inobservancia genere las consecuencias que la misma ley predica.

Aquí es necesario precisar, en atención a la norma contentiva de la sanción recurrida, que el plazo vencido definido para la imposición de dicha multa, es la determinada en la declaración de importación, la cual claramente estaba estipulada para el 4 de enero de 2020. La norma en mención, como equivocadamente lo sostienen los recurrentes, en parte alguna sujeta el plazo de vencimiento de la modalidad, al término de duración del contrato.

Además, a ello se suma, y no como lo exponen los recurrentes, que incluso dentro del plazo de vencimiento de la modalidad de importación temporal declarado, tampoco habían renovado la póliza que garantizaba la importación, la cual debía ocurrir, según la normatividad vigente conocida por los recurrentes, antes del vencimiento del primer plazo.

De manera alguna se puede predicar que el acto administrativo objeto de recurso, se encuentre falsamente motivado o haya una indebida tipificación de la infracción aduanera,

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 –04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

pues es evidentemente claro que la modalidad de importación temporal declarada no fue terminada dentro del plazo previsto en la declaración de importación. No debe confundirse el plazo de permanencia de la mercancía en el territorio nacional, con el plazo de vencimiento de renovación de la póliza, así como el plazo de terminación declarada de la modalidad.

Ahora, es consecuencia del incumplimiento de una obligación aduanera afianzada, y consecuencia también de no cumplir adecuadamente la modalidad de importación temporal, que se declare formalmente su incumplimiento, se ordene la efectividad de la garantía en los valores afianzados.

La exigencia del cumplimiento de los presupuestos legales, en este caso lo relativo al cumplimiento de la modalidad de importación temporal, no podrá predicarse por los recurrentes que no se aplican los principios de justicia y equidad tributaria; pues primero, no se están imponiendo previsiones incompatibles contra el orden fiscal justo, en el segundo caso, no podrá catalogarse como inequitativo que se exija el cumplimiento de la normatividad que regula los presupuestos que deben cumplirse en una importación temporal.

Aquí no se exige una carga fiscal insoportable o desproporcionada, empezando porque los recurrentes nunca prueban tal condición y solo se limitan a hacer una narrativa del mismo, y además porque lo que exige la entidad, es el cumplimiento de una obligación aduanera que fue garantizada, de manera tal, que si no se cumple por parte del importador a lo que está obligado, se hace efectiva la garantía que cubre tal siniestro.

Sobre el IVA que no se causó en la importación temporal, por le beneficio tributario que prevé el literal e) del artículo 428 del Estatuto Tributario, la doctrina de la entidad señaló:

" numeral 1.4.2. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CUANDO SE PRESENTA DECLARACIÓN, LEGALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN" así: "Excepcionalmente, y solo cuando se haya importado temporalmente a largo plazo maquinaria pesada para industria básica con exclusión del impuesto sobre las ventas, en la modificación de la declaración de importación a importación ordinaria se liquidará el impuesto sobre las ventas a la tarifa vigente a la presentación y aceptación de la modificación". (las negrillas son nuestras)

Igualmente, el Oficio 072433 de 2013 concluyó que: "En síntesis, al cambiar la modalidad de importación de la maquinaria de temporal a ordinaria, la consecuencia tributaria inmediata es la pérdida de la condición de excluida de la

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17-04,
Teléfono 4212208*

importación y el nacimiento de la obligación de pagar el IVA. El cambio en la modalidad de importación determina el momento de causación del impuesto y, consecuentemente, la tarifa a aplicar. Tal conclusión se deriva de la interpretación armónica de los artículos 420, 428 y 429 del Estatuto Tributario y de los principios generales que rigen la aplicación de los tributos." (El subrayado es nuestro.)

Ahora bien, en lo que concierne sobre sí en el mismo acto administrativo que ordena de oficio la modificación de la modalidad de importación a ordinaria se puede ordenar el cobro del impuesto a las ventas que se causa con dicha modificación y ordenar la efectividad de la garantía prevista en el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, este Despacho le manifiesta que la naturaleza del acto administrativo mediante el cual se ordena la modificación de oficio de una modalidad de importación a otra, no es un acto declaratorio de incumplimiento de una obligación aduanera, sino un acto a través del cual la División de Gestión de la Operación Aduanera aplica "... las normas relativas a los regímenes aduaneros para garantizar que las operaciones aduaneras, se cumplan en los términos y condiciones previstos por la ley " tal como lo establece el numeral 1 del artículo

11 de la Resolución 9 de 2008.

La declaratoria del incumplimiento y efectividad de la garantía es de competencia de la División de Gestión de Liquidación de acuerdo con el numeral 4 del artículo 7 de la Resolución 9 de 2008.

En cuanto al procedimiento aplicable al caso consultado, el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, norma que aún se encuentra vigente, establece el procedimiento administrativo para hacer efectiva la garantía cuyo pago no está condicionado a un procedimiento administrativo sancionatorio, así:

"En aquellos eventos en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que medie un procedimiento administrativo para la imposición de sanción por infracción aduanera o para la definición de la situación jurídica de una mercancía o para la expedición de una liquidación oficial, la dependencia competente deberá, dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el incumplimiento de la obligación garantizada, comunicar al usuario o responsable de este hecho, otorgándole un término de diez (10) días para que dé respuesta al oficio o acredite el pago correspondiente de la obligación, si a ello hubiere lugar. Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la división de liquidación para que dentro de los quince (15) días siguientes profiera la resolución que

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

declare el incumplimiento de la obligación y, en consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto correspondiente. Esta providencia se notificará conforme a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo y contra ella procederán los recursos previstos en el mismo código. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la citada resolución, el usuario, el banco o la compañía de seguros deberá acreditar, con la presentación de la copia del recibo oficial de pago en bancos la cancelación del monto correspondiente. Vencido este término, sin que se hubiere producido dicho pago, se remitirá el original de la garantía y copia de la resolución con la constancia de su de su ejecutoria a la división de cobranzas"

Queda claro, que el acto administrativo recurrido, contrario a lo señalado por los recurrentes, jamás viola principio constitucional o legal alguno, no viola debido proceso, no viola la confianza pública, no viola principio de legalidad, pues simplemente está aplicando la normatividad que regula este tipo o modalidad de importaciones temporales, a lo cual el importador estaba obligado a cumplir cierto requisitos, y que vencido el plazo de la importación no renovó la póliza que garantizaba el régimen aduanero al cual se había sometido.

Ello trae como consecuencia, que la entidad inmediatamente exija el cumplimiento de las obligaciones aduaneras incumplidas, y hacer efectiva la garantía otorgada en los valores asegurados y correspondiente a la operación aduanera.

No se requieren, en atención a uno de los argumentos de contradicción, que para motivar un acto administrativo haya que hacer grandes y extensas exposiciones jurídicas o doctrinarias, pues este tipo de actuaciones solo requiere que la motivación se concreta y precisa. De hecho eso ha sido así, que le ha permitido a los usuarios interponer los recursos y exponer sus argumentos.

Las pruebas se valoran objetivamente, bajo el criterio de la sana crítica, y son las misma que posee el importador y la compañía de seguros, y el hecho de que estos últimos no compartan la posición de la entidad, no significa que se haya vulnerado el debido proceso probatorio.

En fin, la exigencia de formalidades por parte de la autoridad aduanera, deviene de la necesidad de brindar seguridad jurídica tanto al usuario aduanero como a la propia entidad, ello en la medida en que de un lado, se garantiza al primero que la entidad actúa en ejercicio de la función administrativa, y seguirá un proceso objetivamente dispuesto para ese tipo de importación, impidiendo arbitrariedades a la hora de tomar una decisión que pueda afectar al particular, permitiéndole a su vez a éste, participar y ejercer los derechos. Y de otro lado, la

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 -04,
Teléfono 4212208

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE
RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE
TALADROS S.A.

entidad goza de un camino claro y concreto a seguir, que le permita actuar de manera eficaz y eficiente, evitando ilegalidades respecto de su actuación y la forma como la misma debe ser adelantada.

Los actos jurídicos que realiza la Administración deben guardar una doble correspondencia con la ley que rige dichos actos, y con el interés público que con ellos va a satisfacerse. De manera que la conformidad del acto con la ley constituye el concepto de legalidad en el derecho colombiano.

Las determinaciones de la Administración han de regirse por los hechos y pruebas que aparezcan relacionadas en el expediente, y tal como reposa en el expediente de la referencia, el importador Proveedora Internacional de Taladros SA con NIT 900.322.513, incumplió una obligación aduanera derivada de una importación temporal, tal como así lo demanda el Decreto 1625 de 2016. En consecuencia, este despacho no observa que se hayan allegado pruebas o argumentos que desestimen la legalidad de la actuación recurrida.

No obstante que sobre el régimen aduanero existe un procedimiento especial, no es menos cierto que habrá de observarse los principios que rigen las actuaciones administrativas, invocados en la Constitución Nacional en su artículo 209, que prescribe que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Los funcionarios aduaneros deben tener siempre por norma que la aplicación de las disposiciones aduaneras debe estar presidida de un relevante espíritu de justicia, que Todas las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera deberán estar presididas por un relevante espíritu de justicia.

La administración y/o autoridad aduanera actuará dentro de un marco de legalidad, reconociendo siempre que se trata de un servicio público, y que el Estado no aspira que al obligado aduanero se le exija más de aquello que la misma ley pretende.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sanción No. 526 de fecha 26 de octubre de 2020, expedida por el División Gestión de Liquidación de la DIAN Seccional Santa Marta, a nombre de PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S. con NIT 900.322.513, y por medio del cual se le impone sanción de multa, se decreta un

*Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17 -04,
Teléfono 4212208*

RESOLUCION No. 00108 DE FECHA 16/02/2021, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION - EXPEDIENTE TL2010202000274 - PROVEEDORA I. DE TALADROS S.A.

incumplimiento al régimen de importación temporal, se hace efectiva la garantía, se ordena modificar de oficio la declaración de importación, y se afecta la póliza por el valor de la sanción e IVA liquidado y no pagado; por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR esta resolución por correo a las sociedades: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA con NIT 860.070.374, representada por la apoderada Dra. Gloria Esperanza Navas González con CC 35.408.565 y TP 64.750 del CSJ, a la dirección procesal Calle 82 # 11 – 37 Piso 7º de Bogotá DC, y a PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS SAS con NIT 900.322.513, representada legalmente por el Sr. Gonzalo E Bolaños Forero, identificado con cedula de ciudadanía # 11.349.913, a la dirección procesal: Avenida Carrera 9 # 113 – 52 Oficina 402 Edificio Torres Unidad de Bogotá DC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 763 del Decreto 1165 de 2019, advirtiéndole que contra la presente decisión no procede ningún recurso en sede administrativa, quedando agotada la vía gubernativa.

ARTICULO TERCERO: Reconózcase personería jurídica para actuar a la Dra. Gloria Esperanza Navas González con CC 35.408.565 y TP 64.750 del CSJ, en calidad de apoderado especial de COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA con NIT 860.070.374, en los términos del mandato a ella conferido.

ARTICULO CUARTO: Ejecutoriada esta resolución, remitir copias de la misma y de las resoluciones recurridas, a la División de Gestión Recaudación y Cobranzas, Gestión de Fiscalización y Gestión de la Operación Aduanera de esta Dirección Seccional, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



IAN ALBERTO MEJIA VILLALOBOS

Jefe de División de Gestión Jurídica

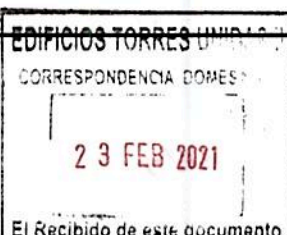
Dirección Seccional de Aduanas de Impuestos y Aduanas de Santa Marta



Proyecto:
Celso Makacio Llanes
Gestor IV

Reviso:
Ian A Mejía Villalobos
Inspector I

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Carrera 5 N° 17-04,
Teléfono 4212208



Señores:
Procuraduría delegada para la Conciliación Administrativa con funciones ante el Tribunal Administrativo de Magdalena
Procuraduría General de la Nación
Santa Marta, Magdalena

Asunto:	Solicitud de conciliación prejudicial
Resoluciones:	Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 y Resolución No. 00108 del 16 de febrero de 2021
Convocante:	Proveedora Internacional de Taladros S.A.S
NIT:	900.322.513-3
Convocado:	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

RAFAEL EUGENIO VESGA PERÉZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.391.508 de Barichara y Tarjeta Profesional No. 217.064 del C.S.J., actuando en nombre de la sociedad **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S**, en adelante “la compañía” identificada con NIT 900.322.513-3, de conformidad con el poder anexo otorgado por su representante legal, me permito presentar ante su despacho solicitud de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, como requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que se pretende instaurar contra la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN**.

I. PRETENSIONES

PRIMERA: Que la DIAN revoque por los cargos que se expondrán a continuación, la Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, mediante la cual se resolvió sancionar a la compañía PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S por la conducta tipificada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999 y a su vez se ordenó afectar la póliza en lo correspondiente al monto de IVA suspendido por la importación temporal.

SEGUNDO: Que la DIAN revoque la Resolución No. 00108 del 16 de febrero de 2021 proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, mediante la cual se confirmó la Resolución anterior.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, declare que la compañía no incumplió el régimen de importación temporal a largo plazo, y se abstenga de sancionar a la compañía por el presunto incumplimiento al régimen así como de afectar la póliza en la suma correspondiente al IVA suspendido.

II. HECHOS

2.1. Con declaración de importación inicial autoadhesivo No. 07256270156943 del 14/01/2010, levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, la compañía Proveedora Internacional de Taladros S.A.S identificada con NIT 900.322.513-3 (en adelante el importador) sometió al régimen de importación temporal de corto plazo la mercancía amparada en esa declaración.

2.2. En su momento, soportados en el contrato de arrendamiento internacional suscrito entre PIONER DRILLING SERVICE LTD y el importador se presentó declaración de importación tipo modificación con el objetivo de cambiar la modalidad temporal en el cual se encontraba sometida la mercancía, transformando la misma de la modalidad de corto a largo plazo al amparo de contrato de arrendamiento, el cual a la fecha tiene una vigencia de 12 años, vigencia que puntualmente se encuentra establecida entre el 04 de enero de 2010 hasta el 4 de enero de 2022.

2.3. La modalidad temporal, fue amparada por las Pólizas de Cumplimiento de disposiciones Legales expedidas por la compañía aseguradora de fianzas S.A, y debidamente aceptadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que se identifican así: Inicial POLIZA DL004652 CERTIFICADO DL007814, Modificación POLIZA DL004652 CERTIFICADO DL008628, Modificación POLIZA DL007997 CERTIFICADO DL014783.

2.4. Conforme a lo consignado en las Declaraciones de Importación, los bienes sometidos a la modalidad temporal, cuenta con certificación de maquinaria pesada para industrias básicas, que le permiten acceder a la exclusión de IVA contenida en el literal e del artículo 428 del Estatuto Tributario.

2.5. Frente al Arancel, el mismo se liquidó en cuotas semestrales iguales, tal cual como lo define la normatividad aduanera, y se canceló en su momento mediante 10 cuotas semestrales.

2.6. Antes del 04 de enero de 2020 (fecha de finalización de vigencia de la Póliza inicial), la compañía no presentó la renovación que ampara los cumplimientos puntuales que más adelante expondremos. En todo caso, el día 31 de enero de 2020 fue presentada la renovación de la garantía inicial, misma que fue rechazada por la DIAN con boletín de rechazo #03 del 31 de enero de 2020.

2.7. En base a lo anterior, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta resolvió proferir Requerimiento Especial Aduanero 0129 del 17 de junio de 2020, en el cual propone a la División de Gestión de Liquidación se sancione al importador Proveedora Internacional de Taladros S.A.S

2.8. La compañía Proveedora Internacional de Taladros S.A.S dio respuesta al REA mencionado, en el cual se exponían todos los argumentos de hecho y derecho frente a la conducta que se estaba tipificando, no obstante, la División de Gestión de Fiscalización resolvió confirmar lo expuesto en el REA y proferir la Resolución sanción No. 526 del 26 de octubre de 2020, mediante la cual resolvió:

“DECRETAR el incumplimiento al régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del 04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020”

2.9. Además de lo mencionado en el numeral anterior, se resolvió sancionar a la compañía que representó por presuntamente infringir en la conducta descrita en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, y a su vez resolvió afectar la póliza en la suma correspondiente a la sanción y al IVA.

2.10. El 24 de noviembre de 2020, la compañía radicó recurso de reconsideración en contra de la Resolución sanción No. 526 del 26 de octubre de 2020 el cual quedó radicado bajo el número 0003E2020026338, y en el que se expusieron nuevamente todos los argumentos de hecho y derecho frente a la conducta que se estaba tipificando, no obstante, la División de Gestión Jurídica resolvió confirmar la sanción tipificada en la Resolución sanción N. 526, esto a través de la Resolución No. 00108 notificada el 23 de febrero de 2021.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

3.1. NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA SANCIONATORIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA

Sobre este asunto en particular, señala el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008 respecto de la competencia funcional del recurso de reconsideración, que cuando la cuantía del acto de determinación de los impuestos que imponen la sanción sea superior a cinco mil (5.000) UVT, será la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos la encargada de fallar el recurso, a la vez que dicha norma, hace referencia al artículo 560 del Estatuto Tributario, el cual señala en su numeral 3:

ARTÍCULO 560 E.T. Son competentes para proferir las actuaciones de la administración tributaria los funcionarios y dependencias de la misma, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política

(...)

Tratándose de fallos de los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demás recursos cuya competencia no esté otorgada a determinado funcionario o dependencia, la competencia funcional de discusión corresponde:

(...)

3. Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior veinte mil (20.000) UVT, serán competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y dependencias del Nivel Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca. (Resaltado propio).

El numeral 3º del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008, cuenta con el siguiente tenor literal:

“CAPITULO V.

COMPETENCIA FUNCIONAL DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

ARTÍCULO 40. COMPETENCIA FUNCIONAL. Para efectos de lo previsto en el artículo 560 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 44 de la Ley 1111 de 2006 los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones serán resueltos conforme a las reglas de competencia que se definen a continuación:

(...)

3. Cuando la cuantía del acto de determinación de impuestos y que imponen sanción sea superior a cinco mil (5.000) UVT, será competente para fallar el recurso de reconsideración la Subdirección de Gestión Recursos Jurídicos.”

A su turno, el artículo 21 del Decreto 4048 de 2008, vigente el 25 de noviembre de 2020, cuando se presentó el recurso de reconsideración contra la resolución No. 526 de 26 de octubre de 2020, asignaba la competencia para decidir estos recursos a la Sudirección de Gestión de Recursos Jurídicos, así:

“ARTÍCULO 21. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS.

Son funciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, además de las dispuestas en el artículo 38 del presente decreto las siguientes:

(...)

2. Resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones cuya cuantía sea igual o superior a cinco mil (5.000) UVT; (..) -resaltado fuera de texto-

Con base en las normas antes citadas, se evidencia la competencia funcional para resolver el recurso de reconsideración era de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos , División de Gestión Jurídica del Nivel Central de la DIAN, con sede en Bogotá y no de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, lo que hace evidente la nulidad de lo actuado por evidente falta de competencia.

El 25 de noviembre de 2020 se radicó el recurso de reconsideración por parte de la compañía que represento ante el Nivel Central, el cual fue remitido posteriormente en la Dirección Seccional de Santa Marta el 30 de noviembre, sin tener en cuenta que la competencia en razón de las normas precitadas, radica en los funcionarios del Nivel Central de la DIAN, tal como se argumentará en las siguientes líneas.

Ahora bien, en conexión con lo anterior y de acuerdo con lo señalado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, entidad que en los fundamentos de derecho y consideraciones para resolver del recurso de reconsideración, incluyó al Decreto

1742 de 22 de diciembre de 2020¹ como norma soporte del ejercicio de sus funciones, debemos anotar que, tanto a la luz del Decreto 4048 de 2008 o de su modificación por el Decreto 1742 de 2020, la competencia para resolver el recurso de reconsideración cuando la cuantía supera las 20.000 UVT², aun con las 5.000 UVT, el valor del proceso supera los dos montos, lo cual impide que se interpreten dichas normas para asignar la competencia a la mencionada Dirección Seccional. La competencia está y, en el transcurso del proceso de la sede administrativa, siempre ha estado en el Nivel Central de la DIAN en Bogotá, en la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.

Al revisar el Decreto 1742 de 2020 se advierte que el artículo 69 del precitado Decreto menciona:

ARTÍCULO 69. Competencia Funcional. *De conformidad con el artículo 560 del Estatuto Tributario, los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de impuestos, incluidas las sanciones impuestas, los que imponen sanciones, los que deciden sobre las solicitudes de devolución y/o compensación, y los actos en materia cambiaria, que sean de competencia de la DIAN, serán resueltos conforme a las reglas de competencia que se definen a continuación (...)*

PARÁGRAFO TRANSITORIO. *Las competencias en razón de la cuantía dispuestas en este artículo aplicarán respecto de los recursos de reconsideración y revocatorias directas que sean interpuestas a partir de la vigencia del presente Decreto. La Subdirección de Recursos Jurídicos mantendrá la competencia para resolver los recursos de reconsideración y revocatorias directas que se hubieren radicado en el Nivel Central hasta la fecha de publicación del presente Decreto.*

Cuando la cuantía del acto de determinación de impuestos, incluidas las sanciones impuestas, los que imponen sanciones, los que deciden sobre las solicitudes de devolución y/o compensación y los actos en materia aduanera y cambiaria objeto de recurso de reconsideración que sea igual o superior a veinte mil (20.000) UVT, será competente para fallar el recurso de reconsideración la Subdirección de Recursos Jurídicos del Nivel Central. (Resaltado propio).

El cargo de nulidad de la presente demanda aflora con la simple comparación de las normas mencionadas y los hechos narrados, lo que invalida cualquier tipo de actuación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, por la pretermisión de una etapa del proceso como es la decisión del recurso de reconsideración, de la violación del derecho de defensa y de audiencia al resolverse el recurso por una dependencia que carecía totalmente de competencia para ello.

Para el caso en comento, la determinación de la sanción y el monto por IVA liquidado corresponde a **CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO SESENTA PESOS (\$4.269.439.260)**, es decir una suma superior a los veinte mil (20.000) UVT previstos en la norma, por lo que la competencia funcional para interponer este tipo de sanciones corresponde a la Subdirección de Recursos Jurídicos del Nivel Central, y no la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, como erróneamente se desprende de lo contenido en la Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 y la Resolución No. 00108 del 16 de febrero de 2021, ambas expedidas por dicha entidad.

Así las cosas, se resalta que la falta de competencia es uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, tal y como se señala en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que precisa que dichos actos serán nulos cuando “hayan sido expedidas con infracción de las normas en que debería fundarse, o sin competencia, en forma irregular o con desconocimiento del derecho de defensa y audiencia o mediante falsa motivación...”

Así mismo, el tratadista Orlando Santofimio³, establece que la falta de competencia es uno de los vicios invalidantes que son externos al acto administrativo pues la falsedad reposa sobre el sujeto que expide la decisión pues el ordenamiento jurídico no le ha reconocido aptitudes para actuar como portador del sentir estatal. En tal sentido, la falta de competencia resulta mérito suficiente para que el acto jurídico que bajo esta se profiera, tenga como consecuencia su nulidad y de suyo la falta de reconocimiento jurídico.

¹ Derogatorio del Decreto 4048 de 2008 y el cual modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

² La UVT para el año 2020 fue determinado en \$35.607,00 cada una. 20.000 UVT = \$712.140.000,00

³ SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Acto Administrativo. 4º ed., 2003, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 264.

Sobre este vicio en particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado a través de Sentencia 47693 de 19 de septiembre de 2016, preciso que el desconocimiento de las competencias vulnera a todas luces el derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, lo cual hace nulos todos los actos administrativos que desconozcan el derecho a la defensa.

Debido a lo anterior, las razones que niegan el derecho a la defensa deben ser suficientes para que los actos administrativos expedidos sin las debidas competencias sean declarados nulos por el juez, pues estos son producto de la desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Este abuso de poder atenta contra las finalidades de un orden constitucional, desconociendo la objetividad que debe imperar en todas las etapas del proceso⁴.

3.2. FALSA MOTIVACIÓN. LA AUTORIDAD ADUANERA INTERPRETA ERRÓNEAMENTE QUE LA OMISIÓN DE RENOVAR LA GARANTÍA ANTES DE SU FINALIZACIÓN, CONLLEVA A LA TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN TEMPORAL

La motivación de los actos administrativos constituye uno de los elementos de validez, motivación que debe darse atendiendo a las reales circunstancias de hecho y de derecho, las cuales constituyen la causa o motivo del mismo. La motivación de un acto no puede de ninguna manera obedecer a razones caprichosas por parte de quien expide el acto.

Específicamente frente a la falsa motivación el Consejo de Estado plantea en qué casos se configura:

*“Se indica que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación. por ello, se explica que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por ello, el impugnante tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad. según lo precedente, se afirma que la falsa motivación del acto ocurre cuando: (i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) **porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen** y (iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.”⁵*

Delimitados los casos en específico en que se configura la falsa motivación, tenemos que en el presente caso se presenta el vicio de nulidad mencionado, por cuanto la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta interpreta erróneamente que la omisión de presentar la renovación a la garantía antes de su finalización, implica indefectiblemente que la modalidad de importación temporal a largo plazo deberá terminar.

En efecto la Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta afirmó en su momento en el REA lo siguiente:

“(…) aunque el contrato de arrendamiento financiero leasing internacional que soporta la modalidad de importación temporal, celebrado entre Pioneer Drilling Services Ltd y proveedora internacional de taladros termina el 04/01/2022, establece el artículo 153 del decreto 2685 de 1999 que la importación temporal autorizada debe estar garantizada a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 147 del decreto 2685 de 1999 (…)”

Y más adelante señaló:

“(…) las normas no contemplan excepción alguna, ni eximen de responsabilidad al importador, por el contrario, es precisa en cuanto a que la modificación del término y

⁴ Constitución Política de Colombia. artículos 2, 123 y 209.

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Rad: 250002324000200800265-01. 14 de abril de 2016.

la modalidad debe efectuarse antes del vencimiento del plazo señalado en la Declaración de Importación y en el contrato modificadorio (...)

Por su parte en la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la Resolución sanción se dijo lo siguiente:

“La declaración de importación autoadhesivo No. 07256290176821 (...), la cual el importador declara bajo la modalidad de importación temporal de mercancías en arrendamiento, claramente señala en su contenido, que su finalización ocurriría el 04 de enero de 2020 no obstante que existía un contrato de arrendamiento con otra sociedad cuya finalización era el 04 de enero de 2022. (...)”

Como se observa, la Autoridad aduanera en los distintos actos emitidos ha reconocido que el contrato financiero leasing que soporta la modalidad de importación temporal finaliza el 04 de enero de 2022.

Es decir que si aplicamos al caso el inciso cuarto del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, resulta viable concluir que la mercancía podía permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, sin que la permanencia de la misma este supeditada a que la garantía se renueve antes la finalización del plazo de la modalidad .

Precisamente el inciso cuarto del artículo mencionado dispone que las mercancías sometidas a contratos de arrendamiento podrán permanecer en el territorio nacional bajo la modalidad temporal **por el término de vigencia del contrato**, siempre y cuando, el importador haya cancelado la totalidad de los tributos aduaneros a más tardar en la décima cuota semestral, es decir, en un término no superior a los 5 años contados a partir de la presentación y aceptación de la declaración de importación a largo plazo, veamos:

“Artículo 153. Importación temporal de mercancías en arrendamiento. (...) Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este período, se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.”

Como se observa, de manera clara la norma estipula que la mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, de ninguna manera establece que aun cumpliendo con el pago del saldo de tributos aduaneros, **la mercancía SOLO podrá permanecer en el territorio aduanero nacional si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial.**

Esta condición que pretende imponer la Autoridad aduanera riñe con el sentido gramatical o literal de la norma, ordenado por el artículo 27 y 28 del Código Civil que expresan:

“ARTÍCULO 27. Interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

ARTÍCULO 28. Significado de las palabras. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.”

Aplicando el método de interpretación gramatical o literal al inciso cuarto del artículo 153, podemos demostrar que la norma de alguna manera prohíbe que la mercancía permanezca en el territorio aduanero cuando NO se cumple la obligación a la cual está supeditada su permanencia, veamos la interpretación del artículo 153:

Evento: La duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años.

Obligación: pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados con la última cuota correspondiente a este período.

Derecho obtenido: La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato

CONTRARIO SENSU, se prohibiría la permanencia de la mercancía si se da lo siguiente:

Evento: La duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años.

Obligación incumplida: NO se paga el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados con la última cuota correspondiente a este período.

Prohibición: La mercancía NO podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato

Como vemos de una manera sencilla y aplicando el método de interpretación gramatical, la única condición que permite limitar o prohibir la permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional, **es que no se haya pagado el saldo de tributos aduaneros.**

Por tanto, aceptar la tesis planteada por la Autoridad aduanera referente a que la mercancía solo podrá permanecer en el territorio aduanero nacional, si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial, sería aceptar una nueva obligación susceptible de desencadenar una prohibición o limitación a un derecho, lo cual desconoce que las normas prohibitivas deben estar claramente determinadas en la Constitución y la Ley. así lo deja claro la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que expresa:

*“La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, coinciden en que **las normas que establecen prohibiciones deben estar de manera explícita en la Constitución o en la ley** y no podrán ser excesivas ni desproporcionadas (...) En consecuencia, la interpretación y aplicación restrictiva es una regla que rige tratándose de normas prohibitivas, **dado que consagran limitaciones al ejercicio de un derecho** o de competencias señaladas en la ley, criterio hermenéutico que responde al principio de taxatividad, de acuerdo con el cual **solo operan las prohibiciones que en forma precisa establece el legislador.**”⁶*

Como se observa, ante normas que consagren limitaciones al ejercicio de un derecho, su interpretación y aplicación debe ser restrictiva, esto es, se debe atender a su tenor literal.

Para el presente caso, el sentido contrario del inciso 4 del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, **permite entender que se limita el ejercicio del derecho a que las mercancías permanezcan en el territorio aduanero nacional, cuando NO se cumple la condición de pagar el saldo de tributos aduaneros.**

Adicionar entonces otra condición, sería realizar una aplicación extensiva que como dijimos no se permite en las normas que consagran limitaciones al ejercicio de un derecho.

Ahora bien, en el presente caso tenemos que tal y como se prueba en los antecedentes, los tributos aduaneros que se causaron a raíz de la importación temporal (gravamen arancelario) fueron debidamente cancelados dentro de los términos establecidos por la norma, en ese orden de ideas, se cumple con la condición establecida por el artículo citado en el párrafo anterior y por lo tanto procede que los bienes permanezcan durante el término del contrato sometidos a la modalidad temporal, nótese que en la Declaración de Importación cuestionada, se informa la fecha de terminación del contrato, misma que a hoy aún se encuentra vigente.

En ese orden de ideas, es claro que no se ha cumplido el término para la finalización de la modalidad de importación temporal a largo plazo, por cuanto la fecha de terminación del contrato de arrendamiento aún se encuentra vigente.

Ahora bien, otro argumento señalado por la Seccional se contrae en afirmar que la norma es precisa en cuanto al término que se tiene para modificar la modalidad de importación temporal, la cual debe efectuarse antes del vencimiento del plazo señalado en la Declaración de Importación y en el contrato modificatorio.

En efecto, si revisamos el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, encontramos lo siguiente:

“ARTICULO 150. MODIFICACIÓN DE LA MODALIDAD. Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, modificar la declaración de importación temporal a importación ordinaria o con franquicia y obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía, pagando, cuando fuere del caso,

⁶ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero Ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013). Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00407-00

la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, los intereses pertinentes y la sanción a que haya lugar.

Ante el incumplimiento de esta obligación, (...)

En caso de importaciones temporales a largo plazo, se proferirá acto administrativo declarando el incumplimiento y ordenando hacer efectiva la garantía en el monto correspondiente a las cuotas insolutas, más los intereses moratorios y el monto de las sanciones correspondientes previstas en el artículo 482-1 del presente decreto, dentro del proceso administrativo previsto para imponer sanciones. (...)

De la lectura de la norma, entendemos que la Autoridad aduanera quiso aplicar al presente caso la consecuencia de incumplimiento descrita en el aparte subrayado, desconociendo que la condición para aplicar tal consecuencia de incumplimiento, es que se haya decidido dejar la mercancía en el territorio aduanero nacional y que antes del vencimiento del plazo de la importación temporal no se haya efectuado la modificación a importación ordinaria o con franquicia.

Sin embargo, de la conducta ejercida por la compañía se puede evidenciar que su intención no era que se cambiara la modalidad de temporal a ordinaria, pues en primer lugar se renovó la garantía inicial y la misma fue presentada ante la DIAN el 31 de enero de 2020, y en segundo lugar, en la declaración de importación cuestionada se informa la fecha de terminación del contrato, misma que a hoy aún se encuentra vigente. En ese orden de ideas, es claro que no se ha incumplido el término para la finalización de la modalidad de importación temporal a largo plazo.

Nuevamente se demuestra que la Autoridad aduanera desconoce el sentido gramatical del inciso primero del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, que señala que la modificación se deberá efectuar antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, y no antes del vencimiento de la póliza inicial.

Además, tal y como la misma norma lo dispone (literal c del artículo 156 del Decreto 2685 de 1999), para que la terminación se dé por parte de la autoridad aduanera de oficio, se deben cumplir los términos definidos en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

De una lectura detenida del artículo 150, notamos que los supuestos para que, en este caso proceda la terminación por parte de la autoridad aduanera son los siguientes:

- 1) Cuando se tipifique alguna de las infracciones previstas en el Art. 482-1: Situación que no se cumple en el presente caso por los motivos anteriormente expuestos. y;
- 2) Cuando ejercida la opción de compra, el importador no dé por terminada la modalidad temporal a largo plazo: Esta situación tampoco se ha dado.

Las dos situaciones anteriormente descritas no se tipifican en la operación que se cuestiona en el presente recurso, entonces, no entendemos de donde nace la interpretación extensiva de la normatividad, para que se pretenda de oficio terminar la modalidad temporal, declarar el incumplimiento por parte del importador consagrado en el numeral 1.3 del Artículo 482 y a su vez, hacer efectiva la garantía expedida por la aseguradora no sólo por el valor de la sanción, si no por el valor del IVA, que técnicamente a la fecha de la expedición del acto administrativo no se ha causado.

Ahora bien, los argumentos empleados en la Resolución sanción para decidir confirmar la sanción contenida en el numeral 1.3 del artículo 482.1 del Decreto 2685 de 1999, no desvirtúan de ninguna manera los cargos que se expusieron en la respuesta al REA.

Llama la atención que ni en la Resolución sanción ni en la que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN no realiza un estudio coherente en contra del argumento de falsa motivación, únicamente refiere en la primera lo siguiente:

“En una importación temporal de mercancías en arrendamiento que supera los 5 años, el objeto asegurable en la renovación de la póliza al finalizar el quinto año, será el de responder por la terminación de la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado, antes del vencimiento del plazo de la importación, y el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del decreto 2685 de 1999”

Y señala más adelante:

“Resulta igualmente lógico que el objeto será el de responder por la terminación de la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado, antes del vencimiento del plazo de la importación”

Como se observa, la DIAN intenta desvirtuar nuestro argumento referente a que: “LA AUTORIDAD ADUANERA INTERPRETA ERRÓNEAMENTE QUE LA OMISIÓN DE RENOVAR LA GARANTÍA ANTES DE SU FINALIZACIÓN, CONLLEVA A LA TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN TEMPORAL”, con interpretaciones que nada tienen que ver con lo que discute en el presente caso.

Aquí no se está discutiendo en cuanto debe ser el monto de la garantía de mercancías en arrendamiento que superan los 5 años, y cuál es el objeto asegurable, aquí lo que se discute es el derecho de una mercancía en arrendamiento de permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.

La autoridad aduanera decreta el incumplimiento y la efectividad de la garantía por, supuestamente, ocurrir el incumplimiento por parte del importador al no renovar oportunamente la garantía, pero se olvida del texto del inciso primero del artículo 150 antes citado que contiene como obligación de realizar la modificación de importación temporal a ordinaria antes del VENCIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN TEMPORAL, no antes de la vigencia de la garantía. El tenor de la norma es muy claro, así:

*“Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, **antes del vencimiento del plazo de la importación temporal,....**”* -resaltado fuera de texto-

El querer del legislador fue cambiado por los actos demandados, porque la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía se motivó en el supuesto vencimiento de la garantía, pero estando vigente la importación temporal. Es decir, se dejó de aplicar el inciso primero del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, lo que, además, configura la causal de nulidad de los actos administrativos de violación directa de la ley por interpretación errada de la mencionada norma.

En los actos demandados no se cita, porque no existe, norma alguna que permita declarar el incumplimiento y la efectividad de la garantía por la renovación de la garantía, durante la vigencia de la importación temporal, pero luego de cumplido el término de vigencia. Atendiendo la normativa del contrato de seguros del Código de Comercio no constituye irregularidad alguna renovar o constituir una nueva póliza luego de cumplida la vigencia del seguro original. No se debe olvidar que, en el presente caso la póliza fue renovada pero no aceptada por la Administración.

Aunado a lo anterior, es pertinente además indicarle respetuosamente a la Autoridad aduanera, que de la lectura del numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, no se advierte que allí se tipifique una conducta referente a que la póliza debía ser renovada en un monto equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 mencionado, con lo cual no se entiende por qué la División de Gestión de Liquidación emplea este argumento para terminar por tipificar una conducta que como se demostrará a lo largo del documento para el caso que nos ocupa no se cumple.

Finalmente, resulta pertinente citar que la terminación de la modalidad temporal se da en los casos expresamente señalados en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999 el cual define:

(...) *“a) La reexportación de la mercancía;*

b) La importación ordinaria o con franquicia, si a esta última hubiere lugar;

c) La modificación de la declaración de importación temporal a importación ordinaria realizada por la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas competente en los términos previstos en el artículo 150 del presente decreto;

d) La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera;

e) La legalización de la mercancía, cuando a ella hubiere lugar” (...)

Ninguna de las anteriores situaciones se cumplen en el caso que nos ocupa. Además, si bien la Autoridad aduanera pretende dar al parecer aplicación al literal c, como ya se explicó anteriormente no se cumplen los supuestos del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

En ese orden de ideas, resulta claro que la Autoridad aduanera le está dando a los motivos de hecho y derecho un alcance que no tienen, incurriendo en un vicio de falsa motivación, por las razones que se resumen a continuación:

- a. Hace una interpretación extensiva del artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, al considerar que la mercancía **SOLO** podrá permanecer en el territorio aduanero nacional si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial. Es decir que, impone una nueva condición para limitar un derecho (el de disposición de las mercancías), lo cual no resulta posible a la luz de la jurisprudencia nacional.
- b. Frente a las consecuencias del incumplimiento en la modificación a la importación temporal, señaladas en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, **la DIAN está creando un nuevo evento para que se den tales consecuencias**, el cual es que el importador no haya modificado la modalidad antes del vencimiento de la garantía inicial.
- c. Emplea en la Resolución sanción un argumento ajeno a lo que se está discutiendo o que no guarda relación directa, pues afirma que en una importación temporal de mercancías en arrendamiento que supera los 5 años, el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del decreto 2685 de 1999. Cuando aquí no se está discutiendo en cuanto debe ser el monto de la garantía de mercancías en arrendamiento que superan los 5 años, y cuál es el objeto asegurable.

3.3. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD – VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD

El principio de tipicidad se fundamenta en el artículo 29 constitucional que al respecto señala que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, lo cual significa que debe existir una correlación entre las conductas reprochables y la sanción.

En ese sentido, la pena o sanción a ser impuesta debe preexistir al hecho infractor. Al respecto, la jurisprudencia nacional ha delimitado los elementos necesarios para que se configure la tipicidad administrativa, los cuales son:

*“ (...) (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley; (iii) **Que exista correlación entre la conducta y la sanción** (...)”⁷. (Negrita fuera de texto original).*

En el presente caso, consideramos que no se cumple con el requisito del numeral 3 por las razones que se exponen a continuación.

El Requerimiento Especial Aduanero, la Resolución sanción y la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, tipifican en la operación cuestionada de manera errónea la infracción aduanera contenida en el numeral 1.3 del Art. 482-1 del Decreto 2685 de 1999, misma que dispone:

“ARTÍCULO 482-1. INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS DECLARANTES EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.

(...) 1.3 No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando se hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros correspondientes. La sanción aplicable será de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)” Subrayas nuestras.

⁷ Sentencia C-713 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. Bogotá, 12 de septiembre de 2012.

Como se puede observar, la infracción aduanera tipificada procede en el evento que el importador no termine la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la misma, situación que no sucede en la operación que nos ocupa.

Además, como se indicó en el cargo anterior, en el caso que nos ocupa la terminación de la modalidad de importación temporal ocurre si y solo si, se cumple con alguno de los eventos señalados en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999.

Y en el evento del literal c del artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, que es el que aplica la DIAN para el caso, tampoco se cumple, pues se evidencia que no era intención de la compañía que se cambiara la modalidad de temporal a ordinaria, ya que se renovó la garantía inicial y la misma fue presentada ante la DIAN el 31 de enero de 2020, y en segundo lugar, en la declaración de importación cuestionada se informa la fecha de terminación del contrato, misma que a hoy aún se encuentra vigente.

Aquí lo que ocurrió fue que no se presentó la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial, situación que en todo caso no implica que se deba terminar la modalidad de importación temporal, pues la norma no permite hacer interpretaciones más allá de su sentido literal.

Siendo así, en el presente caso lo que pretende la Seccional de Impuestos y Aduanas es endilgar una conducta a mi representada, basada en interpretaciones extensivas de los artículos 150 y 153 del decreto 2685 de 1999, lo cual riñe con los principios que rigen la función administrativa, especialmente el contenido en el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019, que señala:

Principio de prohibición de la analogía. No procede la aplicación de sanciones, ni de causales de aprehensión y decomiso, por interpretación analógica o extensiva de las normas

Nótese como en el presente caso, aparentemente el despacho desconoce la prohibición expresa consagrada en la norma invocada, al interpretar de manera extensiva la infracción contenida en el numeral 1.3 del Art. 482-1 del Decreto 2685 de 1999. Pues define sin sustento normativo alguno, que la no renovación de la garantía da lugar a la terminación inmediata del régimen temporal al cual se encuentran sometidos los bienes, condición que no se encuentra de manera expresa dentro del Decreto 2685 de 1999.

Ahora bien, la Autoridad aduanera señala lo siguiente en la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración:

“Aquí es necesario precisar, en atención a la norma contentiva de la sanción recurrida, que el plazo vencido definido para la imposición de dicha multa, es la determinada en la declaración de importación, la cual claramente estaba estipulada para el 4 de enero de 2020. La norma en mención, como equivocadamente lo sostienen los recurrentes, en parte alguna sujeta el plazo de vencimiento de la modalidad, al término de duración del contrato. (...) No debe confundirse el plazo de la permanencia de la mercancía en el territorio nacional, con el plazo de vencimiento de renovación de la póliza, así como el plazo de terminación declarada de la modalidad”

De lo señalado por la Autoridad se indica que la figura del arrendamiento de por sí presupone la temporalidad de la mercancía en el país, siendo entonces que si es el mismo artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, el que establece que en la importación temporal de mercancías en arrendamiento la mercancía puede permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, es porque precisamente la temporalidad iría hasta la fecha de terminación del contrato. Es decir que en otras palabras el plazo de la importación temporal debería seguirse hasta la fecha de terminación del contrato.

Otra cosa es que la Autoridad pretenda supeditar la temporalidad de la mercancía en el país a la renovación de la póliza antes del vencimiento de la anterior. Pues como bien dice la DIAN, no se puede confundir el plazo de permanencia de la mercancía en el territorio, con el plazo de vencimiento de renovación de la póliza, así como el plazo de terminación declarada de la modalidad.

Además, es en la misma Resolución sanción donde la DIAN afirma que la razón de tipificar la conducta del numeral 1.3 obedece a que no se modificó la garantía específica antes del 04 de enero de 2020, a pesar de que reconoce que la compañía si presentó una garantía

expedida retroactivamente. Es decir que impone la sanción con el único argumento de que no se presentó la renovación de la garantía antes del 04 de enero de 2020, confundiendo el plazo de renovación de la póliza con el plazo de terminación de la modalidad, veamos:

“En razón a que la mercancía ingresada bajo importación temporal de mercancías en arrendamiento financiero no le fue modificada la garantía específica establecida en el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999,(...) la cual garantizaba la modalidad de importación hasta el 04 de enero 2020 y que con boletín de rechazo #01 de 31 de enero de 2020, fue rechazada la garantía #01DL023306, la cual fue presentada extemporáneamente el 31 de enero de 2020 y expedida retroactivamente el 29-01-2020 (...) Ante el firme hecho generador de posible incumplimiento por parte del importador antes citado; debido a que la importación temporal no le fue modificada la garantía establecida en el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, antes del vencimiento de las mismas, dejando la importación temporal sin garantía como requisito de la importación temporal de mercancías en arrendamiento, documento sin el cual no es posible la importación temporal”

Como se observa, lo que la DIAN cuestiona es la omisión de no presentar la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial, y lo que el numeral mencionado tipifica, **es la omisión a terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado antes del vencimiento del plazo de la importación**, de ninguna manera este numeral tipifica la conducta realizada por la compañía, consistente en NO presentar la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial.

Al respecto de la manera como se pretende imponer la sanción en el presente caso, la Doctrina⁸ ha dicho con fundamento en la sentencia C-922 de 2001, que se actuaría arbitrariamente y por lo tanto estaría viciada de inconstitucionalidad o ilegalidad, **cualquier sanción que se impone sin estar la conducta conforme a la descrita en la norma**, como en efecto ocurre en el caso estudiado, siendo viable concluir que la sanción impuesta es abiertamente ilegal.

Además, resulta pertinente recordar que según el artículo 29 Constitucional *“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistente al acto que se le imputa”*, en ese sentido debe existir una correlación entre la conducta reprochada y la consecuencia sancionadora a la misma, lo cual no puede ser desconocido por el operador que aplique la infracción.

Por otro lado, la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de la “Lex praevia”, la cual implica que la pena o sanción a ser impuesta debe preexistir a los hechos y conductas infractoras, en el presente caso la conducta consistente en *“No presentar la renovación de la póliza antes del vencimiento de la inicial”* no preexiste a la sanción que se pretende imponer, lo cual reafirma la violación al principio de tipicidad.

Lo argumentado se reafirma con lo que la misma DIAN señaló en la Resolución sanción, en donde dijo lo siguiente para intentar desvirtuar el cargo de violación al principio de tipicidad:

“Queda demostrado pues, en conclusión de la doctrina expuesta, que hay una obligación por parte del importador al momento de modificar el plazo de la importación temporal, para el caso que nos ocupa, modificar la garantía, de tal manera que cubra el tiempo por la que le fue autorizado la permanencia de la mercancía en el territorio nacional de tal manera que existen obligaciones por parte del importador, cuyo incumplimiento se encuentra tipificado”

Como se observa, la DIAN asevera que el incumplimiento a la obligación de *“modificar la garantía de tal manera que cubra el tiempo por la que le fue autorizado la permanencia de la mercancía en el territorio nacional”*, se encuentra tipificado en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, sin embargo si se compara la obligación que refiere la DIAN con la obligación que se menciona en el numeral 1.3 del artículo 482-1, se advierte que NO son las mismas obligaciones, veamos:

Obligación mencionada por la DIAN	Obligación del numeral 1.3 del artículo 482-1
Modificar la garantía, de tal manera que cubra el tiempo por la que le fue autorizado	Terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo

⁸ Compendio de Derecho Administrativo. Jaime Orlando Santofimio. Universidad Externado de Colombia.

la permanencia de la mercancía en el territorio nacional.	Estado antes del vencimiento del plazo de la importación
---	--

Además, la misma DIAN afirma en uno de los apartes de la Resolución sanción lo siguiente: *“Vale la pena resaltarle al usuario, que las normas no contemplan excepción alguna, ni eximen de responsabilidad al importador, por el contrario, es precisa en cuanto a que **la modificación del término y la modalidad debe efectuarse antes del vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación y en el contrato modificatorio**”,* con lo cual reconoce que la conducta del numeral 1.3 del artículo 482-1 ocurre en el caso de que no se haya modificado la modalidad de importación temporal para reexportación, antes del vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación y en el contrato modificatorio, **y no antes del vencimiento de la póliza inicial.**

En ese sentido, consideramos que no se cumple el tercer elemento para que se configure la tipicidad administrativa, por cuanto:

- i. La conducta sancionada, no terminación de la modalidad temporal dentro del término, no se adecua a los hechos que se cuestionan, pues como lo hemos expuesto, a la fecha, el bien amparado en la declaración de importación temporal a largo plazo podrá permanecer (bajo esta modalidad) en el territorio aduanero nacional, hasta la finalización del contrato de arrendamiento, es decir hasta el 04/01/2022.
- ii. Siendo lo anterior una realidad, tenemos que no existe entonces una correlación entre la conducta y la sanción, pues se cuestiona la no finalización dentro del término de una declaración que claramente se encuentra vigente y amparada en debida forma en un contrato. Y que además a hoy existe una póliza vigente la cual fue presentada el 31 de enero de 2020 y expedida retroactivamente.

3.4. INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍA FUNDARSE EL ACTO ADMINISTRATIVO POR: A.) IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA; B.) FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD TRIBUTARIA Y DE LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL

En primer lugar, es preciso indicar que la denominada “infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo” es una causal de nulidad de los actos administrativos.

Esta causal incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual de principios, normas constitucionales y legales aplicables a cada acto administrativo, **lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema.**

Al respecto de la causal de infracción de las normas, el Consejo de Estado ha reconocido los eventos en los cuales se configura, así:

*“(…) ocurre cuando se configura una de las siguientes situaciones: **i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea.** (…)* Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde. (…)”⁹ (Negrita fuera del texto original)

En ese sentido, tenemos que en el presente caso se configuran dos de las situaciones descritas por la jurisprudencia para que se dé la causal de infracción de las normas, estas son, falta de aplicación e interpretación errónea las cuales se exponen a continuación.

A. INTERPRETRACIÓN ERRÓNEA. IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA POR NO CUMPLIRSE LOS SUPUESTOS DE HECHO NECESARIOS.

La DIAN en la Resolución sanción señala lo siguiente:

⁹ Consejo de Estado. Sección Cuarta. 15 de marzo de 2012. C.P: Hugo Fernando Bastidas. Radicación número: 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660)

*“ Se concluye entonces, que a la fecha de proferir la presente actuación administrativa, ni en la respuesta radicada no se ha demostrado y/o aportado documento aduanero alguno que demuestren que la importación temporal enunciada se dio por terminada en debida forma (...) razón por la cual este despacho decreta el incumplimiento al régimen de importación temporal, a la sociedad PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S, en calidad de **importador y como consecuencia ordena la efectividad de la garantía enunciada por los montos de los tributos aduaneros y sanciones que se deriven de esta** como consecuencia de su incumplimiento dentro del proceso administrativo previsto para imponer sanciones, en relación a la presunta infracción reglada en el numeral 1.3 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999”*

Como se observa, la DIAN aduce que al no cumplirse la obligación de terminar la importación temporal, debe necesariamente hacerse efectiva la póliza.

Frente al momento en que se debe hacer efectiva la póliza, conviene revisar el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, en donde se plantea que montos cubre la garantía y la fecha cierta en la que debe hacerse efectiva, fecha que según la DIAN opera en el momento que no se cumpla la obligación de terminar la importación temporal.

“ARTICULO 147. GARANTÍA. La autoridad aduanera exigirá la constitución de una garantía a favor de la Nación, por el ciento cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto de responder, al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación, por la finalización de la modalidad con el pago de los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, la garantía se constituirá con el objeto de responder, al vencimiento del quinto año o al vencimiento del término para la cancelación de la cuota correspondiente a la mitad del plazo de los cinco (5) años, por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.

En ambos casos, el objeto de la garantía también comprenderá los tributos aduaneros, intereses y sanciones que se generen por el incumplimiento de la obligación prevista en el inciso segundo del artículo 149 del presente decreto

La garantía se constituirá en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cuando se trate de mercancías importadas temporalmente para reexportación en el mismo Estado, la garantía se constituirá por el 10% del valor CIF de la mercancía cuando tenga exención total de tributos aduaneros y por el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los tributos aduaneros a pagar cuando se trate de exención parcial.

Para la importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, culturales o recreativos no se exigirá la constitución de garantía”.

PARÁGRAFO. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse efectiva cuando la autoridad aduanera determine el incumplimiento en cualquiera de las cuotas que se hayan causado hasta la mitad del plazo de importación señalado en la declaración.”

De la norma transcrita, tenemos que los eventos que se contemplan para que la garantía se haga efectiva son los siguientes:

- a. Al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación, por la finalización de la modalidad con el pago de los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.
- b. Al vencimiento del quinto año, para responder por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar.
- c. Al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado.

Como se observa, de los eventos que se plantean para hacer efectiva la garantía, en ninguno se contempla que esta se hará efectiva en el caso de que la garantía inicial no se haya renovado antes de su vencimiento.

Por lo cual, se presenta la imposibilidad jurídica de hacer efectiva la garantía, en tanto los supuestos de hecho del caso en estudio no se adecuan a los eventos que describe la norma como susceptibles de que se haga efectiva la garantía.

Veamos a continuación las razones de porque no se cumplen ninguno de los eventos descritos:

- a. **Hacer efectiva la garantía al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación:** Este evento no podría cumplirse en el presente caso, ya que este es un hecho futuro, el cual a la fecha de la expedición de la Resolución sanción no se ha cumplido, y a su vez, se está amparando en la renovación de la garantía que a la fecha se encuentra pendiente por aceptación del Despacho, en este orden de ideas, durante el término de no presentación de la renovación no se pusieron en riesgo los intereses del estado, pues no se tipificó ninguna causal expresamente señalada para que se diera la finalización de la modalidad. A la fecha los intereses del estado relativos en lo que tienen que ver con la finalización de la modalidad de importación, se deben garantizar en el momento que se cumpla la condición es decir el **04/01/2022**, mismos que se encuentran amparados en la póliza de cumplimiento que se ha radicado en su despacho y ha sido rechazada prevaleciendo una formalidad que el verdadero derecho sustancial.
- b. **Hacer efectiva la garantía al vencimiento del quinto año, para responder por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar:** Reiteramos que tal y como se prueba, el pago de las respectivas cuotas de los tributos aduaneros causados en virtud de la importación temporal, fueron cancelados dentro de los términos establecidos por el importador, de igual manera, dentro de ese tiempo la garantía aprobada gozaba de plena vigencia.
- c. **Al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado:** Como se informó en el literal anterior, en el presente caso no se ha incumplido con el pago de ninguna de las cuotas respectivas que se causaron.

Así las cosas, es claro que en el presente caso no se cumplen ninguno de los eventos que la norma ha establecido como desencadenantes de que se haga efectiva la garantía constituida.

Es por eso que, si bien la Seccional de Impuestos y Aduanas emplea el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999 para revisar si la garantía debía hacerse efectiva, situación con la que estamos de acuerdo dado que este artículo resolvería el caso en particular, en lo que nos encontramos en desacuerdo es que la DIAN aplique equivocadamente el artículo mencionado, al asignarle un alcance que no le corresponde, pues en últimas está creando a su arbitrio un evento más para que se entienda que la garantía debe hacerse efectiva.

Este evento sería: **“La garantía debe hacerse efectiva en el momento en que la póliza inicial no haya sido renovada antes de su vencimiento”**. El evento descrito de ninguna manera se encuentra contenido dentro del artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, y mucho menos dentro de los artículos que regulan la importación temporal.

Es por eso que, la razón para considerar que hay un vicio de nulidad de “infracción de las normas en que debió fundarse el acto administrativo”, corresponde a que, si bien la DIAN aplica el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999 para resolver el caso, también es cierto que le da un alcance a la norma que no tiene al realizar una interpretación indebida del artículo, pues encuadra el supuesto de hecho del caso consistente en que la póliza no se renovó antes de su vencimiento, en unos eventos que como se describieron en los párrafos anteriores nada tienen que ver con el que se discute en el caso de estudio.

B. FALTA DE APLICACIÓN DEL (I) PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD TRIBUTARIA Y (II) DE LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL.

Como se refirió en el preámbulo del cargo, la infracción de las normas en que debe fundarse el acto, implica que se debe confrontar el acto no solo con normas legales, sino también

con principios y normas constitucionales que puedan aplicarse al caso, en tanto estas son la base y esencia del sistema.

En ese sentido, por falta de aplicación tenemos que en el presente caso la DIAN vulnera el principio de justicia y equidad tributaria, al igual que la máxima general referente a la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en todo proceso administrativo.

(I) Falta de aplicación del principio de justicia y equidad tributaria

El principio constitucional de justicia tributaria no permite que se impongan previsiones incompatibles con la defensa de un orden justo, y garantiza que no haya una injusta distribución de la carga fiscal¹⁰. Este principio general contiene el principio de equidad tributaria.

Este último es definido por la Corte Constitucional como aquella expresión concreta del principio de igualdad en el sistema tributario. El contenido de este principio refiere a la prohibición de que se impongan obligaciones excesivas o beneficios desbordados al contribuyente¹¹.

Por su parte, en el Decreto 1165 de 2019 se define el principio de justicia en la función aduanera de la siguiente manera:

“3. Principio de justicia. Todas las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera deberán estar presididas por un relevante espíritu de justicia. La administración y/o autoridad aduanera actuará dentro de un marco de legalidad, reconociendo siempre que se trata de un servicio público, y que el Estado no aspira que al obligado aduanero se le exija más de aquello que la misma ley pretende.”

De las anteriores normas citadas se pueden extraer las siguientes ideas:

- a. Atendiendo al principio de equidad, no se pueden imponer obligaciones excesivas a los contribuyentes.
- b. Atendiendo al principio de justicia, no se le puede exigir al usuario aduanero que adquiera una carga mayor a la debida.

Para el caso que nos ocupa, la DIAN afectó la garantía sustentado en que mi representada debió terminar la modalidad de importación temporal a largo plazo, obligación que como se explicó en los cargos anteriores, no tenía porque cumplir mi representada, dado que la Seccional ha hecho interpretación extensiva y errónea de las normas aplicables al caso.

Entendiendo entonces que, el importador no tenía la obligación de terminar la modalidad por cuanto: (i) No se cumplen ninguno de los eventos señalados en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999; (ii) A hoy existe una póliza que ampara la importación temporal;(iii) El plazo para que permanezca la mercancía en el país bajo arrendamiento (es decir temporalidad) aún se encuentra vigente, es fácil deducir que la DIAN está imponiendo una obligación excesiva a la compañía que representó, al pretender imponerle una sanción de 7 salarios mínimos legales vigentes a pesar de que la conducta no se tipifica en la infracción contenida en el numeral 1.3 del artículo 482-1.

Además, la DIAN impone una carga tributaria mayor a la debida por las siguientes razones:

Como sabemos, la garantía se debe hacer efectiva al momento del vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación; o al momento del vencimiento del quinto año; o al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado.

Los eventos descritos no se cumplen para el caso que nos ocupa (tal como se sustentó debidamente en el cargo anterior). Siendo entonces que no se cumplen, resulta imperativo no afectar la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), suma que por demás no se ha causado a la fecha de hoy, y sobre la cual el importador se acogió al beneficio contenido en el literal e del Artículo 428 del Estatuto Tributario el cual dispone:

“ARTICULO 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas: (...) e. Se consideran

¹⁰ Corte Constitucional. Sentencia C-278/19

¹¹ Corte Constitucional. Sentencia C-056/19

industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos complementarios o accesorios del equipo principal”

En ese sentido, la DIAN está imponiendo una carga tributaria mayor a la debida derivada de su desconocimiento acerca que no se puede hacer efectiva la garantía, y de que la operación de importación se acogió al beneficio tributario contenido en el artículo 428 del Estatuto Tributario.

Es decir que sin cumplirse los eventos para hacer efectiva la garantía, pretende imponer una carga tributaria que no corresponde a la operación analizada.

Ahora bien, la Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta para desvirtuar el cargo de violación al principio de justicia y equidad tributaria simplemente señala lo siguiente en la Resolución sanción:

“El impuesto a las ventas que no se causó con la importación temporal de mercancía en arrendamiento, se causa con la expedición del acto administrativo que ordena modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria. Por lo tanto, se considera viable liquidar el impuesto sobre las ventas en el acto administrativo que modifica de oficio la declaración de importación”

Por su parte, en la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración expresó:

“Igualmente, el Oficio 072433 de 2013 concluyó que: “En síntesis, al cambiar la modalidad de importación de la maquinaria de temporal a ordinaria, la consecuencia tributaria inmediata es la pérdida de la condición de excluida de la importación y el nacimiento de la obligación de pagar el IVA. El cambio en la modalidad de importación determina el momento de causación del impuesto, y consecuentemente, la tarifa a aplicar”

Olvidando que para el caso que nos ocupa no hay razón jurídica válida para modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria, pues no se cumplen ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, y de aplicarse el literal c de los eventos descritos en el artículo 156, tampoco se cumplen los presupuestos del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

(II) Falta de aplicación de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal

Cuando el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, establece que en las actuaciones de la Administración deberá prevalecer el derecho sustancial sobre las formalidades, no busca nada diferente a que en cada una de las actuaciones de sus entidades, se busque tutelar el fondo de los asuntos, por encima de las formalidades.

Al respecto del derecho sustancial sobre las formas, la Corte Constitucional también ha advertido que las formas no pueden convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Y que existe el “exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

Este concepto fue sentado en la Sentencia T-1306 de 2001, en la cual se definió a esta figura jurídica como aquella que “se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material” .

Así mismo la Corte Constitucional ha sostenido que el exceso de ritual manifiesto acontece cuando: “ i) *no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, y iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales.*”¹²

¹² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA.

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01044-00(AC)

En el presente caso, tenemos que la formalidad que pretende imponer la Seccional acerca de presentar la renovación de la garantía antes de la finalización de la primera vigencia, va en contravía del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, porque se está desconociendo que la importación temporal a hoy día se encuentra amparada por la póliza renovada, que si bien no se presentó antes de la finalización de la primera, en últimas si fue presentada y sigue amparando la importación temporal a largo plazo.

Desconocer que existe a hoy una garantía que ampare la importación temporal a largo plazo, es obstaculizar el derecho sustancial de mi representado referente a que las mercancías tienen el derecho de permanecer en el territorio aduanero nacional.

La Autoridad aduanera está aplicando un extremo rigor en el plazo que se tenía para presentar la garantía sin cimentarse en norma jurídica alguna, y está a su vez renunciando a la verdad objetiva de los hechos concerniente a que **LA GARANTÍA A HOY EXISTE, ES DECIR QUE LAS MERCANCÍAS SI SE ENCUENTRAN AMPARADAS**, esta verdad objetiva y evidente que desconoce la DIAN, vulnera el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.

Así pues y teniendo en cuenta que ya fue presentada la renovación, invocamos este principio constitucional para afirmar que la Seccional debió aceptar la renovación de la garantía dando prioridad a tutelar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del importador.

Es por eso que se concluye que al existir a hoy una garantía que ampara la importación temporal, queda sin base argumentativa lo señalado por la DIAN respecto que la mercancía no está amparada en póliza alguna.

3.5. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO PROBATORIO

La debida valoración probatoria es un derecho del debido proceso administrativo, el cual hace parte de un sistema de garantías que procura la obtención de decisiones justas para los particulares.

Para la jurisprudencia constitucional, hay una indebida valoración probatoria cuando se configura alguno de los siguientes eventos:

“La indebida valoración probatoria, se configura en los siguientes eventos: “(i) cuando el funcionario administrativo, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (...)”¹³ (Negrita fuera de texto)

Específicamente, frente a la facultad con la que cuentan las autoridades administrativas para valorar las pruebas aportadas al proceso, la Corte Constitucional refiere lo siguiente:

“(...) Aunque la jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia, el amplio margen que tienen las autoridades administrativas al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales”¹⁴

Como se observa, del aparte citado se desprende que las autoridades administrativas al momento de valorar las pruebas incorporadas a un proceso administrativo, deben tener en cuenta las reglas de la sana crítica.

Quien debe decidir con arreglo a la sana crítica no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción¹⁵.

Para el presente caso, tenemos que obra en el expediente los siguientes dos documentos:

¹³ Corte Constitucional. Sentencia T-566 de 2016.

¹⁴ Corte Constitucional. Sentencia T-566 de 2016

¹⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-622 de 1998. Salvamento Parcial de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz

- Garantía No. 01DL023306 presentada el 31 de enero de 2020.
- Contrato de arrendamiento financiero que soporta la modalidad de importación temporal, con fecha de finalización del 04 de enero de 2020.

No obstante, y a pesar de existir dos documentos que prueban que la mercancía puede permanecer a hoy en el territorio aduanero nacional sin que sea necesario terminar la modalidad de importación temporal a largo plazo, la autoridad aduanera decidió separarse de lo consignado en el contrato de arrendamiento financiero, en la declaración de importación, y en la póliza renovada; y por el contrario:

- a. Dio por probado hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso:** La autoridad aduanera dio por probado que la importación temporal debió ser finalizada el 04 de enero de 2020, a pesar de que no cuenta con un contrato de arrendamiento financiero que indique que en la mencionada fecha se vencía el plazo del arrendamiento.

Adicional a lo anterior, la Autoridad aduanera prácticamente da por probado que las mercancías actualmente no se encuentran amparadas por garantía alguna, desconociendo que la renovación a la garantía inicial ya fue presentada el 31 de enero de 2020, y que la misma no fue aceptada por cuanto la Seccional decidió en contravía de las normas constitucionales, privilegiar los derechos formales sobre los sustanciales.

- b. Decidió separarse de los hechos debidamente probados y resolvió a su arbitrio el asunto jurídico debatido:** La autoridad aduanera desconoció el hecho de que el bien amparado en la declaración de importación temporal a largo plazo, podrá permanecer (bajo esta modalidad) en el territorio aduanero nacional, hasta la finalización del contrato de arrendamiento, es decir, hasta el 04/01/2022.

Es decir que, aun existiendo el contrato de arrendamiento que prueba la fecha cierta en que puede finalizar la modalidad de importación temporal, la Autoridad aduanera decide apartarse de esta fecha, y concluir que como no se renovó la garantía antes de la finalización de la inicial, procede terminar la modalidad. Desconociendo que la modalidad termina únicamente si se dan los eventos descritos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999.

Al respecto de lo argumentado por la compañía en el recurso de reconsideración, la Autoridad aduanera señaló en la resolución sanción lo siguiente:

“Las pruebas se valoran objetivamente, bajo el criterio de la sana crítica, y son las mismas que posee el importador y la compañía de seguros, y el hecho de que estos últimos no compartan la posición de la entidad, no significa que se haya vulnerado el debido proceso probatorio”

Lo argumentado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, no desvirtúa de ninguna manera que a hoy la mercancía se encuentra amparada por una póliza, y que cuenta con un contrato en el cual se indica que podrá permanecer hasta el 04 de enero del 2022.

Aquí no se trata de compartir una posición u otra, lo que aquí se discute es que no se hayan valorado las pruebas documentales, las cuales permiten concluir que a hoy la mercancía puede permanecer bajo la modalidad de temporal.

3.6. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TUTELA A LA CONFIANZA PÚBLICA

El principio de tutela a la confianza pública, implica que las actuaciones de las autoridades administrativas deben siempre tender a consolidar la confianza, la seguridad jurídica, la credibilidad, la certidumbre, la lealtad.

En virtud de este principio entonces, la administración está obligada a **ser consecuente consigo misma, y no asaltar la confianza, seguridad, credibilidad, y aceptación de los particulares**¹⁶.

Este principio entonces, es transversal al principio de confianza legítima, que al respecto se concibe como la posibilidad de que el individuo se encuentre en un medio jurídico

¹⁶ Compendio de Derecho Administrativo. Orlando Santofimio.

estable y previsible, así como la obligación que tienen las autoridades públicas de tener un comportamiento no contradictorio frente a los particulares, veamos:

“En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. (...) si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario..”¹⁷

Delimitado el concepto del principio de tutela a la confianza pública como principio constitucional imperante en las relaciones de los particulares y la administración, y una vez determinada la manera como deben concretarlo las autoridades administrativas frente a los particulares.

Para el presente caso tenemos que la Autoridad aduanera actuó desconociendo este principio, pues **vulneró la confianza legítima que tiene la compañía de encontrarse en un medio jurídico estable y no contradictorio, dado que atendiendo al artículo 27 y 28 del Código Civil, el cual establece que cuando el sentido de la norma sea claro no se debe atender a su espíritu, la compañía importadora entendió que el bien importado bajo la modalidad de importación temporal a largo plazo puede permanecer en el territorio aduanero nacional, bajo la modalidad temporal por el término de vigencia del contrato**, siempre y cuando, el importador haya cancelado la totalidad de los tributos aduaneros a más tardar en la décima cuota semestral, es decir, en un término no superior a los 5 años contados a partir de la presentación y aceptación de la Declaración de Importación a Largo Plazo.

Esta confianza de la compañía respecto a que no debía finalizar la modalidad de importación temporal se sustentó entre otras cosas.

- a. **En el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999:** que plantea que la garantía se debe hacer efectiva al momento del vencimiento del plazo de señalado en la declaración de importación; o al momento del vencimiento del quinto año; o al momento del incumplimiento de cualquiera de las cuotas que se hayan causado. Eventos que no se cumplen en el caso.
- b. **En el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999:** el cual plantea que la mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato, de ninguna manera establece que aún cumpliendo con el pago del saldo de tributos aduaneros, **la mercancía SOLO podrá permanecer en el territorio aduanero nacional si la renovación de la póliza se expidió con anterioridad al vencimiento de la inicial.**
- c. **En el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999:** que plantea que la terminación de la modalidad temporal se da en los casos expresamente señalados en dicho artículo, los cuales no se cumplen en el caso en estudio.
- d. **En el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999:** que plantea que para que proceda la terminación por parte de la Autoridad aduanera se deberá dar alguno de los siguientes supuestos:
 - 1) Cuando se tipifique alguna de las infracciones previstas en el Art. 482-1: Situación que no se cumple en el presente caso por los motivos anteriormente expuestos. y;
 - 2) Cuando ejercida la opción de compra, el importador no dé por terminada la modalidad temporal a largo plazo: Esta situación tampoco se ha dado.

Es decir que la terminación de la modalidad por parte de la Autoridad aduanera no está supeditada a que se renueve la póliza antes de la terminación de la vigencia de la inicial.

Así las cosas, consideramos que en los términos anteriormente expuestos mal haría la Autoridad aduanera en afectar una garantía e imponer una sanción a mi representado, en base a alcances extensivos de las normas, que se contrarían con el método de interpretación gramatical que se le debe dar a las mismas cuando su sentido es claro, como

¹⁷ Sentencia C-131/04

opera en las normas aplicadas al caso en concreto (artículos 147, 150, 153, y 156 del Decreto 2685 de 1999).

3.7. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR LIMITAR EL EJERCICIO AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA

La violación al debido proceso lo constituye el desconocimiento del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, que contiene un procedimiento especial para decretar el incumplimiento, la efectividad de la garantía y la modificación de oficio. Veamos el texto legal mencionado que fue modificado por el artículo 8º del Decreto 4136 de 2004:

“ART. 8º—Modifícase el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

*“ART. 150.—**Modificación de la modalidad.** Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, modificar la declaración de importación temporal a importación ordinaria o con franquicia y obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía, pagando, cuando fuere del caso, la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, los intereses pertinentes y la sanción a que haya lugar.*

(...)

*La terminación de las importaciones temporales de mercancías en arrendamiento a iniciativa del importador mediante la modificación de la declaración de importación temporal a ordinaria, se surtirá cuando se ejerza la opción de compra. **De no hacerlo el importador, la modificación se surtirá de oficio con la copia del acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se imponga la sanción por no terminación de la modalidad, el cual será remitido a la jurisdicción de la administración de aduanas o de impuestos y aduanas que otorgó el levante a la declaración inicial.*** -resaltado fuera de texto-

(...)”

El inciso antes citado contiene el debido proceso a que está la Administración obligada a respetar. No obstante que, como se ha expresado a lo largo del presente escrito, no estamos de acuerdo con la declaratoria de incumplimiento y terminación de la importación temporal, hay que resaltar que en los actos administrativos demandados se viola el debido proceso porque, para la realización de la modificación de oficio de importación temporal a ordinaria primero debe encontrarse ejecutoriado el acto administrativo imponiendo la sanción por no terminación de la modalidad, pero en la resolución No. 526 de 26 de octubre de 2020, se impone la sanción por no terminación de la modalidad con base en el numeral 1.3., artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, se decreta el incumplimiento y se cobran los tributos aduaneros (IVA) en su totalidad, lo que significa que el debido proceso de la norma antes citada fue violado, ya que las etapas a respetar en su orden eran, la ejecutoria del acto que impone la sanción para luego dar traslado a la División competente para efectuar la modificación de oficio. Es decir, primero debe terminarse el proceso sancionatorio para que se pueda iniciar el trámite de una declaración de importación – modificación de oficio para el cambio de importación temporal a importación ordinaria, trámite que no se cumplió porque todas las etapas legales se cumplieron en un solo acto administrativo, que luego fue confirmado al decidirse (sin competencia) el recurso de reconsideración.

Además, esta violación al debido proceso genera otra violación de la competencia funcional, porque no podía la División de Gestión de Liquidación, en un solo acto usurpar las funciones de la División de la Operación Aduanera o su equivalente, a la que le corresponde, según la norma en comento, realizar la declaración de oficio, la que implica cumplir todas las etapas del trámite de la declaración de importación.

Es evidente la violación al debido proceso respecto del camino procesal que eligió la Administración, lo que denota un afán recaudatorio de la autoridad aduanera, desdibujando los objetivos del proceso, por lo que se estructura otra causal de nulidad de los actos administrativos consistente en la desviación de poder ya que la intención de la Administración no es el cumplimiento de las normas procesales, sino el ánimo de recaudación de recursos a costa del particular y con la violación directa de la ley, como se ha venido exponiendo a lo largo del presente escrito.

3.8. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE DOBLE SANCIÓN POR LA MISMA INFRACCIÓN

A nadie se le podrá sancionar dos veces por el mismo hecho, ni se le podrá aprehender más de una vez la mercancía por la misma causal, es la premisa general que consagra el principio de prohibición de doble sanción establecido en el Estatuto Aduanero, el cual tanto en la Jurisprudencia cómo en la Doctrina, es comúnmente conocido como el principio de ***non bis in idem***, que tiene como función evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad.”¹⁸

Este principio impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los medios a su alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita. De ahí que la Constitución prohíba que un individuo sea “juzgado dos veces por el mismo hecho.”

Así mismo, este principio es entendido constitucionalmente como un derecho fundamental que hace parte de las garantías estructurales del debido proceso contempladas en el artículo 29 de la Carta Política, razón por la cual la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que, el fundamento de su existencia no es otro que “preservar los principios de seguridad jurídica y justicia material, los cuales a su vez amparan el principio de la cosa juzgada”.

Respecto de su aplicación, el mencionado principio cobija no solo el ámbito del derecho penal, sino que ha sido extendido como uno de los principios garantes de un debido proceso administrativo sancionatorio. Así lo ha entendido la Corte Constitucional en sentencia C-087/02, cuando indicó como premisa general que este principio es aplicable cuando la finalidad de un régimen es regular las condiciones en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su conducta contraria a derecho.

Con lo afirmado por la Corte Constitucional, es claro que cualquier tipo de actuación sancionatoria adelantada por cualquier autoridad estatal debe observar de manera integral la totalidad de garantías del debido proceso sustancial. En ese sentido, el principio de non bis in ídem debe ser observado por la autoridad aduanera en cualquier proceso administrativo sancionatorio.

Entendiendo lo anterior, para el presente caso tenemos que, la Autoridad aduanera desconoció este principio tal y cómo se evidencia en los hechos que se narran tanto en el REA y la Resolución sanción por las siguientes razones:

En primera medida, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta señaló en el Resuelve de la Resolución sanción que se demanda, que declaraba el incumplimiento de la modalidad de importación temporal a largo plazo, así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR el incumplimiento al régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del 04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020”

El decreto del presente incumplimiento se da en el expediente 000274, así mismo en la Resolución sanción se señaló que se hacía necesario efectuar la liquidación de los tributos aduaneros, con el fin de hacerlos exigibles al momento de hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales “Póliza específica 24 DL 007957”.

Por su parte, en un expediente diferente al que se cuestiona en la presente demanda (el 00278), la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta señaló en la Resolución sanción lo siguiente:

“ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR el incumplimiento al régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del

¹⁸ Sentencia C-870/02

04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020”

El decreto del incumplimiento mencionado se da en el expediente 000274, así mismo en la Resolución sanción se señaló que se hacía necesario efectuar la liquidación de los tributos aduaneros, con el fin de hacerlos exigibles al momento de hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales “Póliza específica 24 DL 007997”.

Como se observa, tenemos dos declaratorias de incumplimiento sobre unas mismas declaraciones de importación, declaratorias que se estudiaron en dos expedientes diferentes y que a su vez ordenan hacer efectiva una Póliza específica diferente en cada expediente.

Es decir que en pocas palabras lo que la Dirección Seccional hace es juzgar dos veces un mismo hecho, y a su vez afectar dos garantías diferentes sobre unos mismos hechos, de lo cual se deduce que se pretende sancionar doblemente al importador.

Si se comparan las dos infracciones tipificadas en ambos procesos, se advierte que en esencia estas infracciones describen los mismos supuestos de hecho *“No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando hubiese pagado oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros correspondientes”*.

Además, si se revisa la motivación de ambos procesos para determinar que la conducta de la compañía se encontraba dentro de la infracción mencionada, se encuentra que los fundamentos de hecho que en ambos procesos considero la autoridad aduanera fueron los mismos, esto es que hay un incumplimiento en el régimen de Importación Temporal a Largo Plazo, autorizado mediante declaración de importación con sticker No. 07256270156943 del 14-01-2010 con levante No. 192010000001031 del 15/01/2010, con Declaraciones de Modificación No. 07256280226068 del 08-06-2020 y levante 1920100000024119 del 15/06/2010, inicial reimportación #13582010184884 del 27/01/2015, inicial reimportación #13582010187982 del 04/03/2015, garantizado con póliza específica #24 DL007997 CERT MODF. 24 DL014593, 24DL014783, DL017793, 24DL014817 expedida por la compañía aseguradora de fianzas S.A con vigencia del 05/01/2015 al 04/01/2020 y la cual debió ser finalizada el día 04/01/2020

Dicho esto, es evidente que el proceder de la autoridad aduanera estuvo revestido de falta de objetividad y un desconocimiento del principio de non bis in idem, pues buscó situar nuevamente a la compañía en una posición de inseguridad jurídica, desconociendo además la prohibición expresa que contiene el principio referenciado respecto de evitar que los administrados sean víctimas de permanentes y sucesivas investigaciones con motivo de los mismos supuestos fácticos.

Ahora bien, a pesar de que el principio *non bis in idem* no impide que “una misma conducta sea castigada y valorada desde distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo tiempo como infracción disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza sancionatoria”; este principio si se hace exigible cuando, **“dentro de una misma área del derecho, y mediante dos o más procesos, se pretende juzgar y sancionar repetidamente un mismo comportamiento”**. (Negrita fuera de texto), es decir, se hace exigible para el caso que nos ocupa, en donde un mismo comportamiento se tipificó dos veces bajo una misma infracción y bajo un proceso sancionatorio de la misma naturaleza.

Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-632-2011, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales recogidos en las Sentencias C-870 de 2002 y C-478 de 2007, determinó que es posible juzgar y sancionar varias veces un mismo comportamiento sin que ello implique una vulneración del principio de la referencia, siempre que se cumplan los siguientes supuestos:

- Cuando la conducta imputada ofenda distintos bienes jurídicos que son objeto de protección en diferentes áreas del derecho;
- Cuando las investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos;
- Cuando los procesos y las sanciones atiendan a distintas finalidades; y
- Cuando el proceso y la sanción no presenten identidad de objeto y causa.

Para el presente caso no se cumplen los supuestos referenciados, que permitan concluir que en efecto la autoridad aduanera no vulneró dicho principio puesto que:

- **Ambas investigaciones y sanciones propuestas tienen los mismos fundamentos normativos, no hay diferencia en los bienes jurídicos ofendidos:** La infracción tipificada en los dos expedientes 0274 y 0278 es la misma, numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999. Es decir que ofenden los mismos bienes jurídicos.
- **Los procesos y las sanciones adelantados a la fecha atienden la misma finalidad:** La finalidad de ambos procesos consiste en imponer a la compañía una sanción pecuniaria por la infracción descrita en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, así como declarar el incumplimiento del régimen de importación temporal a largo plazo y afectar la póliza en el IVA suspendido en la modalidad temporal.
- **Ambos procesos y la sanción presentan identidad de objeto y causa:** tal y cómo se evidencia en los párrafos anteriores hay identidad de objeto y de causa, pues por un lado la pretensión de la autoridad aduanera es la misma en ambos procesos, imponer una sanción a la compañía por presuntamente incumplir con no terminar la modalidad de importación temporal; y por otro lado, hay identidad de causa en tanto los fundamentos de hecho y derecho empleados son los mismos.

De igual modo, resulta necesario precisar que, tal como lo establece la Sentencia C-632-2011 antes enunciada, el ámbito de protección que irradia el principio *non bis in ídem*, no solo se dirige a prohibir la doble sanción sino también el doble juzgamiento, pues no existe justificación jurídica válida para someter a una persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. En este sentido, la expresión “juzgado”, utilizada por el artículo 29 de la Carta para referirse al citado principio, comprende las diferentes etapas del proceso y no sólo la instancia final, es decir, la correspondiente a la decisión”.

Dicho lo anterior, es indiscutible que la autoridad aduanera transgredió el principio invocado, al pretender dentro del mismo curso de la investigación administrativa, efectuar un doble juzgamiento por los mismos hechos y, por consiguiente, sancionar la conducta que no es atribuible a la compañía.

En razón a los argumentos anteriormente expuestos, consideramos que existen razones suficientes para concluir que la autoridad aduanera vulneró las garantías mínimas que se deben garantizar dentro de un proceso administrativo, y que por tanto, la Resolución sanción, y los demás actos administrativos que anteceden a su expedición, resultan contrarios y violatorios no sólo de la norma aduanera sino también de la jurisprudencia emitida por la Altas Cortes.

3.9. DEFECTO SUSTANTIVO DE LA RESOLUCIÓN SANCIÓN Y RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA PRIMERA, POR MOTIVACIÓN INSUFICIENTE.

Según la Corte Constitucional en sentencia SU-635 de 2015, un fallo judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad “(v) *omite motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente*”. Si bien es cierto, en el caso que nos ocupa no estamos ante un fallo judicial, si nos encontramos ante un acto administrativo que contiene una decisión proferida por una autoridad, en ese sentido, resulta aplicable al caso en concreto el defecto mencionado.

Frente a la motivación insuficiente, la jurisprudencia nacional ha dicho que esta se refiere a la motivación que carece de dos tipos de justificaciones: (i) la interna y (ii) la externa. Al respecto de estos dos términos, los mismos se han desarrollado de la siguiente manera:

“La falta de justificación externa, se predica de aquellos juicios jurídicos en los cuales la premisa normativa o la premisa fáctica del juicio jurídico aparecen construidas por el juez sin argumentación suficiente. Tanto los elementos fácticos como los normativos empleados en una sentencia podrían, efectivamente, responder a la realidad procesal o a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Pero, aún así, si no se ofrecen motivos para sustentarlos, la interpretación estaría indebidamente justificada, porque no existirían muestras de la actuación adelantada por el juez para concluir que esos eran, definitivamente, los componentes determinantes del sentido de su decisión”¹⁹

¹⁹ Sentencia T-589 DE 2010. Corte Constitucional

Por su parte, sobre la falta de justificación interna se ha dicho lo siguiente:

“La falta de justificación interna se le atribuye a la conclusión cuando no es “solidaria con las premisas” o, como lo señaló la Corte en otra ocasión, cuando no “se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. Sin embargo, debido a que las decisiones jurídicas, muy a menudo no son evidentes, y no pueden nunca ser arbitrarias, es preciso exponer las razones que justifican el paso de las premisas a la conclusión”²⁰

Específicamente, frente a la insuficiencia de la motivación en los actos administrativos, la Corte Constitucional ha dicho que la mera citación de normas no podía tenerse en cuenta como una motivación suficiente, pues era necesario además señalar las razones (empíricas y argumentativas) que, en concordancia con la normatividad correspondiente, justificaban la decisión del acto.

Además, se ha dejado claro en la jurisprudencia constitucional que las autoridades no pueden simplemente afirmar que el Derecho positivo ordena, prohíbe o permite determinada solución y tan sólo citar algunos artículos. El órgano encargado de aplicar el derecho en los casos concretos está en la obligación de exponer por qué esas referencias normativas autorizan una conclusión interpretativa como la que expone en su acto.

La interpretación que se haga en todo caso deberá basarse en razones y argumentos fundados, de modo que se eviten conclusiones y posiciones absurdas frente a los casos.²¹

Para el presente caso, estamos ante dos actos administrativos (Resolución sanción y Resolución confirmatoria) que si bien podría pensarse que ofrece una motivación, esta resulta siendo insuficiente. En ese sentido, a continuación pasaremos a estudiar cada uno de los cargos expuestos tanto en la respuesta al REA como el recurso de reconsideración, y que no fueron desvirtuados por la Autoridad aduanera, para de esta manera demostrar que las Resolución que se demandan adolecen de justificación interna y externa.

a. Frente al cargo de falsa motivación sustentado en la respuesta al REA y en el recurso de reconsideración

En la resolución sanción, la DIAN no realiza un estudio coherente en contra del argumento de falsa motivación, únicamente refiere lo siguiente:

“En una importación temporal de mercancías en arrendamiento que supera los 5 años, el objeto asegurable en la renovación de la póliza al finalizar el quinto año, será el de responder por la terminación de la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado, antes del vencimiento del plazo de la importación, y el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del decreto 2685 de 1999”

Como se observa, la DIAN intenta desvirtuar nuestro argumento expuesto en la respuesta al REA referente a que: **“LA AUTORIDAD ADUANERA INTERPRETA ERRÓNEAMENTE QUE LA OMISIÓN DE RENOVAR LA GARANTÍA ANTES DE SU FINALIZACIÓN, CONLLEVA A LA TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN TEMPORAL”**, con interpretaciones que nada tienen que ver con lo que discute en el presente caso.

En el caso que nos ocupa no se discute en cuanto debe ser el monto de la garantía de mercancías en arrendamiento que superan los 5 años, y cuál es el objeto asegurable, aquí lo que se discute es el derecho de una mercancía en arrendamiento de permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.

Es así que frente al intento de desvirtuar este cargo nos encontramos frente a una falta de justificación externa, **pues si bien la conclusión a la que llega la DIAN concerniente a que el monto por el cual debe ser renovada será el equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999 podría ser cierta, esta no resuelve el problema jurídico que se estudia en el caso.**

Aunado a lo anterior, es pertinente recordar que de la lectura del numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, no se advierte que allí se tipifique una conducta referente a que la póliza debía ser renovada en un monto equivalente a la sanción contemplada en el numeral 1.3 mencionado, con lo cual no se entiende porque la División de Gestión de

²⁰ Sentencia T-589 DE 2010. Corte Constitucional

²¹ Sentencia T-472 de 2011. Corte Constitucional

Liquidación emplea este argumento para terminar por tipificar una conducta que no aplica al caso en estudio.

Ahora bien, en la Resolución confirmatoria frente al cargo de violación de falsa motivación, la DIAN refiere después de citar diversas normas que:

“De manera alguna se puede predicar que el acto administrativo objeto de recurso, se encuentre falsamente motivado o que haya una indebida tipificación de la infracción aduanera, pues es evidentemente claro que la modalidad de importación temporal declarada no fue terminado dentro del plazo previsto en la declaración de importación. No debe confundirse el plazo de permanencia de la mercancía en el territorio nacional, con el plazo de vencimiento de renovación de la póliza, así como el plazo de terminación declarada de la modalidad”

La DIAN señala que no deben confundirse los plazos mencionados, sin embargo, no explica las razones de su dicho, y mucho menos desvirtúa los argumentos plasmados por parte de la compañía en el recurso de reconsideración, simplemente citó diversos artículos aplicables al caso y no realizó una interpretación de los mismos.

Como se observa, aquí la DIAN no expuso por qué esas referencias normativas que citó, autorizan una conclusión interpretativa diferente a la expuesta por parte nuestra.

b. Frente al cargo de violación al principio de tipicidad sustentado en la respuesta al REA y en el recurso de reconsideración

Para intentar desvirtuar el cargo de violación al principio de tipicidad, la DIAN cita varios artículos del Decreto 2685 de 1999, entre ellos el 142, 143, 147, 511, y 148, los explica superficialmente y sin un análisis consecuente concluye que era obligación modificar la garantía antes del vencimiento, de tal manera que se asegurará cubrir el tiempo por el que fue autorizada la permanencia de la mercancía, cuyo incumplimiento se encuentra tipificado en el régimen sancionatorio.

Esta falta de análisis por parte de la Autoridad aduanera permite predicar que hay una falta de justificación interna, pues la conclusión a la que se llega no se deducen de las premisas obtenidas de los artículos citados y las pequeñas explicaciones sobre los mismos.

Además, es importante recordar que la simple citación de normas no puede tenerse en cuenta como una motivación suficiente, pues era necesario además señalar las razones argumentativas que justificaran el porque la omisión de no modificar la garantía antes del vencimiento de la inicial, se tipificaba en la conducta del numeral 1.3 del artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, por el contrario aquí no se señalaron razones argumentativas coherentes.

c. Frente al cargo de falta de aplicación del principio de justicia y equidad tributaria

La Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta para desvirtuar el cargo de violación al principio de justicia y equidad tributaria simplemente señala lo siguiente en la Resolución sanción:

“El impuesto a las ventas que no se causó con la importación temporal de mercancía en arrendamiento, se causa con la expedición del acto administrativo que ordena modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria. Por lo tanto, se considera viable liquidar el impuesto sobre las ventas en el acto administrativo que modifica de oficio la declaración de importación”

Por su parte, en la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración expresó:

“Igualmente, el Oficio 072433 de 2013 concluyó que: “En síntesis, al cambiar la modalidad de importación de la maquinaria de temporal a ordinaria, la consecuencia tributaria inmediata es la pérdida de la condición de excluida de la importación y el nacimiento de la obligación de pagar el IVA. El cambio en la modalidad de importación determina el momento de causación del impuesto, y consecuentemente, la tarifa a aplicar”

Olvidando que para el caso que nos ocupa no hay razón jurídica válida para modificar de oficio la modalidad de importación temporal a ordinaria, pues no se cumplen ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, y de aplicarse el literal c de los eventos descritos en el artículo 156, tampoco se cumplen los presupuestos del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

Dicho argumento no fue desvirtuado por la Autoridad aduanera, pues se repite que no realizó una explicación o interpretación de las normas que citó, y que de haberse hecho seguramente habrían dado sustento a lo argumentado de su parte frente a la causación del impuesto a las ventas.

d. Frente a los demás cargos expuestos

Llama la atención que la DIAN no intenta siquiera desvirtuar los demás cargos que fueron expuestos en la respuesta al REA y en el recurso de reconsideración, lo cual constituye una razón más para considerar que estamos frente a actos administrativos con una motivación insuficiente.

IV. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

En el presente caso, se agotó la vía administrativa ante la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN, lo que se demuestra con la expedición de la Resolución 00108 del 16 de febrero de 2021 proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, la cual confirmó en todas sus partes la resolución atacada.

V. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

La cuantía se estima en CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO SESENTA PESOS (\$4.269.439.260) valor que se deriva de la suma de la sanción impuesta más lo correspondiente al monto del IVA suspendido y que a hoy se pretende afectar con la Póliza específica.

VI. MANIFESTACIÓN JURAMENTADA

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se han presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los hechos descritos en la presente solicitud.

VII. ANEXOS

- 7.1. Poder otorgado por el Representante Legal de la sociedad PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S
- 7.2. Certificado de Existencia y Representación de PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S
- 7.3. Copia del REA
- 7.4. Copia de la Resolución Sanción No. 526 del 26 de octubre de 2020.
- 7.5. Copia de la Resolución confirmatoria No. 00108 del 16 de febrero de 2021.
- 7.6. Copia de la Resolución Sanción proferida dentro del expediente TL-2013-2020-00278.
- 7.7. Comprobante de notificación de la Resolución confirmatoria No. 00108 del 16 de febrero de 2021.

VIII. NOTIFICACIONES

La parte convocada recibirá notificaciones en la carrera 8 No. 6C-38 edificio San Agustín, y dirección de correo electrónico: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co

La parte convocante recibirá notificaciones en la Calle 100 # 11ª - 35 Piso 3, Bogotá y/o en los correos electrónicos y en los siguientes correos electrónicos: rafael.e.vesga@pwc.com,

olga.l.medina@pwc.com,
angie.paola.herrera.marquez@pwc.com.

paola.andrea.gomez.garcia@pwc.com,

Atentamente,



Rafael Eugenio Vesga Pérez

C.C. 91.391.508

TP 217.064 del C.S.J

Apoderado judicial de PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S



ANGIE PAOLA Herrera Marquez (CO) <angie.paola.herrera.marquez@pwc.com>

Envío 1 / Solicitud de conciliación / Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 / Proveedora Internacional de Taladros S.A.S

1 mensaje

ANGIE PAOLA Herrera Marquez (CO) <angie.paola.herrera.marquez@pwc.com>

4 de junio de 2021, 15:08

Para: conciliacionadtvasantamarta@procuraduria.gov.co

CC: "OLGA LIZETH Medina (CO)" <olga.l.medina@pwc.com>

Cordial saludo,

A continuación se radica la Solicitud de conciliación prejudicial, a nombre de la compañía Proveedora Internacional de Taladros S.A.S, la cual se remite en 3 envíos.

--

Angie Paola Herrera Márquez

PwC | Asistente

Email: angie.paola.herrera.marquez@pwc.com

PricewaterhouseCoopers SLT Ltda.

www.pwc.com

3 archivos adjuntos



1. Solicitud de conciliación EXP 274.pdf

552K



2. Poder especial amplio y suficiente para presentar solicitud de conciliación extrajudicial.pdf

2364K



3. RESOLUCION DE SANCION 0129 EXP 00278 (1).pdf

15601K



ANGIE PAOLA Herrera Marquez (CO) <angie.paola.herrera.marquez@pwc.com>

Envío 2 / Solicitud de conciliación / Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 / Proveedor Internacional de Taladros S.A.S

1 mensaje

ANGIE PAOLA Herrera Marquez (CO) <angie.paola.herrera.marquez@pwc.com>

4 de junio de 2021, 15:08

Para: conciliacionadtvasantamarta@procuraduria.gov.co

CC: "OLGA LIZETH Medina (CO)" <olga.l.medina@pwc.com>

--

Angie Paola Herrera Márquez

PwC | Asistente

Email: angie.paola.herrera.marquez@pwc.com

PricewaterhouseCoopers SLT Ltda.

www.pwc.com

5 archivos adjuntos



7. Comprobante notificación 00274.pdf

141K



8. Radicado No. 20214020978152.pdf

27K



4. Certificado de Camara y Comercio Proveedor Jun 2021.pdf

156K



5. DIAN NUMERO ADMINISTRATIVO 0126.pdf

1665K



6. Res 1082021-02-23-131314.pdf

7173K



ANGIE PAOLA Herrera Marquez (CO) <angie.paola.herrera.marquez@pwc.com>

Envío 3 / Solicitud de conciliación / Resolución No. 526 del 26 de octubre de 2020 / Proveedor Internacional de Taladros S.A.S

1 mensaje

ANGIE PAOLA Herrera Marquez (CO) <angie.paola.herrera.marquez@pwc.com>

4 de junio de 2021, 15:09

Para: conciliacionadtvasantamarta@procuraduria.gov.co

CC: "OLGA LIZETH Medina (CO)" <olga.l.medina@pwc.com>

--

Angie Paola Herrera Márquez

PwC | Asistente

Email: angie.paola.herrera.marquez@pwc.com

PricewaterhouseCoopers SLT Ltda.

www.pwc.com

2 archivos adjuntos



9. Comprobante de envío a la convocada-Radicado No. 000E2021903882 PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S.A.S..pdf
82K



10. RESOLUCION DE SANCION AD 0126 EXP 00274 (1).pdf
16082K